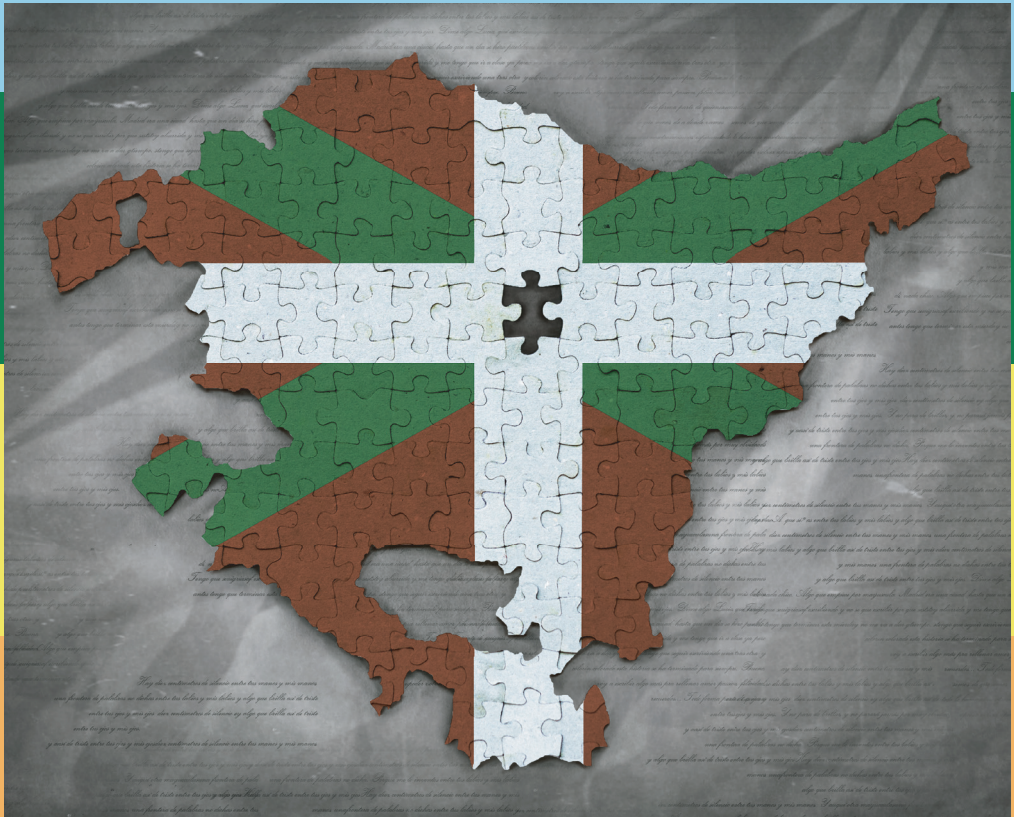


Esther Beceiro | M.^a Lourdes Fernández
Jorge Rodríguez | Carlos Villán

UNA COMISIÓN DE LA VERDAD COMO MECANISMO DE RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA EN GUIPÚZCOA

EGIAREN BATZORDE BAT, GIPUZKOAN MEMORIA HISTORIKOA BERRESKURATZEKO MEKANISMOA



aEDID/|

Asociación Española
para el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos

Una comisión de la verdad
como mecanismo de recuperación
de la memoria histórica en Guipúzcoa

Esther Beceiro | M.^a Lourdes Fernández

Jorge Rodríguez | Carlos Villán

Una comisión de la verdad como mecanismo de recuperación de la memoria histórica en Guipúzcoa

La publicación de esta obra ha sido subvencionada por la Diputación Foral de Gipuzkoa
Gipuzkoako Foru Aldundiak diruz lagundu du lan honen argitalpena

Primera edición: marzo de 2016
Lehen argitalpena: 2016ko martxo

© Esther Beceiro García
María Lourdes Fernández Manzano
Jorge Rodríguez Rodríguez
Carlos Villán Durán

© de esta edición:
© argitalpen honena:

Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
Párroco Camino 19, 3.º D
33700 Luarca. Asturias. España
info@aedidh.org
www.aedidh.org

Traducción: Ramon Olasagasti (Bakun S.L.)
Itzulpena: Ramon Olasagasti (Bakun S.L.)

Imagen de portada: Joshué Guerrero
Azaleko irudia: Joshué Guerrero

ISBN: 978-84-608-7030-2

Permitida la reproducción siempre que se cite la fuente y no se altere ni se modifique ninguno de los pasajes reproducidos.

Baimenduta dago erreprodukzioa, betiere iturria aipatuta eta ezin da inolako aldaketarik egin erreproduzitutako pasarteetan.

Los grandes países no son aquellos que no han tenido épocas oscuras y de barbarie, son los que pudieron examinarlas sin temores para así superarlas.

Leo VALLADARES, comisionado nacional para la Protección de los Derechos Humanos de Honduras.

ÍNDICE

Introducción	9
1. Estándares internacionales en comisiones de la verdad	13
1.1 La importancia del derecho a la verdad en sociedades postconflicto	13
1.2 Las comisiones de la verdad: un camino hacia un necesario encuentro con la realidad del pasado.....	16
1.3 Estándares comunes a las comisiones de la verdad	19
1.3.1 ¿Cuándo está un Estado preparado para crear una comisión de la verdad?	20
1.3.2 Aprobación del mandato	21
1.3.3 Competencia <i>ratione temporis</i>	21
1.3.4 Competencia <i>ratione materiae</i>	22
1.3.5 Comisionados	22
1.3.6 Informe final y recomendaciones	23
2. Experiencias nacionales en comisiones de la verdad	25
2.1 Argentina.....	25
2.2 Alemania	27
2.3 Irlanda del Norte	29
2.4 Sudáfrica	31
2.5 El Salvador.....	32
2.6 Brasil.....	34
2.7 Chile.....	34
3. Una comisión de la verdad como instrumento de consolidación de la paz y reparación a las víctimas de Guipúzcoa	37
3.1 Dos estándares diferenciados: las víctimas del franquismo y las víctimas del terrorismo. La comisión de la verdad como instrumento de unificación	38
3.2 Una comisión de la verdad en Guipúzcoa: ¿una tercera vía?	41
3.2.1 Características de una comisión de la verdad en Guipúzcoa.....	43
Conclusiones	49
Bibliografía	53

INTRODUCCIÓN

El cese definitivo de la violencia armada de ETA en octubre de 2011 abrió en el País Vasco un proceso de transición hacia la paz, en el que se debía dilucidar el mejor modo de enfrentar un pasado de violencia. Este proceso de transición se añade al que se enfrenta el conjunto del Estado español tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, todavía pendiente de resolución.

Las carencias en lo que respecta a los derechos de las víctimas del franquismo y la Guerra Civil, tal y como recogen pronunciamientos muy cualificados de órganos del sistema universal de protección de derechos humanos,¹ siguen sin ser abordadas, por lo que no se cumple con las obligaciones internacionales contraídas por España en esa materia.

El País Vasco, por tanto, se encuentra ante dos procesos de justicia de transición que, a pesar de referirse a victimarios distintos, no son independientes entre sí.² En efecto, la extendida asunción de que ETA surgió como una organización armada

¹ Los más recientes son los siguientes:

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS: *Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de España*, doc. CCPR/C/ESP/CO/6, 14 de agosto de 2015.

Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas: *Observaciones finales del Comité contra la Tortura: España*, doc. CAT/C/ESP/CO/6, 15 de mayo de 2015.

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: *Informe del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias. Misión a España*, doc. A/HRC/27/49/add.1, 2 de julio de 2014; *Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Misión a España*, doc. A/HRC/27/56/add.1, 22 de julio de 2014.

² La categorización de la situación actual española como transicional ha sido rebatida por Felipe Gómez Isa, para quien el español «es un caso sui generis, dado que se están aplicando las herramientas de la justicia transicional a un caso que, en puridad, no es transicional, ya que la transición a la democracia tras una larga dictadura tuvo lugar exitosamente en la segunda mitad de la década de los 70. Es este pretendido éxito de la transición española a la democracia el que se está cuestionando hoy, más de 30 años después desde algunos sectores, al calor del candente debate social, político y mediático sobre la recuperación de la memoria histórica de la Guerra Civil y el franquismo. Este cuestionamiento lleva a algunos a reclamar una revisión de la transición española, para replantear “su función de mito fundacional de la democracia y del estado de derecho en España”». F. GÓMEZ ISA: «Retos de la justicia transicional en contextos no transicionales. El caso español», en S. RIPOL CARULLA y C. VILLÁN DURÁN (dirs.): *Justicia de transición: El caso de España*, Barcelona: ICIP, 2012, p. 175.

dirigida a combatir la represión del orden franquista en el País Vasco³ introduce una clara conexión entre ambos escenarios.

La investigación de lo ocurrido a lo largo de todo un período de violación sistemática de derechos humanos se encuentra entre las principales obligaciones de los Estados una vez concluido ese período represivo.⁴ Independientemente del carácter de esa investigación (judicial o extrajudicial), el conocimiento del pasado es un instrumento fundamental para acometer la tarea a la que todas las sociedades han de enfrentarse cuando se inicia el camino hacia la paz y la democracia para conseguir la reconciliación.

El presente estudio abarca dos campos: el judicial y el extrajudicial. El primero de ellos porque el conocimiento de una parte de lo ocurrido en el pasado que sea constitutiva de delito y produzca la incoación de una investigación judicial cumplirá con las obligaciones que emanan del derecho a la justicia. El segundo, porque existen hechos que no son punibles pero deben ser conocidos por la sociedad, puesto que también forman parte indispensable de su historia y el pueblo que no la conoce está condenado a repetirla.

El escenario al que nos enfrentamos en Guipúzcoa, extrapolable a la generalidad del País Vasco, es sumamente complejo, pues como se pondrá de manifiesto a lo largo del estudio, la pluralidad de actores nos obliga a ser muy cautelosos a la hora de abordar la investigación de los crímenes cometidos en este territorio histórico.

Sin embargo, nuestro convencimiento de que se deben aplicar en todo caso los principios que rigen el derecho internacional de los derechos humanos (DIDH) nos proporciona la base necesaria para un análisis jurídico objetivo.

El DIDH ha sido definido por Villán Durán como un:

... sistema de principios y normas que regula un sector de las relaciones de cooperación institucionalizada entre Estados de desigual desarrollo socioeconómico y poder, cuyo objeto es el fomento del respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales universalmente reconocidos, así como el establecimiento de mecanismos para la garantía y la protección de tales derechos y libertades, los cuales

³ R. LÓPEZ ROMO: *Informe Foronda: los contextos históricos del terrorismo en el País Vasco y la consideración social de las víctimas. 1968-2010*, Vitoria-Gasteiz: Gobierno Vasco e Instituto de Historia Social Valentín Foronda de la Universidad del País Vasco, 2014, p. 27.

⁴ Vid. J. CHINCHÓN ÁLVAREZ: *Derecho Internacional y transiciones a la democracia y la paz: hacia un modelo para el castigo de los crímenes del pasado a través de la experiencia iberoamericana*, Madrid: Parthenon, 2007, pp. 235-272.

se califican de preocupación legítima y, en algunos casos, de intereses fundamentales para la actual comunidad internacional de Estados en su conjunto.⁵

La universalidad de los derechos humanos, es decir, la aplicación de los mismos estándares de derechos humanos a toda persona por el simple hecho de serlo y en cualquier parte del mundo como consecuencia de la dignidad humana, es el fundamento sobre el que reposa la idea principal del presente estudio: la defensa de los derechos humanos a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, derechos de los que es titular toda víctima de violaciones de sus derechos humanos tanto en el País Vasco como en cualquier otra parte del mundo.

La aplicación de estos estándares al País Vasco, y en concreto a Guipúzcoa, debe tener presente la existencia de varios colectivos de víctimas durante la Guerra Civil, el franquismo y la posterior transición política, como consecuencia de la aparición del movimiento armado ETA en los años sesenta. Esta situación trae aparejada que el conocimiento de lo ocurrido durante el franquismo haya de incluir, junto a los crímenes perpetrados por las fuerzas franquistas, los cometidos por ETA durante aquellos años, porque son parte indispensable de la memoria histórica de la sociedad guipuzcoana.

Por otro lado, un sector de la doctrina sostiene que la represión del régimen franquista no acabó en 1975, pues el aparato represor siguió funcionando después de constituido un Parlamento democrático en 1977, como consecuencia directa de la falta de aplicación de políticas destinadas a evitar la repetición de los hechos.⁶ Debido a ello, una investigación objetiva sobre las víctimas del franquismo debe abarcar, del mismo modo, los primeros años de la transición a la democracia y, en consecuencia, considerar también como eventuales victimarios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que nacieron con la [Constitución española](#) en diciembre de 1978 y que protagonizaron la represión institucional ejercida en el País Vasco durante aquella época.

⁵ C. VILLÁN DURÁN: *Curso de derecho internacional de los derechos humanos*, Madrid: Trotta, 2002, pp. 85-86.

⁶ Autores como Gonzalo Wilhelmi han sostenido esta teoría sobre la naturaleza represiva de la transición, en contra de la generalizada teoría que considera este período histórico como pacífico. *Vid.* G. WILHELMI: «[Las otras víctimas de una transición nada pacífica](#)», comunicación presentada al I Congreso de Víctimas del Franquismo, Rivas Vaciamadrid: 2012.

Metodología

Para la redacción de este trabajo se utilizarán como fuente primaria los principales y más recientes pronunciamientos y resoluciones de los órganos de protección de derechos humanos, que reiteraron la obligación de España de investigar su pasado represivo. Igualmente, se utilizará la doctrina especializada en justicia de transición, porque ha desarrollado a lo largo del tiempo una rica base jurídica que afirma que la búsqueda de la verdad de lo ocurrido a lo largo de un período conflictivo debe ser considerada una obligación internacional para los Estados, teniendo como base una interpretación expansiva de los principales tratados internacionales de protección de derechos humanos y las propias sentencias de los tribunales internacionales competentes, como la [Corte Interamericana de Derechos Humanos](#) o el [Tribunal Europeo de Derechos Humanos](#).

El presente estudio se divide en tres capítulos que están íntimamente relacionados entre sí, a saber:

En el primer capítulo se abordará la importancia del derecho a la verdad como elemento indispensable de la justicia de transición, en el sentido de que tanto las víctimas como la sociedad en su conjunto tienen el derecho a conocer lo sucedido durante un período histórico de violaciones masivas de derechos humanos. Por otro lado, también se analizarán las comisiones de la verdad como el mecanismo más indicado para satisfacer este derecho. Finalmente, se identificarán las características que deben revestir las comisiones de la verdad para que puedan realizar efectivamente su función.

En el segundo capítulo se analizarán siete experiencias nacionales de comisiones de la verdad en las que los Estados aplicaron los estándares previamente estudiados en el capítulo primero. La selección de esas experiencias nacionales ha respondido principalmente a dos criterios: el tipo de violaciones que afectaron a esos Estados y las características con las que contaron las respectivas comisiones de la verdad, las cuales puedan aportar distintas enseñanzas para el contexto vasco por las virtudes o defectos de los que adolecieron.

En el tercer y último capítulo se ofrece un breve estudio sobre la situación actual de las víctimas de las diferentes violaciones de derechos humanos que se perpetraron en Guipúzcoa.

Como conclusión, se formula una propuesta sobre la pertinencia de constituir una comisión de la verdad para superar el conflicto vasco.

1 | ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN COMISIONES DE LA VERDAD

1.1 La importancia del derecho a la verdad en sociedades postconflicto

La justicia de transición, al contrario de lo que pudiera parecer, no consiste en una clase especial o adulterada de «justicia», sino que comprende toda una serie de medidas destinadas a que esta, entendida en un sentido amplio, sea efectivamente implementada en aquellas sociedades que hayan salido de un conflicto armado o de un período dictatorial.

Los derechos cuyo respeto persigue la justicia de transición son cuatro: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Autores como Juan Méndez, jueces de la [Corte Interamericana de Derechos Humanos](#) como Cançado Trindade y Abreu Burelli, y relatores del sistema extraconvencional de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas como Pablo de Greiff han reiterado la necesidad de que estos cuatro derechos hayan de ser respetados de forma conjunta. Una interacción conjunta de todos ellos redundaría en una mejor implementación de cada uno por separado. Concretamente, Pablo de Greiff ha afirmado:

La insuficiencia de cada una de las áreas de acción por separado ofrece un poderoso incentivo para buscar modalidades de interacción que permitan superar sus respectivas limitaciones. La experiencia internacional, así como los estudios, sugieren que la aplicación íntegra de los cuatro componentes del mandato [verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición] ofrece a las diversas partes interesadas, principalmente las víctimas, razones más poderosas para comprender las medidas como intentos de hacer justicia tras las violaciones cometidas que su aplicación descoordinada o fragmentaria.⁷

El presente estudio se centra en uno de los cuatro derechos anteriormente citados, el derecho a la verdad, y concretamente en uno de los mecanismos de referencia para conseguir su concreción: las comisiones de la verdad. Sin embargo,

⁷ CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS: *Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff*, doc. A/HRC/21/46, 9 de agosto de 2012, párr. 22.

su completo respeto, tanto en su vertiente individual como colectiva, dependerá de que los otros tres derechos también lo sean.

En efecto, en el caso de la interrelación entre verdad y reparación, la adopción en exclusiva de medidas reparatorias, dejando de lado aquellas orientadas al conocimiento de la verdad, podría ser interpretada como una forma de «compra» del silencio de las víctimas, sobre todo si parte importante de ese paquete de reparaciones lo conforman beneficios económicos. En este mismo sentido, los *Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones* incluyen como una de las medidas orientadas a la satisfacción de las víctimas: «[l]a verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad».⁸ El conocimiento de la verdad es, pues, un medio de reparación indispensable para una *restitutio ad integrum*.

Con respecto al derecho a la justicia, la defensa exclusiva de este derecho, en ausencia de un mecanismo extrajudicial de investigación que complete la labor de los tribunales, producirá que la verdad que vaya a conocer la sociedad sea solo aquella que emane de las resoluciones judiciales. De esta forma, el conocimiento de otras circunstancias necesarias para que la sociedad obtenga una comprensión amplia de la verdad sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado será muy limitado. Y es que, en casos donde solo se cuenta con la verdad judicial, el relato que llega a la sociedad será un compendio de esas resoluciones judiciales, algo insuficiente para hallar la verdad colectiva, debido a que aquellos extremos que no estén judicializados no podrán llegar a ser conocidos.

Por último, el *Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición* identificó el conocimiento de la verdad como uno de los signos distintivos de las garantías de no repetición, en lo que al conocimiento de la identidad de los victimarios y sus colaboradores se refiere.⁹ Un claro ejemplo de esta conexión la encontramos en una medida típica de la «no repetición» como es la depuración de las instituciones públicas tras el advenimiento de la democracia; el conocimiento de la identidad de aquellas

⁸ ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS: *Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones*, doc. A/RES/60/147, 21 de marzo de 2006, párr. 22.b).

⁹ ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS: *Promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición*, doc. A/68/345, 23 de agosto de 2013, párr. 37.

personas que desde la Administración participaron en la preparación y/o ejecución de violaciones de derechos humanos producirá que una vez constituido un nuevo modelo de Administración, tales personas deban ser separadas de sus antiguos cargos, como muestra inequívoca de ruptura con el sistema anterior.

Siguiendo con la importancia de la verdad en un período de transición, es menester referirse a los beneficios que su conocimiento implicará para la reconciliación de una sociedad golpeada por un conflicto armado o una dictadura. La reconciliación ha sido uno de los principales fines que se han perseguido con la creación de las comisiones de la verdad. El más claro ejemplo lo tenemos en el nombre que adoptó una de las comisiones más prominentes, la sudafricana: [Comisión de la Verdad y la Reconciliación](#).

Este concepto ha sido definido por Louis Kriesberg como la «elaboración de un acuerdo conciliador mutuo entre personas o grupos antagónicos o que lo fueron».¹⁰ Por su parte, para Jorge Enrique Ibáñez la reconciliación supone:

... aquel proceso y fin que deben perseguir las sociedades que quieren dejar atrás las situaciones de violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario mediante la garantía de los derechos de las víctimas y el logro y mantenimiento de la paz.¹¹

El papel del conocimiento de la verdad para la reconciliación, empero, es sumamente complejo, pues son muchas las voces que interpretan que la verdad, lejos de unir a la sociedad tras un conflicto, lo que produce es lo contrario: la reapertura de viejas rencillas; el (re)conocimiento público de lo ocurrido puede repercutir en una reanudación del conflicto o en una nueva polarización de la sociedad.

A la hora de gestionar una etapa de transición, cada Estado, atendiendo a sus propias singularidades, ha optado por la elección de un tipo de medidas u otro, con el objetivo de poner fin a las hostilidades y arribar a un escenario de paz social y convivencia pacífica. En la experiencia comparada ha habido Estados que han optado por el silencio (es decir, la negación de la verdad) como vía de reconciliación nacional. España, por ejemplo, ha decidido no aplicar medida alguna para que se conozca, judicial o extrajudicialmente, lo acontecido en el pasado, argumentando

¹⁰ L. KRIESBERG: «Paths to Varieties of Inter Communal Reconciliation», ponencia presentada a la VII Conferencia General de la Organización Internacional para la Investigación sobre la Paz, Durban: 22-26 de junio de 1998.

¹¹ J. E. IBÁÑEZ NAJAR: *Justicia Transicional y las Comisiones de la Verdad*, Bogotá, Otzenhausen y Madrid: Instituto Berg, 2014, p. 396.

que gracias a esa decisión la sociedad, finalmente, consiguió reconciliarse.¹² No obstante, los acontecimientos que se sucedieron tras la aprobación de la [ley de amnistía](#) de 1977 (golpe de Estado fallido en 1981 y varios episodios de violencia paraestatal, entre otros) nos obliga a reflexionar sobre si el mirar hacia otro lado es la mejor manera de reconciliar a una sociedad dividida, como la española entonces, durante más de cincuenta años.

Es cierto que las características de cada sociedad repercuten en el tipo de medidas que se deben tomar para poder llegar a la reconciliación y que, en concreto, el conocimiento de la verdad puede resultar contraproducente según las circunstancias (falta de depuración de las Fuerzas Armadas y Policía, por ejemplo). El conocimiento de la verdad y la reconciliación social no están, sin embargo, siempre unidos, debido a que es posible que la verdad se conozca pero no repercuta en una posterior reconciliación de la sociedad, porque muchas sociedades necesitan algo más que verdad para reconciliarse.¹³ Sin embargo, nunca se dará la situación opuesta, esto es, que la falta de verdad tenga como consecuencia directa la reconciliación. Por tanto, puede haber verdad sin reconciliación posterior, pero nunca reconciliación sin verdad.

1.2 Las comisiones de la verdad: un camino hacia un necesario encuentro con la realidad del pasado

Teniendo presente la importancia del conocimiento de la verdad sobre los sucesos del pasado para una correcta gestión del período transicional, pasaremos a examinar las comisiones de la verdad como mecanismos de investigación extrajudicial de las violaciones de derechos humanos.

La [Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos \(OACNUDH\)](#) ha definido las comisiones de la verdad como:

... órganos de investigación oficialmente autorizados, de carácter temporal y no judicial, [los cuales] disponen de un plazo relativamente corto para tomar declaraciones, realizar investigaciones y estudios y celebrar audiencias públicas, antes de ultimar su labor con la publicación de un informe¹⁴

¹² CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS: *Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff. Adición. Misión a España: Comentarios del Estado al informe del Relator Especial*, doc. A/HRC/27/56/add.3, 17 de septiembre de 2014, párr. 7.

¹³ OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS: *Instrumentos del Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto. Comisiones de la Verdad*, Naciones Unidas: Nueva York y Ginebra, 2006, p. 2.

¹⁴ *Ibid.*, p. 1.

Al encontrarnos con un órgano cuya función principal es la investigación de hechos violatorios de derechos humanos, el problema principal que se nos presenta es la compatibilidad de las funciones de los tribunales judiciales con las comisiones de la verdad. El *Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad*, en su definición sobre las comisiones de la verdad, estableció:

... la finalidad de las comisiones no consistirá en reemplazar a la justicia, tanto civil o administrativa como penal. En particular, únicamente los tribunales penales tienen competencia para determinar la responsabilidad penal individual.¹⁵

En efecto, esta división de funciones entre las comisiones de la verdad y el poder judicial no ha de comprender necesariamente un solapamiento de los trabajos de ambas instituciones sino que, como vimos anteriormente, su complementariedad es absolutamente necesaria para poder obtener un *conocimiento íntegro* sobre la verdad de lo ocurrido. Ello así porque por conocimiento íntegro interpretaremos la suma de la verdad judicial (que podríamos ligar a las responsabilidades penales individuales), la cual puede ser hallada en sede judicial, y de la verdad extrajudicial (una verdad más ligada a un conocimiento más amplio de lo sucedido, porque es la sociedad la que demanda conocer lo ocurrido durante un período de violaciones de derechos humanos), cuya averiguación correspondería a las comisiones de la verdad.¹⁶ Solo una combinación de ambas instituciones puede redundar en un efectivo e íntegro conocimiento de la verdad.

En este mismo sentido, el Ararteko sostuvo en 2012 que «las comisiones de la verdad sólo contribuyen positivamente a la mejoría de la situación general de los derechos humanos cuando van acompañadas de otros instrumentos, como los procesamientos judiciales».¹⁷ Y es que en un escenario en el que la única medida transicional implementada sea una comisión de la verdad, habiéndose omitido los procesos judiciales, favorecería la impunidad de los hechos violatorios de derechos humanos.

¹⁵ Doc. E/CN.4/2005/102/add.1, 8 de febrero de 2005, principio 8.

¹⁶ La búsqueda de la verdad global a través de varios procesos penales tiene el peligro de ser fuertemente fragmentaria, es decir, se conocerían los hechos de una forma aislada, sin conexión entre ellos. Vid. R. UPRIMNY YEPES y M. P. SAFFON SANÍN: «Derecho a la verdad: alcance y límites de la verdad judicial», en R. UPRIMNY YEPES (dir.): *Justicia transicional sin transición. Verdad, justicia y reparación para Colombia*, Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, 2006, p. 155.

¹⁷ ARARTEKO: *Verdad, justicia y reparación para las víctimas de la dictadura franquista: significado y políticas públicas en la Comunidad Autónoma del País Vasco*, Vitoria, 2012, p. 12.

Habiendo afirmado la importancia del respeto al derecho a la verdad para una efectiva transición a la paz y/o democracia y la utilidad de las comisiones de la verdad para que este derecho se concrete, hemos de precisar que no simplemente por el hecho de que se cree una comisión de la verdad el derecho a la verdad va a quedar automáticamente satisfecho. Una de las máximas que se adscribe a la creación de las comisiones de la verdad es que no existe una fórmula única de comisión, pues un país que considere su creación ha de guiarse por «las circunstancias en las que se encuentre en el momento de la constitución de la comisión».¹⁸ Es por ello que si una comisión no se constituye atendiendo a las necesidades del país en el que va a desempeñar sus funciones, difícilmente podrá respetar en su totalidad el derecho a la verdad tanto de víctimas como de la sociedad.

El caso que mejor ejemplifica esta afirmación se dio en Chile. Tras la salida del dictador Pinochet del poder, se creó en 1990 una comisión de la verdad ([Comisión Rettig](#)), cuyo mandato estaba centrado en la investigación de «las situaciones de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte».¹⁹ Es decir, dejaba fuera de toda investigación aquellos hechos que no concluyeron con el fallecimiento de la víctima; ello impidió que la comisión investigara las torturas que no llegaron a causar la muerte de quienes las sufrieron. El reconocimiento de este vacío propició la constitución en el año 2003 de la [Comisión Valech](#), cuyo mandato precisó:

... sólo en la medida que se conozca en forma completa la verdad acerca de las violaciones de derechos humanos en Chile, se reconozca a sus víctimas y se repare el injusto mal causado, el país podrá avanzar en forma efectiva por el camino de la reconciliación y el reencuentro.²⁰

Es por ello que el mandato de esta segunda comisión estaba dirigido a cubrir las carencias de las que adoleció la [Comisión Rettig](#). El art. 1 del decreto de creación de esta nueva comisión determinaba que su labor iba estar orientada a:

... determinar, de acuerdo a los antecedentes que se presenten, quiénes son las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

¹⁸ J. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: *El derecho a la verdad en la justicia de transición española*, Lueca: AEDIDH, 2014, p. 97.

¹⁹ Decreto Supremo n.º 355, de 25 de abril de 1990.

²⁰ Decreto Supremo n.º 1040, de 26 de septiembre de 2003.

La importancia de que una comisión de la verdad sea lo más fiel posible a las necesidades de la sociedad durante el período de transición también fue reiterada por el [Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición](#) en su visita *in loco* a España en 2014. En su informe final el Relator recomendó al Estado español la creación de un «mecanismo oficial de búsqueda de la verdad», el cual debería tener competencia para cumplir el siguiente mandato: sistematizar la información existente, superar la fragmentación y dispersión de la información y esfuerzos, trazar un plan ordenado de investigaciones, establecer metodologías y la homologación de las mismas, acceder a archivos y fondos documentales oficiales y no oficiales, incluir un proceso oficial de validación, presentación formal y diseminación de sus conclusiones que ofrezca un reconocimiento oficial a las víctimas y promover la participación de estas y sus familiares en el proceso y regirse por la noción de derechos, independientemente de la identidad o filiación política tanto de víctimas como de perpetradores.²¹ La falta de adecuación del mandato de una futura comisión extrajudicial a estos requerimientos pudiera suponer que la verdad global sobre lo sucedido durante la Guerra Civil y el franquismo no llegue a ser del todo conocida por la sociedad.

1.3 Estándares comunes a las comisiones de la verdad

A pesar de que ya hemos reiterado que no existe un modelo único y uniforme para este tipo de comisiones, apoyándonos en la experiencia comparada, sí que podemos averiguar ciertos estándares comunes que nos ayudarán a construir una teoría general sobre las comisiones de la verdad. Estos estándares los dividiremos en seis categorías que desarrollaremos a continuación: momento adecuado para establecer una comisión de la verdad, aprobación del mandato, competencia *ratione temporis*, competencia *ratione materiae*, elección de los comisionados, informe y recomendaciones.

²¹ CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS: *Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff. Adición. Misión a España: Comentarios del Estado al informe del Relator Especial*, doc. A/HRC/27/56/add.3, 17 de septiembre de 2014, párr. 103 g).

1.3.1 ¿Cuándo está un Estado preparado para crear una comisión de la verdad?

Este punto fue desarrollado por la OACNUDH,²² quien identificó tres aspectos esenciales a tener en cuenta, a saber:

- Voluntad política. Únicamente mediante una decisión clara e inequívoca del Gobierno (o del Poder Legislativo, según el modo de aprobación del mandato) podrá crearse una comisión de la verdad con las debidas garantías para un adecuado funcionamiento.
- Finalización del período de violaciones de derechos humanos. En caso de que el conflicto no haya finalizado, es posible que tanto las víctimas como los testigos teman hablar públicamente o que se les vea cooperando con la comisión de la verdad. Incluso la propia comisión puede verse amenazada durante el desarrollo de sus tareas.
- Interés de víctimas y testigos en que se realice la investigación.

Una vez decidido que se va a emprender una investigación de este tipo, la OACNUDH considera básico el respeto a los siguientes principios:²³

- Amplio entendimiento de la justicia de transición: como hemos venido poniendo de manifiesto, tanto la decisión de emprender o no una investigación, como el instrumento elegido para liderarla, debe ajustarse a las características del Estado. Las comisiones de la verdad no son el único medio de investigación extrajudicial, sino que en distintas latitudes han sido los defensores del pueblo, los ayuntamientos u otras instituciones las que han llevado a cabo esta labor.²⁴ En este mismo sentido, ya analizamos que las comisiones de la verdad deben amoldar sus características al entorno en el que vayan a desarrollar sus actuaciones.
- Independencia operacional: al ser las comisiones un instrumento creado por el poder político, se corre el riesgo de que su labor quede excesivamente ligada a la voluntad de este. La independencia de estas comisiones de la verdad se reflejará en el grado de cooperación que reciban

²² OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS: *op. cit.*, p. 3.

²³ *Ibid.*, pp. 5-6.

²⁴ INTERNATIONAL CENTER FOR TRANSITIONAL JUSTICE: *Verdad y Memoria*.

de los funcionarios públicos, las facilidades para acceder a los archivos pertinentes, o si cuentan con una financiación adecuada.

- Apoyo internacional: como acabamos de poner de manifiesto respecto a la participación del poder político interno, los Estados extranjeros también han de colaborar con las comisiones de la verdad que así lo necesiten tanto en lo relativo a su financiamiento como en el acceso a determinados archivos.

1.3.2 *Aprobación del mandato*

La aprobación del mandato normalmente ha sido competencia del Poder Ejecutivo o del Legislativo. La principal diferencia entre ambos casos se centra en el consenso previo entre las diferentes fuerzas políticas: el decreto presidencial contiene la voluntad exclusiva del presidente, el cual, normalmente, habrá decidido de forma unilateral el contenido del mandato de la comisión. Si, en cambio, la creación de la comisión se hace por ley, el consenso será mayor pues la mayor parte de las fuerzas políticas habrán respaldado su establecimiento.

Sin embargo, en cualquier caso, el éxito o el fracaso de la comisión no dependerán del tipo de disposición que la haya creado, sino de que la sociedad respalde el contenido de dicho mandato. En efecto, las consultas previas a la sociedad civil serán fundamentales para que la investigación que emprenda la comisión se centre en los requerimientos de las víctimas, requisito, por otra parte, indispensable para garantizar una independencia que, como vimos anteriormente, se le demandará desde un principio. En caso contrario, es decir, que la comisión se construya alejada del discurso público, «es muy posible que haya una gran falta de compromiso social con el trabajo de la comisión, al verse aquel alejado de los problemas o de las mismas experiencias que la sociedad tuvo que sufrir».²⁵

1.3.3 *Competencia ratione temporis*

Esta competencia responde tanto al intervalo temporal objeto de investigación, como al tiempo que tendrá la comisión para realizar su labor. El tiempo investigado habrá de ser aquel en el que las violaciones de derechos humanos tuvieron lugar, o al menos las más graves. Ciertas comisiones se han centrado en un período de tiempo bastante amplio, mientras que otras en un hecho concreto. No obstante, algunas comisiones han optado por utilizar cierta generalización en el lenguaje,

²⁵ J. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: *op. cit.*, p. 102.

usando para referirse al período investigado expresiones como, por ejemplo, «desde el inicio de las hostilidades».

Por otro lado, el tiempo del que dispondrá la comisión para realizar sus trabajos ha de ser adecuado para que los pueda realizar de la forma más precisa posible. Sin embargo, es recomendable que no exceda de los dos años, pues se corre el riesgo de que la sociedad pierda el interés en la labor de la comisión.

1.3.4 *Competencia razione materiae*

Los hechos objeto de investigación no deben ser definidos de forma específica, ni han de ser restringidos a un tipo de violación concreta de derechos humanos (véase el [caso ya comentado de Chile](#)). Al igual que ocurría con la competencia *ratione temporis*, es aconsejable la utilización de terminología que no restrinja sobremanera el ámbito de actuación de la comisión. Como ejemplo, la [Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sierra Leona](#) decidió que su mandato no se limitaría a las violaciones de derechos humanos que podrían constituir delito de acuerdo con la legislación nacional o internacional, ni a las violaciones cometidas por Estados o Gobiernos, apelando a que fueran investigadas «violaciones y abusos» sin más calificativos.²⁶

1.3.5 *Comisionados*

La elección de los comisionados es fundamental para el éxito o el fracaso de la comisión. Elemento, a su vez, íntimamente ligado a la independencia operacional de la que ha de disfrutar la comisión. Igualmente, la elección del personal adscrito a la comisión ha de estar presidida por la pericia del mismo en la defensa de los derechos humanos o en otras ramas de vital importancia para el buen desarrollo de los trabajos de la comisión como la judicatura, la educación, la psicología o la historia.

Igualmente, es interesante considerar la inclusión de miembros internacionales dentro de la comisión, aunque en última instancia esta decisión dependerá de lo que la sociedad considere más adecuado.

²⁶ AMNISTÍA INTERNACIONAL: *Verdad, justicia y reparación. Creación de una comisión de la verdad efectiva*, índice AI: POL 30/009/2007, Londres, 11 de junio de 2007, p. 13. Para un análisis más exhaustivo sobre la competencia material de las comisiones de la verdad, véase J. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: *op. cit.*, pp. 106-108.

Por último, se debe preservar el principio de igualdad de género en la composición de toda comisión de la verdad.

1.3.6 Informe final y recomendaciones

El informe final supondrá el legado más duradero de la comisión y, tal y como afirma Jon-Mirena Landa, constituye «una fuente para la educación en derechos humanos y para procesos posteriores. Informes finales bien documentados y con una metodología apropiada y sólida pueden servir como una protección contra el revisionismo de la historia».²⁷

El informe final ha de incluir:

... el mandato, así como el ámbito y el alcance de la comisión; sus procedimientos y métodos de evaluación de pruebas y la ley en que se ha basado; el contexto de la investigación, incluidas las condiciones sociales, políticas y económicas pertinentes, así como información sobre si la comisión contó con la necesaria colaboración del Gobierno y de otras instituciones públicas; las conclusiones de hecho de la comisión y una lista de los documentos y otras pruebas en las que se basan; sus conclusiones basadas en la legislación aplicable y en las conclusiones de hecho, incluido un análisis crítico de las estructuras, políticas y prácticas institucionales; una lista de víctimas (salvo aquellas cuya identidad se oculte con el fin de protegerlas) y sus recomendaciones.²⁸

En cuanto a las recomendaciones, la comisión ha de contar con competencia suficiente para encomendar al Estado, por ejemplo, reforma de instituciones, iniciativas legislativas o reformas de otro calado importantes para obtener una reparación total de las víctimas.

También debe constar el compromiso de los poderes públicos en acatar las recomendaciones que en su día formule la comisión de la verdad.

²⁷ J.-M. LANDA GOROSTIZA: *Bases para la puesta en marcha de una Comisión de la Verdad en Euskadi*, Vitoria: Dirección de Derechos Humanos, Viceconsejería de Justicia, Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Gobierno Vasco, 31 de marzo de 2009, p. 30.

²⁸ AMNISTÍA INTERNACIONAL: *op. cit.*, p. 35.

2 | EXPERIENCIAS NACIONALES EN COMISIONES DE LA VERDAD

A la hora de determinar las características deseables para una posible comisión de la verdad en Guipúzcoa, resulta de especial interés el análisis de las experiencias nacionales en la materia. En las últimas décadas han existido multitud de experiencias de este tipo.²⁹ Sin embargo en este capítulo nos limitaremos a analizar aquellas que, por sus características formales o por su ámbito de estudio, presentan elementos aplicables al caso que nos ocupa.

2.1 Argentina

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) constituye la primera comisión de la verdad que contó con repercusión a nivel internacional, así como la primera que sirvió de referencia para Estados que, posteriormente, se decidieron a seguir este modelo de investigación de violaciones de derechos humanos; todo ello debido, en parte, al gran apoyo interno con el que contó desde el mismo momento de su creación.

La necesidad de Argentina de aplicar medidas dirigidas a conocer la verdad venía siendo reivindicada, incluso, desde los primeros años de la dictadura pues, al contrario de otras situaciones, Argentina contaba con una sociedad civil fuertemente organizada³⁰ cuyas reclamaciones influyeron en gran medida en los progresos a favor del derecho a la verdad que se dieron con el advenimiento de la democracia.

²⁹ Entre la multitud de trabajos publicados respecto a las comisiones de la verdad, puede consultarse con especial interés: P. HAYNER: *Verdades innombrables: el reto de las comisiones de la verdad*, México: S.L. Fondo de Cultura Económica de España, 2008 (edición en español); E. IBÁÑEZ NAJAR: *op. cit.*

³⁰ De entre estas asociaciones destacan la [Asociación Madres de Plaza de Mayo](#), la [Asociación Abuelas de Plaza de Mayo](#) y el [Centro de Estudios Legales y Sociales](#). Para una visión más concreta sobre las acciones emprendidas por estas organizaciones durante la dictadura y la transición argentina, véase: A. GONZÁLEZ BRINGAS: «Abuelas-Madres de Plaza de Mayo: la construcción social de la memoria», en F. GÓMEZ ISA (dir.): *El derecho a la memoria*, Bilbao: Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, 2006, pp. 579-615.

Estos progresos empezaron a verse reflejados durante las mismas elecciones democráticas que siguieron al derrocamiento de las Juntas Militares. Raúl Alfonsín, primer presidente electo tras la dictadura y destacado impulsor de la CONADEP, se presentó a las elecciones con un programa político en el que primaba el no respeto de su Administración a las leyes de autoamnistía y la necesidad de enjuiciamiento de los culpables. Ganó las elecciones con más del 50 % de los votos.

La CONADEP, a pesar de las deficiencias en su funcionamiento,³¹ consiguió tomar declaración a 7000 personas que documentaron 8960 desaparecidos y 365 centros clandestinos de tortura.³²

Sin embargo, el logro más significativo de la CONADEP fue el aporte de información necesaria para que los tribunales, apoyados en su informe final,³³ pudieran incoar una investigación judicial de los hechos. En la conocida como «causa 13», la fiscalía presentó 709 casos repartidos en 78 sesiones públicas y comparecieron 883 testigos de los 1984 inicialmente citados.³⁴ Finalmente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal dictó sentencia condenando a prisión a cinco de los nueve excomandantes militares.

A pesar de que Argentina había seguido fielmente los estándares internacionales apropiados en materia de verdad, justicia y reparación, la falta de depuración de instituciones afines al régimen dictatorial, como la Policía o las Fuerzas Armadas, produjo varios levantamientos militares y revueltas que pusieron en riesgo no solo la continuación de futuros procesamientos judiciales contra los victimarios, sino la estabilidad misma de la joven democracia argentina. Ello tuvo como consecuencia la adopción de las conocidas como «leyes de impunidad»: la ley de punto final³⁵ y la ley de obediencia debida.³⁶ Y, completando el mapa de la impunidad, el Gobierno del presidente Carlos Menem dictó cuatro indultos entre finales de 1989 y 1990 que supusieron el cierre definitivo de cualquier responsabilidad penal por

³¹ La CONADEP, aunque consiguió identificar casi nueve mil casos de desaparición forzada, únicamente la historia de unos cuantos fue retenida como ejemplo en el informe final, por lo que la mayor parte de las víctimas continuó sin ver respetado su derecho a la verdad. Véase F. CAMACHO PADILLA: «La construcción histórica de la represión en Argentina y Chile: las Comisiones de la Verdad como instrumento de narración oficial», *Revista de Historia Iberoamericana*, vol. 7, núm. 1, 2014, p. 58.

³² P. HAYNER: *op.cit.*, p. 65.

³³ COMISIÓN NACIONAL SOBRE LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS: *Nunca Más*, 8.^a ed., Buenos Aires: Eudeba, 2009.

³⁴ M. OLLÉ SESÉ: *Justicia Universal para Crímenes Internacionales*, Madrid: La Ley, 2008, p. 296; J. CHINCHÓN ÁLVAREZ: *op.cit.*, p. 382.

³⁵ Ley 23.492, de 23 de diciembre de 1986.

³⁶ Ley 23.521, de 4 de junio de 1987.

las violaciones de derechos humanos cometidas entre 1976 y 1983, y la anulación de penas ya impuestas.³⁷

La ausencia de vía alguna para que las víctimas vieran satisfechos sus derechos a la verdad y la justicia produjo que se abrieran nuevas alternativas en pos de que estos derechos fueran concretados. A nivel interno los juicios por la verdad, un híbrido entre las comisiones de la verdad y el proceso penal, se izaron como la única manera en la que Argentina en 1999 (fecha de la celebración de los primeros juicios) podía respetar, por un lado, su propio ordenamiento jurídico y, por otro, los derechos de las víctimas.

A nivel internacional, varios Estados como Italia, Suiza, Suecia, Alemania y España iniciaron procesos penales en aplicación del principio de jurisdicción universal con el objetivo de reactivar la vía penal en suelo argentino.³⁸ Ello produjo la aprobación de la Ley 24.952 de 15 de abril de 1998, que derogó las leyes de impunidad, siendo posteriormente declaradas «inadmisiblemente nulas» por la Ley 25.779 de 2 de septiembre de 2003. Como último paso necesario, el 14 de junio de 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales las leyes mencionadas anteriormente, revalidando la vigencia de la Ley 24.952.

Con todo lo anterior, Argentina constituye uno de los ejemplos más representativos (sino el que más) de cómo un Estado pretende respetar, por una vía u otra, los derechos de sus víctimas, independientemente del tiempo transcurrido desde que se cometieron las violaciones.

2.2 Alemania

La antigua República Democrática Alemana contaba con un extenso expediente de violaciones de derechos humanos que se remontaban al inicio de la dictadura nacionalsocialista en los años treinta y se extendía hasta la caída del muro de Berlín en 1989. Es decir, nos encontramos ante un país que pasó sesenta años sin conocer un gobierno democrático. La necesidad, pues, de gestionar el legado de dos dictaduras distintas era una de las tareas que debían ser acometidas por el primer Gobierno que se constituyó tras la reunificación.

³⁷ Los decretos de indulto fueron los 1002, 1003, 1004 y 1005, de 7 de octubre de 1989. El 29 de diciembre de 1990 se dictarían los decretos de indulto 2741, 2745 y 2746. Trescientas personas pendientes de juicio fueron indultadas en aras a la ansiada «reconciliación nacional».

³⁸ J. CHINCHÓN ÁLVAREZ: *op. cit.*, p. 389.

Como ya había ocurrido en Argentina, la sociedad civil fue pieza clave en la creación de un instrumento que investigara el pasado represivo del Estado.³⁹ Los clamores de la sociedad se tradujeron en la *Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages*,⁴⁰ constituida en concordancia con la estructura ya existente en el seno del *Bundestag* alemán, para las comisiones de investigación. Será aquí donde resida el principal vicio con el que contó la mencionada comisión.

En efecto, las comisiones parlamentarias del *Bundestag* contaban con un sistema de elección de comisionados proporcional a la representación parlamentaria en ese momento, lo que suponía que la comisión que investigase la dictadura del *Sozialistische Einheitspartei Deutschlands* (SED) en la Alemania oriental, estaría compuesta, en su mayoría, por personal político.⁴¹

Como ya apuntamos en el primer capítulo, en referencia a la elección de los comisionados, este particular resulta indispensable para el éxito de la comisión. En efecto, esta elección ha de realizarse en función a su pericia en materias relacionadas con el mandato que debe desarrollar la comisión, como por ejemplo: derechos humanos, historia, derecho, psicología, etcétera; siendo la independencia, igualmente, uno de los elementos esenciales a la hora de proceder a su elección.⁴²

Alemania, como cabe concluir, no siguió ninguno de estos estándares en la selección del personal que integró la *Enquete-Kommission*, lo cual pone en duda que la intención por la cual esta fue creada fuera, ciertamente, la investigación de lo sucedido durante la dictadura comunista, como medio para concretar el derecho a la verdad de las víctimas y, en general, de toda la sociedad de la Alemania oriental. De hecho, autores como Andrew Beattie han destacado que la intención de la mayor parte de los comisionados fue la de deslegitimizar al Gobierno del SED, más que centrarse en el sufrimiento de las víctimas,⁴³ algo que posiblemente no hubiera ocurrido si la elección del personal de la comisión hubiera estado presidida por los estándares anteriormente apuntados.

³⁹ A. BEATTIE: *Playing Politics with History: The Bundestag Inquiries into East Germany*, Nueva York-Oxford: Berghahn Books, 2008, p. 24.

⁴⁰ Creada mediante la Ley 12/2597, de 14 de mayo de 1992.

⁴¹ La comisión estuvo integrada finalmente por dieciséis parlamentarios, once académicos y presidida por Rainer Eppelman, antiguo opositor al Gobierno de la RDA.

⁴² OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS: *op. cit.*, pp. 13-15.

⁴³ A. BEATTIE: *op. cit.*, pp. 83-84.

Del resultado final de la comisión⁴⁴ se infiere, en efecto, que la posición de las víctimas ante el conflicto no ocupó la parte central de su trabajo (como debería haber sido), sino que la comisión se limitó a desarrollar un mero trabajo académico,⁴⁵ de más de quince mil páginas de extensión y que, según ha afirmado Jan-Werner Müller «solo logró presentar narraciones contradictorias y memorias selectivas que se organizaban en función de criterios partidistas».⁴⁶

De esta experiencia podemos inferir que la participación de la sociedad civil en la preparación del mandato de la comisión ha de estar siempre presente, pues cuanto menos se adapte esta a sus necesidades, menos repercusión tendrá entre las víctimas; así como la importancia de la independencia y neutralidad de los comisionados.

2.3 Irlanda del Norte

Al contrario de las dos experiencias anteriores, seleccionadas por sus potenciales enseñanzas en el buen o mal hacer en materia de comisiones de la verdad, el contexto norirlandés representa una referencia útil para el caso vasco debido a las similitudes no ya entre ambos conflictos (ya que cada uno tiene particularidades propias que hace difícil su comparación), sino en la necesidad de gestionar el legado que el terrorismo ha dejado en cada una de estas dos comunidades.

En lo que nos interesa, formalmente en Irlanda del Norte no se ha constituido una comisión de la verdad al estilo de las creadas por otros Estados que sí optaron por una investigación extrajudicial de los sucesos del pasado. Como sostiene Priscilla Hayner, la cuestión de la creación de una comisión de la verdad ha estado encima de la mesa de negociaciones durante largo tiempo, pero siempre como parte de una discusión más amplia sobre la manera de abordar la transición hacia una normalización de la situación en Irlanda del Norte. Sin embargo, esta reivindicación sí ha formado y forma parte de las exigencias de las víctimas del

⁴⁴ El informe final, titulado *Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland*, fue publicado en 1994.

⁴⁵ A. J. McADAMS: *Judging the Past in Unified Germany*, Cambridge: Cambridge University Press, 2001, p. 91.

⁴⁶ J. W. MÜLLER: «Alemania del Este: incorporación, verdad corrompida y doble división», en A. BARAHONA DE BRITO, P. AGUILAR y C. GONZÁLEZ ENRÍQUEZ (eds.): *Las políticas hacia el pasado: juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias*, Madrid: Istmo, 2002, p. 382. Este mismo autor, en este mismo sentido, recoge que «para los estudiosos de la dictadura germano-oriental esto [el informe final] puede equivaler a lo que representan las actas de los Juicios de Núremberg para los que estudian el Tercer Reich», p. 393.

conflicto como, por ejemplo, las de la masacre de Ballymurphy.⁴⁷ Estos sucesos no han sido hasta la fecha investigados y, según las mismas víctimas, el hecho de que tras los eventos que allí se sucedieron no hubiera una investigación pudo haber incidido en los disturbios conocidos como el *Bloody Sunday*, debido a que algunos miembros del Ejército que allí intervinieron también lo hicieron en la masacre de Ballymurphy.

Precisamente la efectiva investigación del *Bloody Sunday* (con un informe final de diez tomos y cinco mil páginas) y la confirmación de la responsabilidad del Ejército británico en tales sucesos fue lo que produjo que el primer ministro británico David Cameron pidiera en 2010 disculpas públicas por lo allí ocurrido.

Igualmente, han surgido varias iniciativas que han resaltado la necesidad de que se cree una efectiva comisión dirigida a averiguar la verdad sobre lo sucedido. En concreto, podemos destacar tres:

Healing Through Remembering. Esta iniciativa se encuadró dentro de la visita a Irlanda del Norte en 1999 de Alex Boraine, uno de los arquitectos de la *Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica*. Su informe final, titulado *All Truth is Bitter*, explora enseñanzas de la comisión sudafricana útiles para el contexto norirlandés.

Consultative Group on the Past. Este grupo, creado en 2006, buscaba en la comunidad respuestas sobre qué camino seguir para tratar mejor el legado del pasado. Fueron invitados varios sectores de la comunidad norirlandesa, de la británica y de la República de Irlanda a compartir con ellos sus propias experiencias y para identificar las posibles acciones que pudieran ser útiles para la construcción de un futuro de paz.

Negociaciones Haass-O'Sullivan. La introducción en las negociaciones sobre la consolidación de la paz en Irlanda del Norte de dos reputados diplomáticos estadounidenses como Richard Haass y Meghan O'Sullivan tuvo el objetivo de ampliar el marco de las negociaciones a todos los espectros políticos del país. Estas negociaciones se materializaron en el panel *Together: Building a United Community*, presidido por ambos diplomáticos, el cual incluyó toda una serie de premisas sobre aquello a lo que la sociedad aún se debía enfrentar; entre ellas, qué tipo de mecanismo, o la forma en la que la verdad debería ser descubierta.

Por otro lado, y más recientemente, la conexión entre las comunidades norirlandesa y vasca está siendo cada vez más palpable con gestos como la visita

⁴⁷ La muerte de once personas a manos del Ejército británico en agosto de 1971.

del actual secretario general para la Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, a Belfast en enero de 2014 para el intercambio de iniciativas de paz y convivencia;⁴⁸ y la colaboración del País Vasco en el cuarto programa PEACE de la Unión Europea para Irlanda del Norte⁴⁹ (octubre de 2014), con perspectivas de que las propuestas que allí se recojan puedan ser aplicadas, igualmente, en el contexto vasco.⁵⁰

Este tipo de iniciativas, no formalmente de búsqueda de la verdad pero igualmente relevantes, pone de relieve la importancia de que, de un modo u otro, la verdad sobre lo ocurrido durante el período de violación de derechos humanos sea averiguada y suponga, en efecto, una política de Estado, no dejando la iniciativa únicamente en manos de la sociedad civil.

2.4 Sudáfrica

Posiblemente Sudáfrica constituya el ejemplo más representativo y conocido globalmente en lo que a comisiones de la verdad se refiere. Basada en un intercambio de verdad por justicia, los promotores de la [Comisión de la Verdad y la Reconciliación](#) (TCR) creyeron que únicamente el conocimiento íntegro de lo ocurrido, prescindiendo de la participación del Poder Judicial, podría derivar, por un lado, en una efectiva reparación a las víctimas y, por otro, en la reconciliación de la sociedad.⁵¹

De esta manera, la primera objeción que podría hacerse a este planteamiento es que yerra a la hora de seguir el principio, apuntado en el primer capítulo, de interrelación entre los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Y es que, en nuestro caso, la ausencia de procesos judiciales redundaría en un desconocimiento de parte de lo ocurrido, pues estaríamos prescindiendo de la verdad judicial e individual, la cual es, precisamente, la que es conocida en sede judicial.

En el seno de la TCR de Sudáfrica este intercambio de verdad por justicia operaba de manera que aquellos victimarios que se decidieran a colaborar con la

⁴⁸ EUROPA PRESS: «El Gobierno vasco visita Belfast para intercambiar experiencias en materia de paz y convivencia», *El Diario* (16/1/2014).

⁴⁹ PARLAMENTO EUROPEO: [El programa PEACE PARA IRLANDA DEL NORTE](#).

⁵⁰ M. VÁZQUEZ: «Euskadi e Irlanda del Norte colaborarán sobre las víctimas, los presos y el relato», *Deia* (24/10/2015).

⁵¹ Para conocer más sobre las razones que llevaron a los arquitectos de la [Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica](#) a desechar los juicios penales, puede consultarse D. TUTU: *No future without forgiveness*, Nueva York: Doubleday, 1999, pp. 20-24.

Comisión, mediante la confesión pública de sus crímenes, eran amnistiados. La amnistía, de esta manera, funcionaba como un incentivo para asegurar que la mayor parte de aquellos que hubieran cometido crímenes durante el período del *apartheid* confesaran, dando a conocer a las víctimas, así, la verdad sobre lo ocurrido.

Esta propuesta proporcionaba de esta manera la posibilidad de que la Comisión de la Verdad no se limitara simplemente a conocer la verdad global, es decir, aquella cuyo conocimiento corresponde a toda la sociedad, sino que a través de las audiencias públicas, donde las víctimas de forma individual contaban su historia e interactuaban con los victimarios, la verdad individual era entonces, efectivamente, averiguada.⁵²

A pesar de que la experiencia sudafricana adolece de graves deficiencias en lo relativo al derecho a la justicia, el esfuerzo realizado en pos del derecho a la verdad, en sus dos facetas, aporta una rica experiencia para contextos análogos.

2.5 El Salvador

La experiencia salvadoreña ofrece uno de los ejemplos más paradigmáticos en comisiones de la verdad al ser, por un lado, la primera comisión creada mediante un acuerdo de paz y, por otro, por ser la que por primera vez estuvo integrada totalmente por personal internacional.⁵³ Esto último fue visto por muchos sectores como una manera de preservar su independencia y la objetividad de sus trabajos. Esta vocación internacional responde a que la Comisión fue auspiciada no por el Gobierno nacional, sino por la ONU.

Los orígenes de la Comisión dan buena muestra de los beneficios que una investigación puede tener para un correcto entendimiento entre las partes del conflicto. A lo largo de las negociaciones del acuerdo de paz, ambos bandos empezaron a reprocharse la culpabilidad de varios de los hechos que se sucedieron

⁵² Este método puede ser contrapuesto con otras iniciativas de búsqueda de la verdad en otros contextos, donde el Estado limita la búsqueda de la verdad a la creación de una comisión extrajudicial, obviando la investigación judicial (normalmente debido a la adopción de una ley de amnistía). Sin embargo, en caso de que la comisión no cuente con mecanismos al estilo de audiencias públicas o con un mandato lo suficientemente amplio para la averiguación de la verdad individual de las víctimas, esta contaría con una importante deficiencia en el respeto de los derechos de las víctimas.

⁵³ Organizaciones como [Human Rights Watch](#) han destacado de esta comisión que supone la primera investigación internacional que se realiza de unos hechos violatorios de derechos humanos cometidos por un Estado soberano desde los juicios de Núremberg. *Vid.* HUMAN RIGHTS WATCH: «El Salvador. Accountability and Human Rights: the report of the United Nations Commission on the Truth for El Salvador», *News From Americas Watch*, vol. IV, núm. 7, 1993, p. 5.

durante el conflicto, sin embargo, conforme estas iban avanzando, cada vez se acrecentaba más la sensación de que no se llegaría a un acuerdo definitivo si las acusaciones y contraacusaciones seguían sucediéndose,⁵⁴ por lo que la idea de crear un mecanismo destinado a «desarrollar la confianza»⁵⁵ entre ambas partes se atisbaba fundamental para un desarrollo pacífico de la transición.

La elección de la comisión de la verdad, como el mecanismo idóneo para liderar dicha investigación, vino derivada de la negativa de ambas partes a que el Poder Judicial, o cualquiera de los órganos del Estado, fuera el encargado de realizar dicha tarea, pues ninguna confiaba en la objetividad de sus actuaciones. El hecho de que estuviera compuesta íntegramente por personal extranjero se asentaba en esta misma idea.⁵⁶

Otra de las particularidades de esta Comisión fue su competencia para publicar el nombre de los victimarios de las violaciones de los derechos humanos. Esta capacidad, de la que también disfrutó la comisión creada en el Chad, fue seguida por una ardua polémica debido a que la identidad de esas personas iba a ser revelada por un mecanismo no judicial, en el cual no iban a contar con la posibilidad de defenderse, algo que sí ocurriría en sede judicial. Sin embargo, los argumentos que se esgrimieron en favor de esta competencia de la Comisión se amparaban en que, en caso contrario, la verdad completa no sería conocida. En este mismo sentido, sería muy complicado emprender el camino del perdón y la reconciliación, si no se conocía la identidad de quien se iba a perdonar.

Publicado el informe final, conocida la identidad de los victimarios y efectuadas las recomendaciones pertinentes para la consolidación de la paz en El Salvador, el Poder Ejecutivo junto con sectores aún influyentes en la sociedad (entre ellos las Fuerzas Armadas), rechazaron de plano las conclusiones a las que la Comisión de la Verdad llegó, siendo aprobada días después una ley de amnistía que impidió que ninguno de los identificados como culpable en el informe final pudiera ser juzgado. De ello se desprende que la depuración de las instituciones es esencial en la correcta gestión de las transiciones políticas, como medida integrante de las garantías de no repetición.

⁵⁴ T. BUERGENTHAL: «La Comisión de la Verdad para El Salvador», en T. BUERGENTHAL y A. CANÇADO TRINDADE (comps.): *Estudios Especializados de Derechos Humanos*, vol. 1, San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1996, p. 16.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

2.6 Brasil

Hasta el año 2011 Brasil no contó con una comisión oficial de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la pasada dictadura militar, con competencias suficientes como para que el derecho a la verdad de víctimas y sociedad fuera efectivamente respetado. La Comisión Nacional de Verdad, creada a partir de la [Ley 12.528](#), de 18 de noviembre de 2011, vino precedida de la [Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos](#),⁵⁷ cuya función fue el reconocimiento de las víctimas de ese período (incluidas aquellas fallecidas por causas no naturales cuando estaban en manos del Estado)⁵⁸ y localizar los restos de los desaparecidos. Sin embargo, sus trabajos⁵⁹ seguían sin reconocer ni el paradero ni las circunstancias en las que la desaparición fue perpetrada, tal y como se desprende de la sentencia de la [Corte Interamericana de Derechos Humanos](#) en el caso *Gomes Lund y otros vs. Brasil*.⁶⁰

La Comisión Nacional de Verdad, por lo tanto, tenía como objetivo, atendiendo al art.1 de la Ley 12.528:

... examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas no período fixado no [art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias](#) [18 de septiembre de 1946 a 5 de octubre de 1988], a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional.

El Estado de Brasil de este modo, en atención al clamor popular imperante, creó esta comisión de la verdad sesenta y cinco años después de que comenzaran los hechos objeto de investigación, en respeto del derecho a la verdad y a la memoria de las víctimas. El informe final fue publicado en 2014, veintiséis años después de haber sido aprobada la constitución de Brasil.

2.7 Chile

La práctica chilena en comisiones de la verdad da muestras de la importancia de contar con un mandato material adecuado y de realizar previas consultas públicas para que el mandato de la institución que se establezca se ajuste lo mejor

⁵⁷ [Ley 9.140/95](#), de 4 de diciembre de 1995.

⁵⁸ Este inciso fue incluido mediante la [Ley 10.875](#), de 1 de junio de 2004, que modificaba la Ley 9.140.

⁵⁹ La comisión finalizó sus labores con la publicación de su informe final, *Direito à Memória e à Verdade*, en 2007.

⁶⁰ CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: caso *Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil*, sentencia de 24 de noviembre de 2010, en Serie C, Núm. 219, párr. 259.

posible a las necesidades de las víctimas en materia de derecho a la verdad en un período de transición. La primera comisión ([Comisión Rettig](#)) constituida en 1990 tras la salida del poder del dictador Pinochet después de la celebración de un referéndum que le resultó desfavorable, contó con un mandato extremadamente limitado, porque dejaba fuera de la investigación las violaciones de derechos humanos que no hubieran producido como resultado el fallecimiento de las víctimas. Por tanto, las torturas que no hubieran causado la muerte de las víctimas no fueron investigadas.

Las voces que clamaban por la creación de una comisión especializada en la investigación de torturas se vieron materializadas en 2003 con el establecimiento de la [Comisión Valech](#), cuyo mandato fue:

... determinar, de acuerdo a los antecedentes que se presenten, quiénes son las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.⁶¹

De esta manera todas las víctimas de la dictadura de Pinochet quedaron cubiertas por ambas comisiones.

Por último, es menester señalar una de las consecuencias inmediatas que acarreó la [Comisión Valech](#), que fue la incoación, tanto en Chile como en el extranjero, de investigaciones penales de todos aquellos hechos que quedaron probados en su informe final.⁶²

Diremos para concluir que la rica experiencia internacional en materia de comisiones de la verdad permite identificar las debilidades y fortalezas de estos órganos, tanto en su aspecto formal como material. Resulta de especial relevancia tener en cuenta estas experiencias con el objeto de que la futura comisión de la verdad, que se encargue de investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas en Guipúzcoa, goce de la mayor legitimidad y efectividad posibles. En cualquiera de los casos, queda demostrado que esta legitimidad únicamente podrá ser alcanzada si la comisión cuenta con el apoyo mayoritario de la sociedad civil y de las instituciones públicas.

⁶¹ Art. 1 [Decreto Supremo n.º 1040](#).

⁶² E. LIRA: «Verdad, reparación y justicia: el pasado que sigue vivo en el presente», en C. BERISTAIN (coord.): *Contribución de las políticas de verdad, justicia y reparación a las democracias en América Latina*, San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2011, p. 101.

3 UNA COMISIÓN DE LA VERDAD COMO INSTRUMENTO DE CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS DE GUIPÚZCOA

Hasta ahora, gran parte del relato que se conoce acerca del conflicto vasco se circunscribe al contenido de las resoluciones judiciales. El derecho penal y el derecho penitenciario han sido, así, la principal fuente de la verdad oficial. Por otro lado, el relato que conocemos sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo emana de investigaciones privadas, de historiadores especializados en la materia, faltando, de esa manera, una verdad oficial que refleje el consenso esencial para que las víctimas y la sociedad vean respetado su derecho a la verdad. Así lo expresó el [Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición](#), Pablo de Greiff, en su visita *in loco* a España en 2014:

El Relator Especial nota que existe una gran cantidad de información acerca de la violencia que tuvo lugar en España, especialmente en la Guerra Civil. Salvo excepciones, estas investigaciones han sido generalmente lideradas por académicos, historiadores o periodistas. La información disponible, sin embargo, está sumamente dispersa, usa metodologías diferentes y necesita verificación.⁶³

La recuperación de la memoria histórica en Guipúzcoa, y en el conjunto del País Vasco, durante la Guerra Civil, el franquismo y los años de transición a la democracia (1936-1982), por tanto, se enfrenta a dos dicotomías. Por un lado, a no contar con una fuente institucional, fiable y objetiva que haya investigado lo sucedido durante los años de la Guerra Civil, de la represión franquista e incluso de los primeros años del postfranquismo; y, por otro lado, contar únicamente con

⁶³ CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS: *Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición*, Pablo de Greiff. *Misión a España*, doc. A/HRC/27/56/add.1, 22 de julio de 2014, párr. 43.

la verdad establecida en sede judicial para conocer lo acontecido en lo relativo a los crímenes cometidos por ETA, que comenzaron en 1968.⁶⁴

Dentro de este marco temporal existen dos grupos de víctimas diferenciados: las víctimas del franquismo y las del terrorismo, según quien fuera identificado como el victimario: las fuerzas del orden franquistas o ETA. A estos dos, no obstante, habría de sumársele también las víctimas vascas de la represión sufrida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entre 1975 y 1982, y del terrorismo de extrema izquierda y derecha, años en los que el aumento de la actividad terrorista de ETA propició una radicalización de la represión ejercida por las fuerzas del orden público sobre la población del País Vasco.⁶⁵

3.1 Dos estándares diferenciados: las víctimas del franquismo y las víctimas del terrorismo. La comisión de la verdad como instrumento de unificación

Si bien España ha realizado notables esfuerzos para reparar discriminaciones iniciales, propias del régimen franquista, en la actualidad muchas organizaciones y víctimas han expresado que se siguen sintiendo como «víctimas de segunda categoría». Este sentimiento vendría alimentado por una serie de medidas más ambiciosas en favor del reconocimiento y reparación otorgadas a otra categoría de víctimas de delitos graves como el terrorismo.⁶⁶

Este párrafo fue introducido por Pablo de Greiff en el informe de su mencionada visita a España en 2014. Y es que el distinto tratamiento institucional brindado a estos dos grupos de víctimas está directamente relacionado con la falta de averiguación de la verdad sobre el pasado.

Un marco general donde puede contemplarse perfectamente esta diferencia de trato es en la comparación de las dos leyes que regulan el régimen jurídico de ambos conjuntos de víctimas.

⁶⁴ El primer asesinato de ETA fue cometido el 7 de junio de 1968 en Guipúzcoa.

⁶⁵ J. A. PÉREZ PÉREZ y C. CARNICERO HERREROS: «La radicalización de la violencia política durante la transición en el País Vasco. Los años de plomo», *Historia del presente*, vol. 12, 2008, p. 119.

⁶⁶ CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS: *Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad...*, doc. cit., párr. 86.

Mientras que en la [Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo](#) (en adelante: ley de víctimas del terrorismo), se apela en varias ocasiones a conceptos como «memoria, dignidad, justicia y verdad»⁶⁷ y, en lo concreto, a una «memoria colectiva»,⁶⁸ en la [Ley 52/2007](#)⁶⁹ (en adelante: ley de la memoria histórica) se apela, simplemente, a una memoria «personal y familiar»,⁷⁰ sin que esta tuviera dentro de la ley ninguna manifestación pública. El tratamiento, por tanto, del derecho de toda víctima a la verdad, tanto individual como colectiva, queda totalmente sesgado por el Legislativo pues favorece el reconocimiento público del sufrimiento de unas víctimas en detrimento de otras.⁷¹

Estas diferencias también se encuadran dentro de cuál ha de ser la función de las Administraciones públicas en la preservación de los derechos de ambos conjuntos de víctimas. Mientras que en la ley de víctimas del terrorismo se hace un llamamiento en el preámbulo a que: «Los poderes públicos garantizarán que las víctimas sean tratadas con respeto a sus derechos y para asegurar la tutela

⁶⁷ Véase, dentro del preámbulo: «... memoria, dignidad, justicia y verdad, son las ideas fuerza que fundamentan el dispositivo normativo recogido en la presente Ley...», «... los poderes públicos contribuirán al conocimiento de la verdad, atendiendo a las causas reales de victimización y contribuyendo a un relato de lo que sucedió que evite equidistancias morales o políticas, ambigüedades o neutralidades valorativas». El art. 2: «Esta Ley se fundamenta en los valores de memoria, dignidad, justicia y verdad. Memoria, que salvaguarde y mantenga vivo su reconocimiento social y político [...]. Verdad, al poner de manifiesto la violación de los derechos humanos que suponen las acciones terroristas».

⁶⁸ Véase en el preámbulo: «El valor de la memoria como la garantía última de que la sociedad española y sus instituciones representativas no van a olvidar nunca a los que perdieron la vida». Art. 2: «Memoria, que salvaguarde y mantenga vivo su *reconocimiento social* y político» [sin resalte en el original]. Art. 57: «El Gobierno constituirá un Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, que tendrá como objetivo preservar y difundir los valores democráticos y éticos que encarnan las víctimas del terrorismo, construir la memoria colectiva de las víctimas y concienciar al conjunto de la población para la defensa de la libertad...».

⁶⁹ [Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.](#)

⁷⁰ En la exposición de motivos: «La presente Ley parte de la consideración de que los diversos aspectos relacionados con la memoria personal y familiar...», «Se reconoce, en este sentido, un derecho individual a la memoria personal y familiar de cada ciudadano...», «Pero sí es deber del legislador, y cometido de la ley, reparar a las víctimas, consagrar y proteger, con el máximo vigor normativo, el derecho a la memoria personal y familiar...». Art. 1: «La presente Ley tiene por objeto reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura, promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar...». Art. 2.1: «Como expresión del derecho de todos los ciudadanos a la reparación moral y a la recuperación de su memoria personal y familiar...».

⁷¹ Una comparación en profundidad de ambas leyes puede verse en R. ESCUDERO ALDAY: «[Víctimas y memoria selectiva](#)», *Dominio público* (21/1/2012).

efectiva de su dignidad», en la ley de memoria histórica se establece de forma mucho más laxa y difusa, en su exposición de motivos, que «... la Ley sienta las bases para que los poderes públicos lleven a cabo políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática».

Una muestra significativa de esta falta de concreción de la actuación de las Administraciones públicas se da también en la búsqueda e identificación de los desaparecidos durante la Guerra Civil (art. 11 de la ley de memoria histórica), pues las instituciones públicas únicamente tienen el mandato de «facilitar» la labor a las víctimas «que así lo soliciten». Es decir, la Administración nunca actuará de oficio en la localización de las personas desaparecidas.

Se aprecia de este mismo modo cómo el color del Gobierno condiciona la aplicación de cada una de las leyes. En efecto, ambas fueron aprobadas bajo Gobiernos socialistas: en 2007 la ley de memoria histórica y en 2011 la ley de víctimas del terrorismo. Mientras que la referida a las víctimas del terrorismo sí ha mantenido una financiación suficiente a lo largo del tiempo como para poder concretar su contenido aún con un cambio en el partido del Gobierno, ya en los primeros presupuestos aprobados por el Gobierno del presidente Rajoy entrante en diciembre de 2011, la financiación de la ley de memoria histórica desapareció.⁷²

Por tanto, la afirmación recogida por Pablo de Greiff acerca de los diferentes raseros en la actuación del Estado sobre el trato a los distintos grupos de víctimas es totalmente ajustada a la realidad. Esta distinción produce que las víctimas del franquismo se sientan discriminadas por razones ajenas a su condición de víctimas, lo que se debe a una censurable politización de la historia, que ha facilitado la indeseable polarización de la sociedad a este respecto.

¿Qué puede, entonces, aportar una comisión de la verdad como instrumento que corrija discriminaciones en el trato institucional dispensado a las víctimas?

Una comisión de la verdad que realice una investigación extrajudicial de las violaciones de derechos humanos cometidas entre 1936 y 1982 en Guipúzcoa, al modo de las ya analizadas en el capítulo referido a la experiencia comparada, podrá, entre otras ventajas que ya estudiamos en el capítulo 1, poner bajo el mismo espectro a toda persona haya sufrido una violación de sus derechos humanos, con independencia de quién fuera el victimario: las fuerzas del orden franquistas, las operativas durante los primeros años de la transición, los

⁷² CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS: *Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad...*, doc.cit., párr. 63.

paramilitares o ETA. La identificación de un solo grupo de víctimas a las que les deberían ser respetados sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación (las víctimas de ETA) es un escollo vital, sobre todo en el contexto vasco, para el respeto efectivo del derecho a la verdad sin discriminación alguna por razón de quién perpetró el acto que dio lugar a la violación.

La situación actual produce que entre las víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas entre 1936 y 1982 haya un grupo de víctimas (aquellas golpeadas por la violencia de ETA) titulares de un derecho al conocimiento de la verdad que han tenido reconocimiento legal y amparo judicial, mientras que a otras (las víctimas del franquismo o de la represión institucional o paramilitar) no se les reconoce como titulares de ese derecho a la verdad y por tanto persiste el desconocimiento de gran parte de los hechos que derivaron en la conculcación de sus derechos.

La formación de un mecanismo que investigue ese intervalo temporal como un todo supondrá el respeto de derechos y garantías propios de las víctimas de violaciones de derechos humanos a todo aquel que haya sido afectado por cualquier acto de violencia, con independencia de la identidad del victimario.

3.2 Una comisión de la verdad en Guipúzcoa: ¿una tercera vía?

La comisión de la verdad que en este trabajo se propone ya se ha adelantado en el epígrafe anterior que debe contar con un marco temporal que abarque desde el inicio de la Guerra Civil en 1936 hasta la llegada al Gobierno del presidente Felipe González en 1982, incluyendo así los primeros años de transición a la democracia.

Este espectro temporal tan amplio hace que, como ya hemos venido exponiendo, nos encontremos con contextos bastante diferenciados en Guipúzcoa. En primer lugar, con un período de conflicto armado interno. En segundo lugar, con cuarenta años de dictadura fascista que propició la aparición de un intenso movimiento antifranquista y nacionalista, que desembocaría durante los años sesenta en el surgimiento de la que posteriormente sería la banda terrorista ETA. Y en tercer y último lugar, con una etapa de cambio político e intenso movimiento social que estuvo presidido por la reivindicación a favor de la amnistía de los presos políticos, la aparición de nuevos movimientos violentos de extrema derecha⁷³ y extrema

⁷³ Batallón Vasco Español, Triple A y Grupos Armados Españoles (GAE).

izquierda⁷⁴ y el recrudecimiento de la violencia de ETA,⁷⁵ lo que acarrearía en consecuencia un aumento de la represión de las fuerzas del orden en el País Vasco.

Ya hemos sentido que en lo que respecta a la recuperación de la verdad dentro del conflicto vasco, la principal vía que se ha seguido a tal respecto ha sido el proceso penal y el derecho penitenciario, contando las vías extrajudiciales con un carácter meramente residual.

Priscilla Hayner, experta contrastada en comisiones de la verdad, afirmó sobre la situación en el País Vasco que:

La idea que subyace a la Justicia transicional es dejar sentado que la acción penal es, en efecto, importante para responder a abusos a gran escala, pero que casi nunca es suficiente para hacer frente a necesidades más amplias. El objetivo es cambiar la atención de los crímenes de los autores al sufrimiento de las víctimas y a las necesidades más amplias de la sociedad y las comunidades. Eso puede permitir el reconocimiento de la gran necesidad de reformar las instituciones para evitar más abusos.⁷⁶

La aplicación de métodos alternativos propios de la justicia restaurativa, que participan de un concepto inclusivo de justicia transicional, para enfrentar la violencia de ETA, ya se han dado como, por ejemplo, en la llamada *vía Nanclares*. Dentro de estos procesos, los presos que así lo solicitaban, sin la obtención de beneficio penitenciario alguno y con conciencia de que de ese modo intentarían reparar parte del daño causado, tenían la posibilidad de reunirse con víctimas del terrorismo para expresarles su arrepentimiento. La aplicación de este tipo de mecanismos supone un precedente claro de cómo poder implementar medidas típicas de justicia restaurativa, que caben ser insertadas en el marco de una justicia de transición, al estilo de las ya estudiadas en el conflicto vasco.

Por otro lado, las reclamaciones de la sociedad a favor de realizar una investigación sobre los crímenes del franquismo ha sido una constante desde el

⁷⁴ Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) y Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP).

⁷⁵ El año 1980 cuenta con mayor número de víctimas de ETA. Véase J. AVILÉS FARRÉ: «El terrorismo en la transición democrática española», Madrid: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, 2004, p. 3.

⁷⁶ P. HAYNER: «¿Justicia transicional en el País Vasco? Principios básicos de análisis», en J.-M. LANDA GOROSTIZA (ed.), *Justicia transicional: propuestas para el caso vasco*, Clermont-Ferrand: Institut Universitaire Varenne, 2014, p. 302.

resurgimiento del movimiento memorialista a principios de la década del 2000.⁷⁷ Este requerimiento, igualmente, ha sido hecho propio por todos y cada uno de los mecanismos de protección de derechos humanos que han visitado España o han analizado el grado de cumplimiento por el Estado de sus obligaciones en materia de derechos humanos.⁷⁸ El más reciente de ellos, el [Comité de Derechos Humanos](#), órgano encargado del control de la aplicación del [Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos](#), afirmó el 20 de julio de 2015 que «El Estado parte debe impulsar activamente las investigaciones respecto de todas las violaciones a los derechos humanos del pasado».⁷⁹

La investigación de los crímenes cometidos por el franquismo adquiere, por ende, carácter de obligación internacional, es decir, será necesario emprender dicha investigación para cumplir con los compromisos internacionales que el Estado ha asumido.

Sin embargo, como ya apuntamos en el primer capítulo, la mera constitución de una comisión de investigación no cumpliría con los requerimientos necesarios para que el derecho a la verdad de víctimas y sociedad vasca sea respetado, sino que debería contar con unas características propias que lo hagan posible.⁸⁰

3.2.1 Características de una comisión de la verdad en Guipúzcoa

Las características y competencias de una comisión vasca de investigación sobre el período franquista ya formaron parte de una propuesta realizada en 2009

⁷⁷ E. SILVA: «El despertar de la memoria histórica en España: el papel de la sociedad civil» en F. GÓMEZ ISA (dir.): *El derecho a la memoria*, op. cit., pp. 571-580.

⁷⁸ Véase nota 1.

⁷⁹ COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS: *Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de España*, doc. CCPR/C/ESP/CO/6, 14 de agosto de 2015, párr. 21. Para un análisis más en profundidad sobre los pronunciamientos de los órganos de protección de derechos humanos sobre el tratamiento de España del derecho a la verdad de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo puede consultarse J. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: *El derecho a la verdad en la justicia de transición española*, op. cit., pp. 43-49 y 214-228.

⁸⁰ A este respecto, podemos traer a colación el ejemplo, ya analizado en el capítulo 1, de la [Comisión Rettig](#), creada en Chile en 1990, cuyo mandato limitaba la investigación de las violaciones de derechos humanos a aquellos actos que hubiesen concluido con la muerte de la víctima, lo que dejaba fuera de esta las torturas que no la ocasionaron.

por la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco.⁸¹ En su informe se aludió *inter alia* al largo tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos como una peculiaridad que marcaría el carácter del mandato.⁸²

Igualmente en dicho informe se pusieron de manifiesto las distintas propuestas emanadas desde asociaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional o Aranzadi, o más concretamente dentro del País Vasco, [Lau Haizetara Gogoan](#), acerca del período objeto de investigación de una futura comisión de la verdad. Algunas de esas propuestas llevaban el mandato temporal de la comisión hasta los años 1977 o 1978, fechas de la [ley de amnistía](#) y la [Constitución española](#) respectivamente. Otras apelaban a mandatos temporales más amplios al proponer investigar «la totalidad del régimen franquista», o, incluso, no contar con fecha definida alguna; opción que, como ya vimos en el primer capítulo, es totalmente desaconsejable.⁸³

Sin embargo, teniendo presente lo ya estudiado previamente acerca de estos estándares, el mandato temporal que aquí proponemos para la comisión de la verdad en Guipúzcoa, como hemos venido reiterando, abarcaría entre los años 1936 y 1982.

La extensión del mandato temporal, muchas veces olvidado, de cinco años más allá de la aprobación de la [ley de amnistía](#), o cuatro tras la adopción de la [Constitución](#), se debe al ya mencionado surgimiento de una férrea represión en los años de transición política, la cual tuvo especial incidencia dentro del conjunto del País Vasco, debido en parte a la importancia del terrorismo etarra durante esas fechas.

El olvido de calificar este período como represivo, por la ya asunción del término establecido dentro del imaginario colectivo como *pacífica transición*, produce que, en caso de cerrar el período objeto de investigación en 1977 o 1978, se dejen fuera a las víctimas mortales causadas por las acciones de grupos terroristas del extremismo de derecha e izquierda y muertes violentas causadas como resultado de la intervención de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que se produjeron desde la fecha de la muerte del dictador Franco en todo

⁸¹ Aunque este informe estaba referido a la creación de una comisión de la verdad para el conjunto del País Vasco, sus conclusiones serían perfectamente asumibles por una comisión de la verdad de ámbito provincial.

⁸² J.-M. LANDA GOROSTIZA: *Bases para la puesta en marcha de una Comisión de la Verdad en Euskadi*, *op. cit.*, pp. 35-37.

⁸³ *Ibid.*, p. 36.

el territorio español.⁸⁴ Es por ello que, debido a la especial repercusión con la que contó esa violencia en el País Vasco,⁸⁵ tal período deba ser objeto de investigación.

En cuanto a la competencia material, es decir, los hechos que habrá de investigar esa comisión, el mencionado informe de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco alude a la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos para superar «los debates nacionales frecuentemente instalados en la legislación interna, los criterios de prescripción para cierto tipo de delitos, o los marcos jurídicos que existían en ciertos períodos históricos para establecer el tipo de violaciones».⁸⁶

En efecto, la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos por la comisión de la verdad producirá que sean objeto especial de estudio aquellos actos producidos en Guipúzcoa, que ya en el momento en el que se produjeron eran considerados crímenes por la legislación internacional. Como acertadamente se pone de manifiesto en el informe respecto a las desapariciones forzadas ocurridas a lo largo del tiempo objeto de investigación, «no pueden considerarse solamente como personas cuyo registro de muerte no existe, sino que son personas desaparecidas en los términos del derecho internacional».⁸⁷

¿A qué alude esta afirmación? Ello hace referencia a que independientemente de que ciertas características adscritas a algún tipo de actos violatorios de derechos humanos (léase aquí: amnistías o prescripción) puedan ser aplicadas a tales hechos dentro del derecho interno, al encontrarnos bajo los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, serán estos los que la comisión de la verdad habrá de poner en práctica para la confección de su mandato material. Es por ello que, atendiendo a lo ya apuntado al respecto en el primer capítulo sobre la necesidad de contar con un mandato suficientemente amplio, serán objeto de investigación aquellos actos que ya en el momento en el que fueron cometidos eran considerados crímenes por la legislación internacional, siendo irrelevante quien fuera el autor de los mismos.

⁸⁴ Para un estudio más en profundidad sobre la violencia acaecida en esta época, consúltese I. SÁNCHEZ CUENCA: «La violencia terrorista en la transición española a la democracia», *Historia del presente*, vol. 14, 2009, pp. 9-24.

⁸⁵ J. A. PÉREZ PÉREZ y C. CARNICERO HERREROS: «La radicalización de la violencia política durante la transición en el País Vasco. Los años de plomo», *op. cit.*, pp. 111-128.

⁸⁶ J.-M. LANDA GOROSTIZA: *Bases para la puesta en marcha de una Comisión de la Verdad en Euskadi*, *op. cit.*, p. 38.

⁸⁷ *Ibid.*

Por su parte, el personal que integre la comisión de investigación habrá de reunir expertos en distintas esferas como juristas, historiadores, sociólogos o politólogos; nacionales (pertenecientes a distintas esferas de la sociedad civil española, vasca y guipuzcoana) y extranjeros; e igualdad entre hombres y mujeres en su composición. El informe de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco alude a que los comisionados han de ser «personas de reconocido prestigio en el ámbito de los derechos humanos [...] de integridad moral y trayectoria ética

reconocidas»⁸⁸ y que serán elegidas con una «mayoría significativa del Parlamento sobre la base de un proceso consultivo con la sociedad vasca».⁸⁹

Las consultas a las que aquí se alude no se deben limitar a la elección de los comisionados, sino que han de extenderse a todos los aspectos del mandato de la comisión: desde su competencia *ratione temporis* y *ratione materiae*, hasta las distintas competencias que la comisión tendrá atribuidas. Únicamente si la comisión posee un enfoque centrado en las víctimas, es decir, si cuenta con la capacidad suficiente como para dar respuesta a sus demandas, podrá ser considerada como un verdadero instrumento de defensa del derecho a la verdad de las víctimas.

Acerca de las competencias mínimas a las que hemos aludido, y teniendo en cuenta la reflexión anterior, los comisionados deberán poder acceder a los archivos de información relevantes a las violaciones de derechos humanos ocurridas no solo en Guipúzcoa, sino también en el conjunto del País Vasco durante el período mencionado. El acceso a los archivos es una de las prerrogativas que siempre ha estado ligada no solo a las comisiones de la verdad como una facultad propia de su actuación, sino como una obligación independiente de los Estados para con las víctimas de violaciones masivas de derechos humanos para hacer efectivo el derecho individual y colectivo a la verdad.⁹⁰

En lo particular, la comisión de la verdad de Guipúzcoa deberá tener la posibilidad de brindar especial atención a los archivos pertenecientes a las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Nacional, la Iglesia católica o los que se encuentren bajo control provincial, estatal o de otras comunidades autónomas.

Por último, la comisión deberá contar con la posibilidad de emitir un informe final donde se integren sus averiguaciones, sus conclusiones y las recomendaciones

⁸⁸ *Ibid.*, p. 42.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS: *Resolución 68/165. El derecho a la verdad, doc. A/RES/68/165*, 21 de enero de 2014.

pertinentes dirigidas las autoridades de Guipúzcoa, el País Vasco y el Estado español, con el objetivo de conseguir un mejor respeto de las obligaciones internacionales en materia de derechos de las víctimas y de la sociedad vasca.

Este informe final será el legado que dejará la comisión de la verdad y constituirá un importante documento relevante al menos en dos ámbitos: el judicial y el educacional.

El primero de ellos hace especial referencia a una teoría que ha copado gran parte de las reflexiones en torno al valor de las comisiones de la verdad dentro un período de transición política: la complementariedad entre mecanismos extrajudiciales y el poder judicial. Esta complementariedad se basa en la necesaria averiguación tanto de la verdad judicial como de la no judicial. Para ello, el informe final puede aportar importante información acerca de violaciones de derechos humanos que puedan repercutir posteriormente en la incoación de eventuales procesos judiciales.

Por otro lado, el informe de la comisión podrá servir como punto de partida para la elaboración de manuales que se puedan utilizar en los centros de enseñanza primaria y secundaria, con la garantía de que se tratará de un estudio objetivo e imparcial de la historia de lo ocurrido en Guipúzcoa durante la Guerra Civil, el franquismo y la transición política, así como herramienta básica de referencia en materia de educación para la paz y los derechos humanos destinada al conjunto de la sociedad vasca y española.

En conclusión, se aprecia que la formación de una comisión de la verdad con las competencias suficientes para investigar de forma eficaz el período propuesto, es esencial para un integral respeto del derecho a la verdad de las víctimas, así como indispensable para una deseable equiparación en derechos y garantías de todos aquellos que sufrieron la violencia durante la Guerra Civil, el franquismo y los primeros años de la transición democrática.

CONCLUSIONES

A lo largo del presente estudio se ha puesto de manifiesto la necesidad de que tanto las víctimas como la sociedad en su conjunto conozcan la verdad sobre lo sucedido durante una época histórica de graves violaciones de los derechos humanos. Aún más si tras esa etapa se abre un período de transición política hacia la paz y la democracia, como ocurrió en España en 1975 tras la muerte del dictador Francisco Franco, o a partir de 2011 con el cese definitivo de la violencia armada de ETA.

Dos contextos separados por treinta y seis años, a primera vista distintos, pero que tienen en común la necesidad de emprender toda una serie de medidas basadas en la justicia de transición y justicia restaurativa para un completo respeto a los derechos de las víctimas que ambas etapas dejaron.

En este mismo sentido puede afirmarse que el inmovilismo que caracterizó a la transición de los años setenta en materia de aplicación de medidas propias de justicia de transición y justicia restaurativa propició que, aún hoy en día, esa decisión siga produciendo efectos negativos en algunos sectores tanto de la sociedad española como de la vasca. Todo ello debiera ser superado para la consolidación de la paz y la convivencia en Guipúzcoa, limitado hasta la fecha a la aplicación estricta del derecho penal y penitenciario.

El valor del conocimiento de la verdad ha sido puesto de manifiesto desde mediados de los años setenta en distintos contextos de postviolencia en los que la verdad ha monopolizado las exigencias de las víctimas y de la sociedad tras la finalización de una época de violaciones de derechos humanos. En efecto, el último Estado en sumarse, Colombia, que viene sufriendo las consecuencias de un conflicto armado interno desde los años sesenta del siglo pasado, aceptó la creación de una «jurisdicción especial para la paz» el 23 de septiembre de 2015, cuando ya se adelantaba la constitución de una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición,⁹¹ mecanismo del que se habían

⁹¹ Puede consultarse este acuerdo en *Informe conjunto de la mesa de conversaciones entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo, Comunicado conjunto núm. 60*, 23 de septiembre de 2015. Esta comisión fue finalmente confirmada el 15 de diciembre de 2015. Puede consultarse en *Informe conjunto de la mesa de conversaciones entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo, Comunicado conjunto núm. 64*, 15 de diciembre de 2015.

avanzado sus ventajas en la Mesa de Conversaciones de La Habana entre el Gobierno y las FARC-EP, meses atrás:

El fin del conflicto constituye una oportunidad única para satisfacer uno de los mayores deseos de la sociedad colombiana y de las víctimas en particular: que se esclarezca y conozca la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto.⁹²

De esta afirmación se desprende el valor de la verdad, ya comentado, para que derechos conexos como la justicia, la reparación o las garantías de no repetición sean igualmente respetados. La inmediatez a la que alude se debe, por otra parte, a la necesidad de que las víctimas sean reparadas lo más pronto posible en aras de que el sufrimiento producido, por ejemplo, por el desconocimiento del paradero de sus seres queridos desaparecidos no se prolongue en el tiempo innecesariamente.

Las siete experiencias nacionales analizadas en el segundo capítulo nos han demostrado cuál habría de ser el camino a seguir para concretar el derecho a la verdad, con qué características ha de contar un mecanismo objetivo de investigación para la realización efectiva de su labor y qué medidas eludir para evitar su perversión y que se convierta en una mera arma política.

Esta práctica estatal evidencia la utilidad de la investigación extrajudicial al servir de medio de reconciliación social en distintos contextos violatorios de derechos humanos, siempre y cuando el medio elegido para llevar a cabo esa investigación se adapte a las características que diferencian un contexto de otro. Por ello, no debe tomarse ninguna de estas experiencias como un modelo único y cerrado a extrapolar al contexto que aquí nos ocupa. Guipúzcoa, al igual que el País Vasco, cuenta con una idiosincrasia y unas particularidades propias que no pueden ser abordadas con los medios aplicados en otras latitudes. Será esencial un estudio detenido de las mismas para la construcción de un mecanismo de investigación extrajudicial *ad hoc*.⁹³

⁹² *Informe conjunto de la mesa de conversaciones entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, Comunicado conjunto núm. 53*, 24 de junio de 2015.

⁹³ En este mismo sentido se ha pronunciado Eduardo González Cueva al afirmar que «las comisiones ya no se ven como una respuesta política de emergencia a un dilema jurídico insoluble, sino como instrumentos que garantizan el acceso a un remedio legal efectivo y afirman el derecho a la verdad. Por otro lado, las comisiones no son un instrumento exótico y *ad hoc*, adaptable a las características de una sola región, sino un instrumento flexible con pretensiones de alcance global». E. GONZÁLEZ CUEVA: «¿Hacia dónde van las comisiones de la verdad?», en F. REÁTEGUI (ed.): *Justicia transicional. Manual para América Latina*, Brasilia y Nueva York: Centro Internacional para la Justicia de Transición, 2011, p. 354.

La necesidad de contar con instituciones no judiciales para el estudio del doloroso legado de violencia dejado por ETA y la dictadura hace que sea necesario considerar iniciativas tales como la comisión de la verdad aquí propuesta.

El mecanismo que aquí se propone tendrá como tarea central emprender una investigación sobre las violaciones graves masivas de derechos humanos producidas entre los años 1936 y 1982 en Guipúzcoa. Para realizar tal labor, la comisión podrá, entre otras potestades, consultar los archivos pertenecientes a distintas instituciones estatales, autonómicas y provinciales (entre ellas: Iglesia católica, Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional), así como producir un informe final en el que se recojan las conclusiones a las que arriba, junto con recomendaciones dirigidas a las instituciones guipuzcoanas, vascas y españolas con el principal objetivo de hacer, finalmente, efectivos los derechos de las víctimas de ese período histórico a la verdad, la justicia, la reparación y a las garantías de no repetición.

Iniciativas de parecido calado ya se han puesto en marcha en el País Vasco como el *Informe Foronda*, realizado por el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda de la Universidad del País Vasco a instancias de la Dirección de Promoción de la Cultura del Gobierno Vasco.⁹⁴ Propuestas de este orden prueban la necesidad de que una investigación más ambiciosa sea emprendida. No obstante, el mecanismo que finalmente se implemente, teniendo como ejemplo el reciente caso de Colombia, deberá tener muy en cuenta el sufrimiento padecido por las víctimas de la violencia en todas sus formas.

La principal dificultad a la que nos enfrentamos para abordar las violaciones de derechos humanos acaecidas durante el franquismo en Guipúzcoa es la existencia de dos clases distintas de victimarios e incluso de tres durante los primeros años de la transición, así como la manera de paliar la falta de igualdad en derechos y garantías de los distintos colectivos de víctimas. Discriminar por razón de quién fuera el victimario no puede condicionar la aplicación de los estándares de verdad, justicia y reparación propios de toda víctima de violaciones de derechos humanos, como actualmente acontece con las víctimas de la Guerra Civil, el franquismo y la transición.

El Estado español no puede seguir haciendo oídos sordos ante los requerimientos que emanan de los organismos internacionales de protección acerca de la necesaria investigación de este largo período histórico pues, como ya hemos apuntado, numerosas víctimas siguen padeciendo hoy en día los males que produce la falta de conocimiento de, por ejemplo, el lugar donde están enterrados sus seres

⁹⁴ R. LÓPEZ ROMO: *Informe Foronda...*, *op.cit.*

queridos. En este mismo sentido, la sociedad —tanto vasca como guipuzcoana— continúa sin contar con un relato unificado de lo sucedido durante aquella época.

El inicio de una investigación sobre la violencia perpetrada durante los años de la Guerra Civil, el franquismo y los primeros años de la transición en Guipúzcoa puede suponer un punto de partida consistente para una futura y necesaria investigación de la evolución del conflicto vasco desde sus orígenes hasta su finalización, así como de las consecuencias que ha producido a lo largo de su existencia. Recuperar la verdad histórica facilitará una mejor comprensión del conflicto y contribuirá a dar luz al conjunto de la sociedad vasca a la hora de adoptar las alternativas más eficaces para su solución definitiva.

BIBLIOGRAFÍA

1. Doctrina

A. Monografías

BEATTIE, A.: *Playing Politics with History: The Bundestag Inquiries into East Germany*, Nueva York y Oxford: Berghahn Books, 2008.

CHINCHÓN ÁLVAREZ, J.: *Derecho Internacional y transiciones a la democracia y la paz: hacia un modelo para el castigo de los crímenes del pasado a través de la experiencia iberoamericana*, Madrid: Parthenon, 2007.

IBÁÑEZ NAJAR, J. E.: *Justicia Transicional y las Comisiones de la Verdad*, Bogotá, Otzenhausen y Madrid: Instituto Berg, 2014.

LANDA GOROSTIZA, J.-M.: *Bases para la puesta en marcha de una Comisión de la Verdad en Euskadi*, Vitoria: Dirección de Derechos Humanos, Viceconsejería de Justicia, Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Gobierno Vasco, 31 de marzo de 2009.

LÓPEZ ROMO, R.: *Informe Foronda: los contextos históricos del terrorismo en el País Vasco y la consideración social de las víctimas. 1968-2010*, Vitoria-Gasteiz: Gobierno Vasco e Instituto de Historia Social Valentín Foronda de la Universidad del País Vasco, 2014.

MCADAMS, A. J.: *Judging the Past in Unified Germany*, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

OLLÉ SESÉ, M.: *Justicia Universal para Crímenes Internacionales*, Madrid: La Ley, 2008.

RIPOL CARULLA, S. y C. VILLÁN DURÁN (dirs.): *Justicia de transición: El caso de España*, Barcelona: ICIP, 2012.

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, J.: *El derecho a la verdad en la justicia de transición española*, Luarca: AEDIDH, 2014.

TUTU, D.: *No future without forgiveness*, Nueva York: Doubleday, 1999.

VILLÁN DURÁN, C.: *Curso de derecho internacional de los derechos humanos*, Madrid: Trotta, 2002.

B. Contribuciones a obras colectivas

GÓMEZ ISA, F.: «Retos de la justicia transicional en contextos no transicionales. El caso español», en S. RIPOL CARULLA y C. VILLÁN DURÁN (dirs.): *Justicia de transición: El caso de España*, Barcelona: ICIP, 2012.

GONZÁLEZ BRINGAS, A.: «Abuelas-Madres de Plaza de Mayo: la construcción social de la memoria», en F. GÓMEZ ISA (dir.): *El derecho a la memoria*, Bilbao: Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, 2006.

GONZÁLEZ CUEVA, E.: «¿Hacia dónde van las comisiones de la verdad?», en F. REÁTEGUI (ed.): *Justicia transicional. Manual para América Latina*, Brasilia y Nueva York: Centro Internacional para la Justicia de Transición, 2011.

HAYNER, P.: «¿Justicia transicional en el País Vasco? Principios básicos de análisis», en J.-M. LANDA GOROSTIZA (ed.): *Justicia transicional: propuestas para el caso vasco*, Clermont-Ferrand: Institut Universitaire Varenne, 2014.

LIRA, E.: «Verdad, reparación y justicia: el pasado que sigue vivo en el presente», en C. BERISTAIN (coord.): *Contribución de las políticas de verdad, justicia y reparación a las democracias en América Latina*, San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2011.

MÜLLER, J. W.: «Alemania del Este: incorporación, verdad corrompida y doble división», en A. BARAHONA DE BRITO, P. AGUILAR y C. GONZÁLEZ ENRÍQUEZ (eds.): *Las políticas hacia el pasado: juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias*, Madrid: Istmo, 2002.

SILVA, E.: «El despertar de la memoria histórica en España: el papel de la sociedad civil», en F. GÓMEZ ISA (dir.): *El derecho a la memoria*, Bilbao: Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, 2006.

C. Artículos de revistas y otras contribuciones

AVILÉS FARRÉ, J.: «El terrorismo en la transición democrática española», Madrid: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, 2004, p. 3.

BUERGENTHAL, T.: «La Comisión de la Verdad para El Salvador», en T. BUERGENTHAL y A. CAÑADO TRINDADE (comps.): *Estudios Especializados de Derechos Humanos*, vol. 1, San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1996, pp. 11-62.

CAMACHO PADILLA, F.: «La construcción histórica de la represión en Argentina y Chile: las Comisiones de la Verdad como instrumento de narración oficial», *Revista de Historia Iberoamericana*, vol. 7, núm. 1, 2014, pp. 35-74.

HUMAN RIGHTS WATCH: «El Salvador. Accountability and Human Rights: the report of the United Nations Commission on the Truth for El Salvador», *News From Americas Watch*, vol. IV, núm. 7, 1993, pp. 1-39.

KRIESBERG, L.: «Paths to Varieties of Inter Communal Reconciliation», ponencia presentada a la VII Conferencia General de la Organización Internacional para la Investigación sobre la Paz, Durban: 22-26 de junio de 1998.

PÉREZ PÉREZ, J. A. y C. CARNICERO HERREROS: «La radicalización de la violencia política durante la transición en el País Vasco. Los años de plomo», *Historia del presente*, vol. 12, 2008, pp. 111-128.

SÁNCHEZ CUENCA, I.: «La violencia terrorista en la transición española a la democracia», *Historia del presente*, vol. 14, 2009, pp. 9-24.

WILHELMI, G.: «Las otras víctimas de una transición nada pacífica», comunicación presentada al I Congreso de Víctimas del Franquismo, Rivas Vaciamadrid: 2012.

2. Artículos de prensa

ESCUDERO ALDAY, R.: «Víctimas y memoria selectiva», *Dominio público* (21/1/2012).

EUROPA PRESS: «El Gobierno vasco visita Belfast para intercambiar experiencias en materia de paz y convivencia», *El Diario* (16/1/2014).

VÁZQUEZ, M.: «Euskadi e Irlanda del Norte colaborarán sobre las víctimas, los presos y el relato», *Deia* (24/10/2015).

3. Documentos de organizaciones internacionales

ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS: *Resolución 68/165. El derecho a la verdad*, doc. A/RES/68/165, 21 de enero de 2014.

— *Promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición*, doc. A/68/345, 23 de agosto de 2013.

— *Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones*, doc. A/RES/60/147, 21 de marzo de 2006.

COMITÉ CONTRA LA TORTURA DE LAS NACIONES UNIDAS: *Observaciones finales del Comité contra la Tortura: España*, doc. CAT/C/ESP/CO/6, 15 de mayo de 2015.

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS: *Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de España*, doc. CCPR/C/ESP/CO/6, 14 de agosto de 2015.

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS: *Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Misión a España*, doc. A/HRC/27/56/add.1, 22 de julio de 2014.

— *Informe del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias. Misión a España*, doc. A/HRC/27/49/add.1, 2 de julio de 2014.

OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS: *Instrumentos del Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto. Comisiones de la Verdad*, Naciones Unidas: Nueva York y Ginebra, 2006.

PARLAMENTO EUROPEO: *El programa PEACE para Irlanda del Norte*.

4. Documentos de entidades nacionales

COMISIÓN NACIONAL SOBRE LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS: *Nunca Más*, 8.^a ed., Buenos Aires: Eudeba, 2009.

— *Informe conjunto de la mesa de conversaciones entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo, Comunicado conjunto núm. 64*, 15 de diciembre de 2015.

— *Informe conjunto de la mesa de conversaciones entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo, Comunicado conjunto núm. 60*, 23 de septiembre de 2015.

— *Informe conjunto de la mesa de conversaciones entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo, Comunicado conjunto núm. 53*, 24 de junio de 2015.

5. Jurisprudencia

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: caso *Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil*, sentencia de 24 de noviembre de 2010, en *Serie C, Núm. 219*.

6. Informes de organizaciones de la sociedad civil

AMNISTÍA INTERNACIONAL: *Verdad, justicia y reparación. Creación de una comisión de la verdad efectiva*, índice AI: POL 30/009/2007, Londres, 11 de junio de 2007.

INTERNATIONAL CENTER FOR TRANSITIONAL JUSTICE: *Verdad y Memoria*.

Egiaren batzorde bat,
Gipuzkoan memoria historikoa
berreskuratzeko mekanismoa

Esther Beceiro | M.^a Lourdes Fernández

Jorge Rodríguez | Carlos Villán

Egiaren batzorde bat,
Gipuzkoan memoria
historikoa berreskuratzeko
mekanismoa

Herrialde handiak ez dira garai ilunik eta ankerkeriarik izan ez dutenak; horiek beldurrik gabe aztertu eta gainditu ahal izan dituztenak baizik.

Leo VALLADARES, Hondurasko Giza Eskubideen Babeserako mandatari nazionala

AURKIBIDEA

Sarrera	67
1. Nazioarteko estandarrak egiaren batzordeetan	71
1.1 Egia jakiteko eskubidearen garrantzia gatazka ondorengo gizarteetan	71
1.2 Iraganean gertatutakoa jakitea ezinbestekoa da eta horretarako bidea dira egiaren batzordeak	74
1.3 Egiaren batzordeen estandar komunak	77
1.3.1 Noiz dago prest Estatu bat egiaren batzorde bat sortzeko?	77
1.3.2 Mandatua onartzea.....	78
1.3.3 <i>Ratione temporis</i> eskumena.....	79
1.3.4 <i>Ratione materiae</i> eskumena.....	79
1.3.5 Mandatariak	80
1.3.6 Amaierako txostena eta gomendioak.....	80
2. Egiaren batzordeen esperientzia nazionalak	83
2.1 Argentina.....	83
2.2 Alemania	86
2.3 Ipar Irlanda.....	87
2.4 Hego Afrika.....	89
2.5 El Salvador.....	90
2.6 Brasil.....	92
2.7 Txile	93
3. Egiaren batzordea, Gipuzkoan bakea sendotzeko eta biktimen erreparazioa lortzeko tresna	95
3.1 Bi estandar berezitu: frankismoaren biktimak eta terrorismoaren biktimak. Egiaren batzordea, bi errealitateak bateratzeko tresna	96
3.2 Egiaren batzordea Gipuzkoan: hirugarren bidea?.....	99
3.2.1 Gipuzkoako egiaren batzordearen ezaugarriak.....	101
Ondorioak	107
Bibliografia	111

SARRERA

2011ko urrian, ETAK behin betiko utzi zuen indarkeria armatua, eta horrek bakerako trantsizio-prozesua zabaldu zuen Euskal Herrian. Bide horretan, indarkeriazko iraganari aurre egiteko modurik onena aurkitzea izango da gakoetako bat. Espainiako estatua, 1975ean Francisco Franco hil zenez geroztik egiten ari den trantsizio-prozesuari gehitzen zaio Euskal Herriko hau, diktadura ostekoa oraindik ixteko baitago.

Halaxe da, frankismoko eta Gerra Zibileko biktimen eskubideekiko gabeziak eta hutsuneak bere horretan daude, eta halaxe berresten dute giza eskubideen babeserako sistema unibertsaleko organo oso kualifikatuen adierazpenek;¹ beraz, Espainiak ez ditu betetzen arlo horretan bere gain hartutako nazioarteko betebeharrak.

Euskal Herriak, beraz, trantsizioko justiziako bi prozesu ditu aurrean, eta, bistan da, biktimak eragin dituztenak desberdinak izan arren, bi prozesuak loturik daudela elkarren artean.² Izan ere, oso iritzi barneratua eta zabaldua da Euskal

¹ Hauek dira azken aldian izan direnak:

GIZA ESKUBIDEEN BATZORDEA: *Giza Eskubideen Batzordearen Azken Oharrak: Espainia, CCPR/C/ESP/CO/6 dok.*, 2015eko abuztuaren 14koa.

TORTURAREN AURKAKO BATZORDEA: *Torturaren aurkako Batzordearen Azken Oharrak: Espainia, CAT/C/ESP/CO/6 dok.*, 2015eko maiatzaren 15koa.

GIZA ESKUBIDEEN KONTSEILUA: *Behartutako eta Nahigabeko Desagertzeak ikertzeko Lantaldearen Txostena. A/HRC/27/49/add.1 dok.*, 2014ko uztailearen 2koa; *Egia, justizia, erreparazioa eta berriro ez gertatzeko bermeak sustatzeko Kontalari Bereziaren Txostena, A/HRC/27/56/add.1 dok.*, 2014ko uztailearen 22koa.

² Espainiako kasua «trantsiziozko» jotzearen aurka agertu izan da Felipe Gómez Isa; bere iritzi, Espainiakoa «*sui generis* kasua da, trantsiziozko justiziaren tresnak aplikatzen ari direlako, berez, trantsiziozkoa ez den kasu batean; izan ere, diktadura luze baten ondoren, demokraziarako trantsizioa arrakastaz egin zen 70eko hamarkadaren bigarren erdian. Alabaina, Espainiaren demokraziarako trantsizio arrakastatsu hori auzitan jartzen ari dira gaur egun, 30 urteren buruan, hainbat sektore, Gerra Zibilaren eta frankismoaren memoria historikoa berreskuratzeko puri-purian den eztabaida sozial, politiko eta mediatikoak hauspotuta. Eta auzitan dagoen honetan, batzuek Espainiako trantsizioa berrikusteko eskatu dute, “Espainian demokraziaren sorreraren eta zuzenbide-estatuaren mito gisa izan duen funtzioa” birplanteatzeko». F. GÓMEZ ISA: «Retos de la justicia transicional en contextos no transicionales. El caso español», in S. RIPOL CARULLA eta C. VILLÁN DURÁN (zuz.): *Justicia de transición: El caso de España*, Barcelona: ICIP, 2012, 175. or.

Herrian ordena frankistaren errepresioari aurre egiteko sortu zela ETA erakunde armatu gisa,³ eta, hain zuzen, hortik dator bi egoeren arteko lotura argia.

Giza eskubideen urraketa sistematikoa eta etengabea izan da denbora honetan guztian, eta aldi horretan gertatutakoa ikertzea da Estatuaren betebeharrak nagusietakoa, behin errepresio-garai hori amaitzen denean.⁴ Ikerketa judiziala izan edo estrajudiziala izan, iraganaren berri jakitea funtsezko tresna da gizarte ororentzat, bakerako eta demokraziarako bideari ekiteko, eta, bide horretan aurrera egin ahala, adiskidetzea lortzeko.

Azterlan honek, beraz, bi eremu jorratzen ditu: judiziala eta estrajudiziala. Judiziala, iraganean gertatutako giza eskubideen urraketak eta delituak argitzeko ikerketa judizialak abiatzea eta horien bidez zer gertatu zen jakitea justiziarako eskubidearen eginbeharrak betetzeko modua delako. Eta estrajudiziala, badirelako zigortu ezin diren gertakariak baina gizarteak jakin behar dituenak, horiek ere gure historiaren pasarte ezinbestekoak direlako eta historia hori ezagutzen ez duen herriak, halaber, horiek berritzeko arriskua duelako.

Gipuzkoan aurrez aurre dugun eszenatokia, Euskal Herri osora estrapolagarria, oso konplexua da; izan ere, tartean diren eragileak era askotakoak dira, eta, beraz, ezinbestekoa da zuhertasun handiz jokatzeko lurreko historiako honetan egindako krimenak ikertzerakoan. Azterlan honetan behin eta berrito geratuko da agerian ezaugarri hori.

Hala ere, uste sendoa dugu kasu guztietan Giza Eskubideen Nazioarteko Zuzenbidea (GENZ) arautzen duten printzipioak aplikatu behar direla, eta, hain zuzen, printzipio horiek hartu ditugu oinarri, analisi juridiko objektibo bat egiteko.

Halaxe definitu izan du Villán Duránek GENZ:

Gizarte, ekonomia eta botere aldetik garapen desberdina izan duten Estatuaren arteko lankidetzaren harreman instituzionalizatuen sektore bat arautzen duten printzipio eta arauen sistema. Horren xedea da unibertsoari aitortutako oinarriko giza eskubide eta askatasunetik errespetua sustatzea, baita eskubide eta askatasun horiek bermatzeko eta babesteko mekanismoak ezartzea ere. Oro har, gaur egungo Estatuaren nazioarteko

³ R. LÓPEZ ROMO: *Informe Foronda: los contextos históricos del terrorismo en el País Vasco y la consideración social de las víctimas. 1968-2010*, Gasteiz: Eusko Jaurlaritzak, Valentín de Foronda Gizarte Historiarako Institutua, Euskal Herriko Unibertsitatea, 2014, 27. or.

⁴ IKUSI J. CHINCHÓN ÁLVAREZ: *Derecho Internacional y transiciones a la democracia y la paz: hacia un modelo para el castigo de los crímenes del pasado a través de la experiencia iberoamericana*, Madril: Parthenon, 2007, 235-272. or.

komunitatearen kezka legitimotzat, eta, zenbait kasutan, interes oinarritzotzat kalifikatzen dira eskubide eta askatasun horiek.⁵

Giza eskubideen unibertsaltasuna; hau da, giza duintasunak horrela eskatzen duelako eta pertsona izate hutsagatik, giza eskubideen estandar berberak aplikatzea pertsona guzti-guztiei munduko leku guztietan, horra azterlan honen ideia nagusia eta oinarria: egia jakiteko, justiziarako, erreparaziorako eta berriro halakorik ez gertatzeko giza eskubideak babestea, eskubide horien jabe baitira giza eskubideen urraketa jasan duten biktima guztiak, bai Euskal Herrian bai munduko edozein lekutan.

Estandar horiek Euskal Herrian, eta zehazki Gipuzkoan aplikatzeko, aintzat hartu behar da hainbat biktima kolektibo daudela: Gerra Zibileko biktimak, frankismoak eragindakoak eta ondorengo trantsizio politikoan, 1970eko hamarkadan, ETA mugimendu armatuak eragindakoak. Hori dela eta, frankismoan gertatutakoaren berri jasotzerakoan, indar frankisten krimenak ez ezik, urte haietan ETAK egindakoak ere aztertu behar dira, Gipuzkoako gizartearen memoria historikoan ezinbesteko gertaerak diren aldetik.

Bestalde, doktrinaren sektore baten iritzia da erregimen frankistaren errepresioa ez zela 1975ean amaitu, 1977an Parlamentu demokratikoa eratu ondorenean ere errepresio-aparatuak lanean jarraitu zuelako, ustezko gobernu demokratikoak aurreko gertakariak ez errepikatzeke politikarik ez zuelako indarrean jarri⁶. Horrenbestez, frankismoaren biktimei buruzko ikerketa objektiboa izango bada, ezinbestekoa da demokraziarako trantsizioko lehen urteak ere aztertzea eta, ondorioz, 1978ko abenduko [Espainiako Konstituzioaren](#) eskutik sortu ziren Estatuko Segurtasun Indarrak eta Kidegoak ere biktima-eragiletzat hartzea, haiek izan baitziren garai hartan Euskal Herrian eragindako errepresio instituzionalaren protagonistak.

⁵ C. VILLÁN DURÁN: *Curso de derecho internacional de los derechos humanos*, Madril: Trotta, 2002, 85-86. or.

⁶ Gonzalo Wilhelmik eta beste zenbait egilek babestu izan dute trantsizioaren izaera errepresiboari buruzko teoria hau, garai historiko hori baketsutzat jotzen duen teoria nagusiaren aurka. Ikusi G. WILHELMI: «[Las otras víctimas de una transición nada pacífica](#)», 2012an, [Frankismoaren biktimen I. Biltzarrean](#) aurkeztutako komunikazioa.

Metodologia

Lan hau idazteko, giza eskubideen babeserako organoen azken aldiko adierazpen eta ebazpen nagusiak hartuko ditugu lehen mailako informazio-iturri gisa. Iraganean izan den errepresioa ikertzeko Espainiaren betebeharra azpimarratu izan dute behin eta berriro organo horiek. Era berean, trantsizioko justizian espezializatutako doktrina ere erabiliko dugu, urteen joanean oinarri juridiko aberatsa garatu baitu. Horren arabera, gatazka garaian gertatutakoaren egia bilatzea nazioarte mailako betebeharra da Estatuentzat, tresna hauek horretarako oinarritzat harturik: giza eskubideak babesteko nazioarteko itun nagusien interpretazio zabaldua eta nazioarteko auzitegi eskudunen sententziak berak, hala nola [Giza Eskubideen Amerika Arteko Gorteak](#) eta [Giza Eskubideen Europako Auzitegiak](#) emandakoak.

Azterlan hau hiru kapitulutan banaturik dago, eta hiru kapituluak estu-estu loturik daude elkarren artean.

Lehen kapituluan, egia jakiteko eskubidearen garrantzia jorratuko dugu, trantsizioko justizian ezinbesteko elementua den aldetik; izan ere, bai biktimek eta bai gizarteak, oro har, eskubidea dute giza eskubideen urraketa masiboak izan ziren garai historikoan zer gertatu zen jakiteko. Bestalde, eskubide hori betetzeko mekanismo egokienak egiaren batzordeak diren ala ez ere aztertuko dugu. Azkenik, egiaren batzordeek beren eginkizuna eraginkortasunez betetzeko izan behar dituzten ezaugarriak identifikatuko ditugu.

Bigarren kapituluan, egiaren batzordeen zazpi esperientzia nazional aztertuko ditugu, eta lehen kapituluan jorratutako estandarrak Estatuek zer-nola aplikatu zituzten ikusiko dugu. Bi irizpide hauek hartu ditugu aintzat esperientzia nazionalak hautatzerakoan: Estatu horietan eragina izan zuten indarkeria motak, batetik, eta egiaren batzordeek izan zituzten ezaugarriak, bestetik, haien dohain eta gabeziak euskal testuingururako irakaspen iturri izan daitezkeelakoan.

Hirugarren eta azken kapituluan, Gipuzkoan gertatu ziren giza eskubideen urraketen biktimek gaur egungo egoera zein den aztertu dugu labur-labur.

Ondorio moduan, euskal gatazka gainditzeko egiaren batzorde bat eratzearen egokitasuna jaso dugu proposamen batean.

1 NAZIOARTEKO ESTANDARRAK EGIAREN BATZORDEETAN

1.1 Egia jakiteko eskubidearen garrantzia gatazka ondorengo gizarteetan

Trantsizioko justizia, besterik eman badezake ere, ez da «justizia» mota berezi edo urardotua; aitzitik, zenbait neurritz hezurmamitutako justizia da, justizia hori, zentzurik zabalenean ulertuta, gatazka armatu batetik edo diktadura batetik atera diren gizarteetan ezarri ahal izateko.

Trantsizioko justiziak lau eskubide hauek errespetatzea du helburu: egia, justizia, erreparazioa eta berriro ez gertatzeko bermeak. Hainbat egilek behin eta berriro nabarmendu dute premiazkoa dela lau eskubide horiek batera errespetatzea; besteak beste, Juan Méndezek, [Giza Eskubideen Amerika Arteko Gorteko](#) zenbait epailek, hala nola Caçado Trindade eta Abreu Burellik, eta Nazio Batuetako giza eskubideen babeserako konbentzioz kanpoko sistemako kontalariek, Pablo de Greiffek esaterako, azpimarratu dute behar hori. Eskubide horien guztien elkarreragin bateratua mesedegarri litzateke bakoitza bere aldetik hobeto ezartzeko. Zehazki, hala adierazi izan du Pablo de Greiffek:

Jardun-eremu bakoitzak bereizita dituen gabeziak pizgarri indartsua dira elkarreraginerako ereduak bilatzeko eta horien bidez bakoitzaren mugak gaintu ahal izateko. Nazioarteko esperientziak, baita azterlanek ere, erakusten dute mandatuaren lau osagaiak [egia, justizia, erreparazioa eta berriro ez gertatzeko bermeak] osorik eta batera aplikatuta, alde interesdunek, eta batez ere biktimek, hobeto ulertzen dituztela neurriak, gertatutako eskubide-urraketen ondoren justizia egiteko ahaleginak diren aldetik, eskubidearen osagai bakoitza koordinaziorik gabe edo zatituta eta bere aldetik aplikatuta baino.⁷

⁷ GIZA ESKUBIDEEN KONTSEILUA: *Egia, justizia, erreparazioa eta berriro ez gertatzeko bermeak sustatzeko Kontalari Bereziaren Txostena, Pablo de Greiff, A/HRC/21/46 dok.*, 2012ko abuztuaren 9koa, 22. paragrafoa.

Azterlan honen mamia aurrez aipatutako lau eskubide horietako bat da: egia jakiteko eskubidea, eta, zehazki, hori gorpuzteko erreferentziazko mekanismoetako bat: egiaren batzordeak. Hala ere, eskubide hori erabat errespetatuko bada, bai alde indibidualean bai kolektiboan, beste hiru eskubideak ere errespetatu egin beharko dira ezinbestean.

Izan ere, egiaren eta erreparazioaren arteko elkarreraginaren kasuan, adibidez, soil-soilik erreparazio-neurriak hartzea, egia jakitera bideratutakoak alde batera utzita, biktimen isiltasuna «erosteko» modutzat interpreta daiteke, batez ere erreparazio-neurri horietako gehienak onura ekonomikoak baldin badira. Alde horretatik, *Giza eskubideen nazioarteko arauen urraketa agerikoak eta nazioarteko zuzenbide humanitarioaren urraketa larriak jasan dituzten biktimek helegiteak jartzeko eta erreparazioak eskuratzeko duten eskubideari buruzko oinarritzko printzipioak eta jarraibideak* agirian, honako hau jasotzen da biktimen eskubideak gogobetetzeko neurrien artean: «... gertakariak egiaztatzea eta egia publikoki eta osorik jakitera ematea».⁸ Egia jakitea, beraz, ezinbesteko erreparazio-neurria da *restitutio ad integrum* baldintza bete ahal izateko.

Justiziarako eskubideari dagokionez, soil-soilik eskubide hori babesten bada, auzitegien lana osatuko duen bestelako ikerketa-mekanismo estrajudizialik gabe, gizarteak jakingo duen egia ebazpen judizialeatik eratorritakoa baino ez da izango. Eta, horren ondorioz, gizarteak nekez ulertu eta eskuratu ahal izango du, zentzu zabalean behintzat, iraganean gertatutako giza eskubideen urraketari buruzko egia, aukera oso mugatua izango baitu horretarako beharrezkoak diren beste datu osagarri batzuk jakiteko. Izan ere, egia judiziala besterik ez dugun kasuetan, erabaki judizial horiek hezurmamituko dute gizartera iritsiko den errelatoa, eta hori ez da nahikoa egia kolektiboa argitzeko, gizarteak ezingo baitu jakin auzi-bidean ez dauden alderdien eta gorabeheren berri.

Azkenik, *Egia, justizia, erreparazioa eta berriro ez gertatzeko bermeak sustatzeko Kontalari Bereziak nabarmendutakoaren arabera*, egia jakitea da berriro halakorik ez gertatzeko bermeen oinarri nagusietako bat, biktima-eragileen eta haien laguntzaileen identitatea jakitea funtsezkoa baita halako gertaerak ez errepikatzeko.⁹ Berriro halakorik «ez gertatzeko» ohiko neurrietako bat da lotura horren adibide argia: demokraziaren etorreraren ondotik erakunde publikoak

⁸ NAZIO BATUEN BATZAR NAGUSIA: *Giza eskubideen nazioarteko arauen urraketa agerikoak eta nazioarteko zuzenbide humanitarioaren urraketa larriak jasan dituzten biktimek helegiteak jartzeko eta erreparazioak eskuratzeko duten eskubideari buruzko oinarritzko printzipioak eta jarraibideak*, A/RES/60/147 dok., 2006ko martxoaren 21ekoa, 22.b) paragrafoa.

⁹ NAZIO BATUEN BATZAR NAGUSIA: *Egiaren, justiziaren, erreparazioaren eta berriro ez gertatzeko bermeen sustapena. Egia, justizia, erreparazioa eta berriro ez gertatzeko bermeak sustatzeko Kontalari Bereziaren Txostena*, A/68/345 dok., 2013ko abuztuaren 23koa, 37. paragrafoa.

«garbitzea», eta giza eskubideen urraketak prestatzen eta/edo gauzatzen parte hartu zuten administrazioko kargudunen identitatea jakitea. Neurri horrek ekarri behar du, behin administrazio-eredu berria ezarri ondoren, pertsona horiek beren aurreko karguetatik kentzea, aurreko sistemarekin hautsi dela argi eta garbi gera dadin.

Trantsizio garaian egiak duen garrantziaren adierazle, nabarmendu beharrekoa da, orobat, egia jakiteak zer onura dituen gatazka armatu batek edo diktadura batek kolpatutako gizartea adiskidetzeko. Hain zuzen, egiaren batzordeak sortzeko helburu nagusietako bat adiskidetzea izan da. Horren adibide argiena da batzorde nabarmenenetako batek hartu zuen izena bera, Hego Afrikakoarena: [Egiaren eta Adiskidetzearen Batzordea](#).

Halaxe definitu izan du kontzeptu hori Louis Kriesbergek: «Aurkako pertsona edo taldeen edo aurrez aurre egon izan direnen arteko adiskidetasunezko akordioaren lanketa». ¹⁰ Jorge Enrique Ibañezen iritziz, berriz, zera da adiskidetzea:

Biktimen eskubideak bermatuz eta bakea lortuz eta bakeari eutsiz giza eskubideen eta nazioarteko zuzenbide humanitarioaren urraketak gainditu nahi dituzten gizarteek helburutzat eta jomugatzat hartu beharreko prozesua. ¹¹

Adiskidetze-bide horretan egia jakiteko eginkizuna, ordea, oso konplexua da; izan ere, askoren irudiko, egiak, gatazka baten ondoren gizartea elkartu beharrean, kontrakoa eragiten du: garai bateko liskarrak eta zauriak berriro harrotzea. Alegia, gertatutakoa publikoki jakiteak eta aitortzeak ekar dezake gatazka berrabiatzea edo gizartea berriro muturtzea.

Trantsizio-etapak kudeatzeko, Estatu bakoitzak neurri batzuen edo besteen alde egin izan du, bere berezitasunen arabera, etsaikeriak amaitzea eta bake sozial eta bizikidetzaren baketsura iristea helburutzat harturik. Esperientzia batzuk eta besteak alderatuz, zenbait Estatuk isiltasunaren alde egin du (egia ukatzearen alde, alegia),

adiskidetze nazionalerako bidea hori delakoan. Espainiak, adibidez, erabaki du ez inolako neurririk hartzea bide judizialek edo estrajudizialek iraganean gertatutakoa argitzeko, eta argudiatu du erabaki horri esker, gizarteak, azkenik,

¹⁰ L. KRIESBERG: «Paths to Varieties of Inter Communal Reconciliation», Bakeari buruzko Ikerketarako Nazioarteko Erakundearen VII. Biltzar Nagusian aurkeztutako txostena, Durban, 1998ko ekainak 22-26.

¹¹ J. E. IBÁÑEZ NAJAR: *Justicia Transicional y las Comisiones de la Verdad*, Bogota, Otzenhausen, Madril: Berg Institutua, 2014, 396. or.

adiskidetzeari lortu duela.¹² Alabaina, 1977ko [Amnistia Legea](#) onartu ondoren gertatutakoak aintzat hartuta (1981eko huts egindako Estatu kolpea eta indarkeria paraestataleko hainbat pasarte, besteak beste), premiazkoa da hausnartzea ea entzungor egitea eta beste aldera begiratzea modurik onena ote den berrogeita hamar urte baino gehiagoan zatikaturik egon den Espainiako gizartea adiskidetzeko.

Egia da gizarte bakoitzaren ezaugarriak oso aintzat hartu behar direla adiskidetzeari lortu ahal izateko hartu beharreko neurriak erabakitzerakoan, eta, egia da, orobat, egia jakitea kalterako izan daitekeela egoeraren arabera (indar armatuetako eta polizia kargudunen garbiketa ez bada egin, adibidez). Alabaina, egia jakitea eta adiskidetze soziala ez doaz beti eskutik; izan ere, gerta daiteke egia jakitea baina egia hori ez mesedegarri izatea gizartea adiskidetzeko, gizarte askok egia baino gehiago behar dutelako adiskidetzeko.¹³ Nolanahi ere, inoiz ez da kontrakoa gertatuko; hau da, egia ez jakiteak ez du inoiz adiskidetzetik ekarriko. Beraz, gerta daiteke egiak ondotik ez adiskidetzeari ekartzea, baina egiaz gabe inoiz ez da adiskidetzetik lortuko.

1.2 Iraganeko gertatutakoa jakitea ezinbestekoa da eta horretarako bidea dira egiaren batzordeak

Kontuan hartuta zeinen garrantzitsua den iraganeko gertakarien gaineko egia jakitea trantsizio-garaiak zuzen kudeatzeko, egiaren batzordeak aztertuko ditugu jarraian, giza eskubideen urraketak bide estrajudizialeetatik ikertzeko mekanismoak diren aldetik.

[Giza Eskubideetarako Nazio Batuen Goi Mandatariaren Bulegoak](#) honela definitu ditu egiaren batzordeak:

... ofizialki baimendutako ikerketa-organoak, aldi baterakoak eta ez-judizialak. Organo horiek nahiko epe laburra dute deklarazioak jasotzeko, ikerketak eta azterlanak egiteko eta entzuketara publikoak burutzeko, beren lana amaitzeko txosten bat argitaratu aurretik.¹⁴

¹² GIZA ESKUBIDEEN KONTSEILUA: *Egia, justizia, erreparazioa eta berriro ez gertatzeko bermeak sustatzeko Kontalari Bereziaren Txostena, Pablo de Greiff. Gehitzea. Espainiara misioa: Estatuaren iruzkinak Kontalari Bereziaren txostenaren gainean, A/HRC/27/56/add.3 dok., 2014ko irailaren 17koa, 7. paragrafoa.*

¹³ GIZA ESKUBIDEETARAKO NAZIO BATUEN GOI MANDATARIEN BULEGOA: *Instrumentos del Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto. Comisiones de la Verdad*, New York-Geneva: 2006, 2. or.

¹⁴ *Ibid.*, 1. or.

Giza eskubideen urraketak ikertzea da organo hauen eginkizun behinena, eta, hain zuzen, horixe bera da sortzen zaigun arazo nagusia: auzitegi judizialen eginkizunen eta egiaren batzordeen eginkizunen bateragarritasuna, alegia. *Zigorgabetasunaren aurkako borrokaren bidez giza eskubideak babesteko eta sustatzeko printzipio-sorta eguneratua* agiriak, egiaren batzordeen definizioa egiterakoan, hauxe zehaztu zuen:

Batzordeon helburua ez da izango justizia ordezkatzea, ez zibila edo administratiboa ez zigor arlokoa. Azken horri dagokionez, soilik zigor arloko auzitegiek dute eskumena banakako erantzukizun penala erabakitzeko.¹⁵

Hain zuzen, egiaren batzordeen eta botere judizialaren arteko eginkizunen zatiketa horrek ez du ekarri behar, halaberharrez, bi erakundeen lana gainjartzea; aitzitik, aurrez ikusi dugun moduan, haien osagarritasuna ezinbestekoa da gertatutakoaren gaineko egia osoa jakiteko. Izan ere, *egia osoa jakiteko*, gure irudiko, bi egia uztartu behar dira: batetik, egia judiziala (erantzukizun penal indibidualei loturikoa, nolabait), egoitza judizialetan jakin eta ebatzi daitekeena; eta, bestetik, egia estrajudiziala (gertatutakoaren ezaguera zabalagoari loturiko egia, gizartea baita giza eskubideak urratu ziren garaian zer gertatu den jakin nahi duena), egiaren batzordeek ikertu eta argitu beharko luketena.¹⁶ Bi erakundeen lanaren eta konbinazioaren eskutik baino ezin daiteke egia osoa jakin.

Horren harira, Arartekoak hala berretsi zuen 2012an: «Egiaren batzordeak lagungarri dira giza eskubideen egoera orokorra hobetzeko, baina horretarako, ezinbestekoa da, aldi berean, beste tresna batzuk ere abian jartzea, hala nola prozedura judizialak».¹⁷ Izan ere, trantsizio garai batean egiaren batzorde bat eratzea beste neurririk ez bada hartzen, horrekin batera prozesu judizialik abiatu gabe, giza eskubideen urraketak zigorrik gabe geratzeko arriskua handia izango da.

Bakerako eta/edo demokraziarako trantsizioa eraginkorra izan dadin egia jakiteko eskubidea errespetatzea zeinen garrantzitsua den berretsita, eta eskubide hori gorpuzteko egiaren batzordeek duten erabilgarritasuna nabarmenduta, zehaztu beharrean gara egia jakiteko eskubidea ez dela modu automatikoan beteko egiaren

¹⁵ E/CN.4/2005/102/add.1 dok., 2005eko otsailaren 8koa, 8. printzipioa.

¹⁶ Egia globala prozesu penalen bidez bilatzeak arrisku nabarmen bat dauka: egia hori oso zatikatua gera daiteke; hau da, modu isolatuan jakingo genuke gertaeren berri, haien artean loturarik gabe. Ikusi R. UPRIMNY YEPES eta M. P. SAFFON SANÍN: «Derecho a la verdad: alcance y límites de la verdad judicial», in R. UPRIMNY YEPES (zuz.): *Justicia transicional sin transición. Verdad, justicia y reparación para Colombia*, Bogota: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, 2006, 155. or.

¹⁷ ARARTEKOA: *Egia, justizia eta ordaina diktadura frankistaren biktimentzat: esanahia eta politika publikoak Euskal Autonomia Erkidegoan*, Gasteiz, 2012, 11. or.

batzorde bat sortze hutsagatik. Egiaren batzordeen sorreran maximetako bat da ez dagoela batzorde eredu bakar bat; izan ere, horrelako bat sortzeko asmoa duen herrialde batek gutxienez bi alderdi hauek hartu behar ditu aintzat: «batzordea eratzeke unean herrialdea zer egoeratan dagoen eta baldintzak zein diren».¹⁸ Hori dela eta, zer herrialdetan beteko duen bere lana, bertako beharrianak hartu beharko ditu kontuan eratzekoan; gainerakoan, nekez errespetatu ahal izango du osotasunean biktimek eta, oro har, herritar guztiek egia jakiteko duten eskubidea.

Txileko adibidea da horren eredu argiena. Pinochet diktadorea boteretik atera ondoren, egiaren batzorde bat sortu zen 1990ean ([Rettig Batzordea](#)), mandatu nagusi batekin: «desagertutako atxilotuen, exekutatuena eta hil arte torturatuen egoerak ikertzea».¹⁹ Hau da, ikerketatik kanpo utzi zituzten biktimaren heriotza eragin ez zuten gertakari guztiak, eta, horren ondorioz, batzordeak ez zituen ikertu torturak jasan bai baina hil ez ziren biktimen kasuak. Gerora onartu zuten hutsune hori, eta 2003an [Valech Batzordea](#) eratu zuten. Halaxe zehaztu zuten bigarren batzorde horri emandako mandatuan:

... Txilen gertatutako giza eskubideen urraketen inguruan egia osoa jakiten ez den artean, biktimei aitortza egiten ez zaien bitartean eta eragindako kalte bidegabea erreparatzen ez den heinean, herrialdeak ezingo du aurrera egin adiskidetzaren bidean.²⁰

Hau da, bigarren batzorde horren mandatu nagusia [Rettig Batzordea](#) gabeziak osatzea izan zen. Sorrerako dekretuaren 1. artikuluan zehaztutakoaren arabera, hauxe zuen batzordeak eginkizun nagusi:

... 1973ko irailaren 11tik 1990eko martxoaren 10era bitartean, Estatuko agenteek edo haien zerbitzura zeuden pertsonak arrazoi politikoengatik atxilotutako eta torturatutako pertsonak identifikatzea eta nor izan ziren zehaztea, aurkeztutako aurrekariak kontuan hartuta.

Argi dago, beraz, trantsizio garaian, gizartearen beharrianekin ahalik eta leialen jokatu behar dutela egiaren batzordeek. Horixe bera nabarmendu zuen Egia, justizia, erreparazioa eta berriro ez gertatzeko bermeak sustatzeko kontalari bereziak 2014an Espainiara *in loco* eginiko bisitan. Amaierako txostenean, «egia bilatzeko mekanismo ofizial bat» sor zezala gomendatu zion Kontalariak Espainiako Estatuari, eta mekanismo horrek eskumena izan behar zuela honako mandatu hau betetzeko: dagoen informazioa sistematizatzea, informazioaren eta ahaleginen zatiketa eta sakabanaketa gainditzea, ikerketarako plan ordenatu

¹⁸ J. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: *El derecho a la verdad en la justicia de transición española*, Lueca: AEDIDH, 2014, 97. or.

¹⁹ [355. Dekretu Gorena](#), 1990eko apirilaren 25ekoa.

²⁰ [1040. Dekretu Gorena](#), 2003ko irailaren 26koa.

bat zehaztea, metodologiak finkatzean eta horiek homologatzea, artxibategi eta dokumentu-funts ofizial eta ez ofizialetara sarbidea izatea, ateratako ondorioak balioztatzeko, formalki aurkezteko eta zabaltzeko prozesu ofizial bat aintzat hartzea eta horren bidez biktimei aitortza ofiziala eskaintzea, hauen eta senideen parte-hartzea sustatzea eta eskubideen nozioa oinarritzko arautzat hartzea, edozein dela ere biktimen nahiz kalte-eragileen identitatea edo afiliazio politikoa.²¹ Beraz, aurreko guztia aintzat hartuta, etorkizuneko batzorde estrajudizial batek ez badu bere lana eskakizun horiekin bat etorritz egiten, gizarteak nekez jakingo du, osotasunean, Gerra Zibilean eta frankismoan gertatutakoari buruzko egia guztia.

1.3 Egiaren batzordeen estandar komunak

Batzorde hauetarako eredu bakar eta bateraturik ez dagoela esan badugu ere, hango eta hemengo esperientziak alderatuz, ikus dezakegu izan badirela zenbait estandar komun, eta lagungarri izango zaizkigula egiaren batzordeei buruzko teoria orokor bat osatzeko. Sei kategoriatan banatuko ditugu estandar horiek, eta ondorengo lerrootan jorratuko ditugu. Hauek dira: egiaren batzorde bat eratzeke une egokia, mandatua onartzea, *ratione temporis* eskumena, *ratione materiae* eskumena, mandatariak aukeratzea, txostena eta gomendioak.

1.3.1 Noiz dago prest Estatu bat egiaren batzorde bat sortzeko?

Puntu hori [OACNUDH](#)²² erakundeak landu zuen, eta kontuan hartzeko funtsezko hiru alderdi hauek identifikatu zituen:

- Borondate politikoa. Gobernuak hartutako erabaki argi eta irmoaren bidez baino ezingo da sortu egiaren batzorde bat, funtzionamendu egokia izateko behar beste bermerekin. Batzordeak bete beharreko mandatua onartzeko moduaren arabera, botere legegileak ere erabaki dezake horrelako batzorde bat sortzea.
- Giza eskubideen urraketen aldia amaitu izana. Gatazka ez bada amaitu, litekeena da biktimek eta lekukoek beldurra izatea publikoki hitz egiteko

²¹ GIZA ESKUBIDEEN KONTSEILUA: *Egia, justizia, erreparazioa eta berriro ez gertatzeko bermeak sustatzeko Kontalari Bereziaren Txostena, Pablo de Greiff. Gehitzea. Espainiara misioa: Estatuaren iruzkinak Kontalari Bereziaren txostenaren gainean, A/HRC/27/56/add.3 dok., 2014ko irailaren 17koa, 103 g) paragrafoa.*

²² GIZA ESKUBIDEETARAKO NAZIO BATUEN GOI MANDATARIEN BULEGOA: *op. cit.*, 3. or.

edo egiaren batzordearekin lankidetzan jarduteko. Batzordeak berak ere mehatxuak izan ditzake bere lana betetzerakoan.

- Biktimek eta lekukoek interesa izatea ikerketa egin dadin.

Behin horrelako ikerketa bat abiatuko dela erabakita, [OACNUDH](#) erakundeak ezinbestekotzat jotzen du printzipio hauek errespetatzea:²³

- Trantsizioko justizia modu zabalean ulertzea: orain arteko azalpenetan argi utzi dugunez, ikerketa bat abiatzeko edo ez abiatzeko erabakiak, eta hori gidatzeko aukeratutako tresnak, bat etorri behar du Estatuaren ezaugarriekin. Egiaren batzordeak ez dira ikerketa estrajudizialak egiteko tresna bakarra; aitzitik, beste lurralde batzuetan, arartekoek, udalek eta beste erakunde batzuek egin izan dute lan hori.²⁴ Alde horretatik, esan dugu lehen ere egiaren batzordeek lan egingo duten ingurunearen arabera moldatu behar dituztela beren ezaugarriak.
- Jarduteko burujabetza: botere politikoak sortutako tresnak izanik, arriskua dago batzordeen lana botere horri estuegi loturik geratzeko. Honako hauek izango dira egiaren batzordeen burujabetzaren adierazleak: funtzionario publikoengandik zenbateko laguntza eta lankidetzat jasotzen duten, dagozkion artxiboetara sartzeko erraztasunak eta finantziario egokia izatea.
- Nazioarteko laguntza: Barneko botere politikoaren parte-hartzeari buruz esandakoaren hari beretik, atzerriko Estatuak ere lagundu egin behar diete horren beharra duten egiaren batzordeei, finantzazio arloan, zenbait artxibotara sartzeko erraztasunak ematen...

1.3.2 *Mandatura onartzea*

Mandatura onartzea normalean botere exekutiboaren edo legegilearen eskumena izaten da. Bi kasuen arteko alde nagusia indar politikoen arteko aldez aurreko adostasuna izan ohi da. Presidentearen dekretuak, soilik presidentearen borondatea jasotzen du eta, normalean, presidenteak berak, alde bakarrez, erabakitzen du batzordearen mandatura. Aldiz, batzordea lege bidez sortzen bada, adostasuna handiagoa izango da, indar politiko gehienek babestuko baitute batzorde horren eraketa.

²³ *Ibid.*, 5-6. or.

²⁴ INTERNATIONAL CENTER FOR TRANSITIONAL JUSTICE: *Verdad y Memoria*.

Hala ere, edozein kasutan, batzordea zer xedapen motaren arabera sortu den ez da hain funtsezkoa batzorde horrek arrakasta izateko edo porrot egiteko; gizarteak mandatu horren edukia babestea, hori da benetan arrakastarako giltza. Hain zuzen, gizarte zibilari alde aurretik kontsulta egitea funtsezkoa izango da batzordeak abiatutako ikerketa benetan biktimen eskakizunetan oinarritu dadin; baldintza hori, bestalde, ezinbestekoa da batzordeari hasieratik beretik eskatuko zaion burujabetza bermatu ahal izateko. Gainerakoan, batzordea diskurtso publikoari bizkar emanda eratzen eta hasten bada lanean, «oso litekeena da batzordearen lanak ez konpromiso sozialik izatea, gizartearen arazoetatik edo gizarteak jasan behar izan zituen esperientzietatik urrunduta diharduen heinean».²⁵

1.3.3 Ratione temporis eskumena

Ikertu beharreko denbora-tartea eta batzordeak bere lana egiteko izango duen denbora barnebiltzen ditu eskumen honek. Giza eskubideen urraketak edo gutxienez larrienak noiztik noiz arte gertatu ziren, denbora-tarte hori ikertu beharko du batzordeak. Batzuek denbora-tarte zabal samarra hartu izan dute aztergai, eta beste batzuek, gertakari jakin bat. Hala ere, erabilitako hizkuntza orokortzearen alde egin dute batzorde batzuek, eta, hala, aztertutako aldia aipatzeko, horrelako esamoldeak erabili izan dituzte, adibidez: «liskarren hasieratik».

Bestalde, batzordeek behar beste denbora izan behar dute beren lana ahalik eta modu zehatzenean egiteko. Hala ere, ez da komeni bi urte baino gehiago luzatzea, arriskua baitago gizarteak batzordea egiten ari den lanarekiko interesa galtzeko.

1.3.4 Ratione materiae eskumena

Aztergai diren gertakariak ez dira definitu behar modu espezifikoan eta ez dira mugatu behar giza eskubideen urraketa mota jakin batera (ikusi, [aurrez aipatutako Txileko kasua](#)). Aurreko *ratione temporis* eskumenarekin gertatzen zen modu berean, komeni da batzordearen jarduna gehiegi mugatuko ez duen terminologia erabiltzea. Adibidez, [Sierra Leonako Egiaren eta Adiskidetzaren Batzordeak](#) erabaki zuen bere mandatua ez zela mugatuko herrialdeko bertako edo nazioarteko legediaren arabera delitu izan zitezkeen giza eskubideen urraketak ikertzera, ez eta

²⁵ J. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: *op. cit.*, 102. or.

Estatuek eta Gobernuak eginiko urraketak ikertzera ere; aitzitik, «indarkeriak eta gehiegikeriak» ikertzea hobetsi zuen, bestelako kalifikatzaileak erabili gabe.²⁶

1.3.5 Mandatariak

Mandatariak ondo aukeratzea funtsezkoa da batzordearen lana arrakastatsua izan dadin. Mandatarien aukeraketa, gainera, oso estu loturik dago batzordeak jarduteko izan behar duten burujabetzarekin. Era berean, batzordeko kideak hautatzeko lehentasunezko irizpideen artean, kide horien gaitasuna litzateke garrantzitsua: gaitasuna giza eskubideen defentsan eta batzordearen lanak zuzen eramateko funtsezkoak diren beste arlo batzuetan, hala nola epailetzan, hezkuntzan, psikologian edota historian.

Era berean, interesgarria da batzordean nazioarteko kideak sartzeko aukera aintzat hartzea, nahiz eta azken-azkenean gizarteak egokien jotzen duena izan lehenetsi beharrekoa.

Azkenik, genero berdintasunaren printzipioa gorde behar da egiaren batzordearen osieran.

1.3.6 Amaierako txostena eta gomendioak

Amaierako txostena izango da batzordeak egindako lanen artean gehien iraungo duen ondarea. Alde horretatik, Jon Mirena Landak esandakoa berretsiz, «giza eskubideen hezkuntzarako eta etorkizuneko prozesuetarako iturria da» txosten hori. «Amaierako dokumentu horiek, ondo dokumentatuta eta metodologia egokiarekin eta sendoarekin eginda baldin badaude, historiaren errebisionismoaren aurkako babes ere izan daitezke».²⁷

Amaierako txosten horretan honako eduki hauek jaso behar dira:

... batzordearen mandatua, esparrua eta irismena; frogak ebaluatzeko prozedurak eta metodoak eta zer lege hartu den oinarri; ikerketaren testuingurua, eta hor sartzan

²⁶ AMNESTY INTERNATIONAL: *Verdad, justicia y reparación. Creación de una comisión de la verdad efectiva*, POL 30/009/2007 dok., 2007ko ekainaren 11koa, 13. or. Egiaren batzordeen eskumen materiala sakonago aztertzeko, ikusi J. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: *op. cit.*, 106-108. or.

²⁷ J.-M. LANDA GOROSTIZA: *Euskadiko Egiaren Batzordea eratzeke proposamen baterako oinarriak*, Gasteiz, Giza Eskubideen Zuzendaritza, Justizia Sailburuordetza, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzza Saila, Eusko Jaurlaritza, 2009ko martxoaren 31, 30. or.

dira egoki irizitako baldintza sozial, politiko eta ekonomikoak, bai eta batzordeak Gobernuaren eta beste erakunde publiko batzuen beharrezko laguntza izan duen ala ez jakiteko informazioa ere; batzordeak ateratako ondorioak eta zer agiri eta frogatan oinarrituta iritsi ziren ondorio horietara (zerrenda); aplikatzekoa den legedian eta ateratako ondorioetan oinarrituta ateratako ondorioak, erakundeen egiturei, politikei eta jardunei buruzko azterketa kritikoa barne; biktimen zerrenda bat (haiek babesteko asmoarekin identitatea ezkutuan mantendu nahi dutenena salbu) eta egindako gomendioak.²⁸

Gomendioei dagokienez, batzordeak nahikoa eskumen izan behar du Estatuari galdegiteko, adibidez, erakundeak erreforma ditzala eta ekimen legegileak edo bestelako erreforma funtsezkoak abia ditzala, biktimen erreparazio osoa lortzeko.

Egiaren batzordeak bere egunean egiten dituen gomendio horiek onartzeko eta betetzeko botere publikoen konpromisoa ere jaso behar da azken txosten horretan.

²⁸ AMNESTY INTERNATIONAL: *op. cit.*, 35. or.

2 | EGIAREN BATZORDEEN ESPERIENTZIA NAZIONALAK

Gipuzkoan balizko egiaren batzorde batek izan beharko lituzkeen ezaugarriak zehazteko, bereziki interesgarria da arlo horretan izan diren esperientzia nazionalak aztertzea. Azkeneko hamarkadetan horrelako hainbat ekimen izan dira.²⁹ Kapitulu honetan, hala ere, dela haien ezaugarri formalengatik dela aztergai izan duten esparruagatik, gurean aplikagarri diren elementuak dituzten kasuak baino ez ditugu aztertuko.

2.1 Argentina

Pertsonen Desagertzeari buruzko Batzorde Nazionala (CONADEP) nazioartean oihartzuna eduki zuen lehen egiaren batzordea izan zen, baita, gerora, giza eskubideen urraketak ikertzeko eredu horri jarraitzea erabaki zuten Estatuen lehen erreferentzia ere. Sortze beretik herrialdean bertan babes handia izan zuelako eskuratu zuen erreferentzialtasun hori, hein handi batean.

Aspalditik zetorren Argentinan egia jakiteko aldarria, baita horretara bideratutako neurriak aplikatzeko beharra ere, diktaduraren lehen urteetatik; izan ere, beste egoera eta leku batzuetan ez bezala, Argentinan gizarte zibila oso sendo antolatuta zegoen³⁰ eta gizarte horren aldarrikapenei esker etorri ziren, neurri handi batean, demokrazia iristearekin bat, egia jakiteko eskubidearen aldeko aurrerapausoak.

²⁹ Egiaren batzordeei buruz argitaratutako lan ugarien artean, interes handikoa da honako hau: P. HAYNER: *Verdades innombrables: el reto de las comisiones de la verdad*, México: S.L. Fondo de Cultura Económica de España, 2008 (gaztelaniazko edizioa); E. IBÁÑEZ NAJAR: *op. cit.*

³⁰ Elkarte horien artean nabarmentzekoak dira [Maiatzeko Plazako Amak](#), [Maiatzeko Plazako Amonak](#) eta [Lege eta Gizarte Ikasketen Zentroa](#). Erakunde horiek Argentinako diktadura eta trantsizio garaian abiatutako ekimenei buruzko ikuspegi zehatzagoa izateko, ikusi A. GONZÁLEZ BRINGAS: «Abuelas-Madres de Plaza de Mayo: la construcción social de la memoria», in F. GÓMEZ ISA (zuz.): *El derecho a la memoria*, Bilbo: Pedro Arrupe Giza Eskubideen Institutua, 2006, 579-615. or.

Batzorde militarrek indargabetu ondorengo hauteskunde demokratikoetan bertan islatzen hasi ziren aurrerapauso horiek. Raúl Alfonsín, diktaduraren ondorengo lehen presidente hautetsia eta CONADEP batzordearen bultzatzaile nabarmena, hauteskunde-programa argiarekin aurkeztu zen bozetara. Lehenetsun artean, garbi utzi zuen bere administrazioak ez zituela errespetatuko auto-amnistia legeak eta beharrezkoa zela errudunak epaitzea. Botoen %50 baino gehiagorekin irabazi zituen Alfonsinek hauteskundeak.

CONADEPek, funtzionamenduan zenbait gabezia izan arren,³¹ zazpi mila pertsonari deklarazioa hartzea lortu zuen, eta, elkarrizketa horien bidez, zortzi mila bederatzehun eta hirurogei pertsona desagerturen eta ezkutuko hirurehun eta hirurogeita bost tortura-zentron berri jakin zuen.³²

Hala ere, CONADEP-en lorpen handiena beste bat izan zen: auzitegiek, batzordearen amaierako txostenean oinarrituta,³³ gertakariaren ikerketa judiziala abiatu ahal izateko beharrezkoa zen informazioa eskuratu izana, hain zuzen. Horren adierazle, «13. Kausa» deritzon, fiskaltzak zazpiehun eta bederatzik kasu aurkeztu zituen hirurogeita hemezortzi saio publikotan, eta zortziehun eta laurogeita hiru lekuko agertu ziren epailearen aurrean, hasieran deitutako 1984 haietatik.³⁴ Azkenik, Hiriburu Federaleko Auzi Kriminal eta Zentzatzailen Apelazio Ganbera Nazionalak sententzia eman eta bederatzik komandante militar ohietatik bost kondenatu zituen espetxera.

Nahiz eta Argentinak nazioarteko estandar egokiei jarraitu zien egiaren, justiziaren eta erreparazioaren arloan, ez zituen diktaduraren sokako erakundeetako karguak garbitu, hala nola poliziakoak eta indar armatuetakoak, eta, ondorioz, hainbat altxamendu militar eta matxinada sortu ziren. Horrek, arriskuan jarri zuen biktimen eragile izan ziren pertsonen aurkako etorkizuneko auzibide judizialen jarraipena ez ezik, Argentinako demokrazia gaztearen egonkortasuna bera. Horren ondorioz, «zigorgabetasun legeak» zeritzenak onartu zituen Argentinak:

³¹ CONADEPek behartutako desagertzeen ia bederatzik kasu identifikatu zituen, baina bakan batzuen historia baino ez zuen jaso amaierako txostenean, ereduzat hartzeko. Beraz, biktima gehienen kasuan egia jakiteko eskubidea errespetatu gabe geratu zen. F. CAMACHO PADILLA: «La construcción histórica de la represión en Argentina y Chile: las Comisiones de la Verdad como instrumento de narración oficial», *Revista de Historia Iberoamericana*, 7. lib., 2014, 1. zka., 58. or.

³² P. HAYNER: *op. cit.*, 65. or.

³³ PERTSONEN DESAGERTZEEI BURUZKO BATZORDE NAZIONALA: *Nunca Más*, 8. ed., Buenos Aires: Eudeba, 2009.

³⁴ M. OLLÉ SESÉ: *Justicia Universal para Crímenes Internacionales*, Madril: La Ley, 2008, 296. or.; J. CHINCHÓN ÁLVAREZ: *op. cit.*, 382. or.

Punto Final legea³⁵ eta *Obediencia Debida* legea.³⁶ Eta, zigorgabetasunaren mapa osatzeko, Carlos Menem Gobernuko presidentek lau indultu eman zituen 1989 amaieratik 1990era bitartean, eta barkamen horrek 1976 eta 1983 artean gertatutako giza eskubideen urraketen ondoriozko erantzukizun penalak behin betiko zuritzea eta lehendik ezarritako zigorrak indargabetzea ekarri zuen.³⁷

Biktimak egia jakiteko eta justiziarako eskubideak betetzeko biderik gabe geratu ziren, beraz, eta, gizartea bestelako alternatiba batzuk urratzen hasi zen, eskubide horiek gauzatu ahal izateko. Herrialdean bertan, egia jakiteko epaiketak egin zituzten, egiaren batzordeen eta prozesu penalen arteko auzibide hibridoak. XX. mendearen amaierako Argentina hartan (lehen epaiketak 1999. urtean egin ziren), ez zen beste biderik geratu, alde batetik, bertako ordenamendu juridikoa errespetatzeko, eta, bestetik, biktimen eskubideak betetzeko.

Nazioartean, hainbat Estatu (Italia, Suitza, Suedia, Alemania eta Espainia) prozesu penalak abiatu zituzten jurisdikzio unibertsalaren printzipioa aplikatuz, Argentinako lurretan berriro ere zigor-bidea berraktibatzeke.³⁸ Horren ondorioz, 24.952 Legea, 1998ko apirilaren 15ekoa, onartu zuen Argentinak, zigorgabetasun legeak indargabetzeko, eta gerora, «onartezin eta baliogabetzat» jo zituen aipatutako lege horiek, 2003ko irailaren 2ko 25.779 Legearen bidez. Azkenik, beharrezko urratsa hori ere, 2005eko ekainaren 14an, Nazioko Justizia Gorte Gorenak konstituzioaren aurkakotzat jo zituen aurrez aipatutako zigorgabetasun legeak, eta 24.952 Legearen indarraldia berretsi zuen.

Aurreko guztia aintzat hartuta, Argentinakoa oso adibide esanguratsua da, adierazgarriena beharbada, ohartzeko Estatu batek zer ahalegin egin duen, bide batetik edo bestetik, biktimen eskubideak errespetatzeko, urraketak egin zirenetik zenbat denbora pasa den kontuan hartu gabe.

³⁵ 23492 Legea, 1986ko abenduaren 23koa.

³⁶ 23521 Legea, 1987ko ekainaren 4koa.

³⁷ Hauek izan ziren indultu-dekretuak: 1002, 1003, 1004 eta 1005, 1989ko urriaren 7koak. 1990eko abenduaren 29an, 2741, 2745 eta 2746 indultu-dekretuak eman ziren. Epaietaren zain ziren hirurehun pertsona indultatu zituzten, «adiskidetzeko nazional» irrikatua lortze aldera.

³⁸ J. CHINCHÓN ÁLVAREZ: *op. cit.*, 389. or.

2.2 Alemania

Garai bateko Alemaniako Errepublika Demokratikoak giza eskubideen urraketen espediente zabala zuen, 30eko hamarkadako diktadura nazional-sozialistaren hasieratik 1989an Berlingo harresia erori zen arte oparo gizendua. Bistan denez, herrialde horrek ez zuen gobernu demokratikorik izan hirurogeita hamar urtean. Bi Alemaniak batu ondoren eratutako lehen gobernuak, beraz, horixe izan zuten premiazko eginkizun nagusietako bat: bi diktaduren ondarea kudeatzea.

Argentinan gertatu zen moduan, Alemanian ere gizarte zibilak funtsezko eginkizuna izan zuen Estatuaren iragan errepresiboa ikertuko zuen tresna bat sortzeko.³⁹ Hala, gizartearen aldarriaren eskutik gorpuztu zen *Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages* batzordea.⁴⁰ Alabaina, Alemaniako *Bundestag*-aren baitan ikerketa-batzordeak sortzeko lehendik zegoen egiturari jarraituz eratu zen organoa, eta horixe izan zen aipatutako batzordeak bere jardunean izan zuen makur nagusia. Izan ere, *Bundestag*-eko batzorde parlamentarioak eraterakoan, legebiltzarreko une hartako ordezkartzaren proportzio berean hautatzen ziren mandatariak, eta, horrenbestez, Ekialdeko Alemanian *Sozialistische Einheitspartei Deutschlands* (SED) garaiko diktadura ikertu behar zuten batzordekideak politikariak izan ziren gehien-gehienak.⁴¹

Lehen kapituluan, mandatarien hautaketa jorratu dugunean, azpimarratu dugu baldintza hori ezinbestekoa dela batzordearen lana eraginkorra izateko. Izan ere, batzordeak bete beharreko mandatuarekin lotura duten gaitan zer gaitasun duten, horren arabera hautatu behar dira mandatariak; hau da, besteak beste, giza eskubideen defentsan, epailetzan, hezkuntzan, psikologian edota historian duten jakintzaren arabera. Eta, era berean, haien independentzia ere ezinbestekoa da hautaketa egiteko.⁴²

Alemaniak, ondoriozta daitekeenez, ez zuen estandar horietako bakar bat ere hartu oinarri *Enquete-Kommission* batzordea eratu zuten kideak hautatzerakoan, eta, beraz, aski eztabaidagarria da organo hori sortzeko asmoa, egiaz, diktadura komunistaren garaian gertatutakoa ikertzea ote zen; beste era batera esanda, biktimen eta, oro har, Ekialdeko Alemaniako gizarte guztiaren egia jakiteko eskubidea betetzeko sortu ote zen. Hain zuzen, hainbat egilek, hala nola Andrew

³⁹ A. BEATTIE: *Playing Politics with History: The Bundestag Inquiries into East Germany*, Nueva York-Oxford: Berghahn Books, 2008, 24. or.

⁴⁰ 1992ko maiatzaren 14ko 12/2597 Legearen bidez sortua.

⁴¹ Hamasei legebiltzarkide eta hamaika akademiko izan ziren, azkenean, batzordeko kide, eta Rainer Eppelman, Alemaniako Errepublika Demokratikoaren aurkako ekingizalea, izan zen batzordeburu.

⁴² GIZA ESKUBIDEETARAKO NAZIO BATUEN GOI MANDATARIEN BULEGOA, *op. cit.*, 13-15. or.

Beattiek, nabarmendu dute mandatari gehienen asmoa SEDeko Gobernu deslegitimatzea izan zela, eta ez horrenbeste biktimen sufrimenduari arreta jartzea,⁴³ seguru asko, ez zen horrelakorik gertatuko batzordekideak aurrez zehaztutako estandarren arabera hautatu izan balira.

Batzordearen azken emaitzari erreparatuta,⁴⁴ ondoriozta daiteke, hain zuzen, lanaren ardatza ez zela biktimek gatazkan izan zuten lekua aztertzea (hala izan beharko zukeen); aitzitik, lan akademiko hutsa egitera mugatu zela batzordea,⁴⁵ hamabost mila orrialdetik gorako lana; eta, Jan-Werner Müllerrek adierazi izan duenez, «interes alderdikoen arabera antolatutako kontakizun kontraesankorrak eta memoria selektiboak aurkeztera iritsi zen soilik».⁴⁶

Esperientzia horrek irakaspen argia utzi digu: gizarte zibilak beti-beti hartu behar duela parte batzordearen mandatu prestatzeko eginkizunean; izan ere, zenbat eta gehiago urrundu mandatu hori gizartearen beharrezanetatik, orduan eta oihartzun eta eragin gutxiago izango du batzordearen lanak biktimen artean. Eta, orobat, Alemaniako kasuak argi erakusten du oso garrantzitsua dela mandatarien independentzia eta neutraltasuna.

2.3 Ipar Irlanda

Aurreko bi esperientziak egiaren batzordeen jardun egokien edo okerren irakaspenak jasotzeko hautatu ditugu. Ipar Irlandako testuingurua, berriz, erreferentzia balagarria da Euskal Herriko kasurako, alde batetik, bi gatazkan artean izan badirelako antzekotasun batzuk (nahiz eta bakoitzak bere berezitasunak dituen eta zaila den biak alderatzea), eta, bestetik, beharrezkoa delako terrorismoak bi gizarteetan utzi duen oinordetza kudeatzea.

⁴³ A. BEATTIE: *op. cit.*, 83-84. or.

⁴⁴ Amaierako txostena, *Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland*, deritzona, 1994an argitaratu zuen batzordeak.

⁴⁵ A. J. MCADAMS: *Judging the Past in Unified Germany*, Cambridge: Cambridge University Press, 2001, 91. or.

⁴⁶ J. W. MÜLLER: «Alemania del Este: incorporación, verdad corrompida y doble división», in A. BARAHONA DE BRITO, P. AGUILAR eta C. GONZÁLEZ ENRÍQUEZ (arg.): *Las políticas hacia el pasado: juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias*, Madril: Istmo, 2002, 382. or. Egile honen beraren hitzetan, eta ildo berari jarraituz, «Ekialdeko Alemaniako diktaduraren ikerlariarentzat, hau [amaierako txostena], Hirugarren Reicha aztertzen dutenentzat Nurenbergeko epaiketako akten parekoa litzateke», 393. or.

Aztergai dugun gaiari dagokionez, Ipar Irlandan ez da, berez, egiaren batzorderik eratu, beste Estatu batzuek iraganeko gertakarien ikerketa estrajudiziala egiteko sortutakoan antzekorik. Priscilla Haynerrek berretsi izan duenez, egiaren batzorde bat sortzeko gaia denbora luzean egon da negoziazio-mahaiaren gainean, baina betiere eztabaida zabalago baten hizpidea izan da; hain zuzen, Ipar Irlandako egoera normalizatzeko trantsizioa zer-nola egin, horixe izan da eztabaida zabalago horren muina. Nolanahi ere, aldarrikapen hori beti izan da eta horrela da orain ere, gatazkaren biktimen eskakizunetako bat; adibidez, Ballymurphyko sarraskiaren biktimena.⁴⁷ Gertakari horiek ez dira ikertuak izan orain arte eta, biktimen beraien esanetan, han gertatutakoaren ondoren ikerketarik ez abiatzeak hauspotu egin zituen, hein batean, *Bloody Sunday* egun lazgarri hartako liskarrak; izan ere, han esku hartu zuten armadako kide batzuek Ballymurphyko sarraskian ere hartu zuten parte.

Hain zuzen, *Bloody Sunday*-ko gertakarien ikerketak (azken txostenak 10 liburuki eta 5.000 orrialde hartu zituen) eta armada britainiarrak gertakarietan izan zuen erantzukizuna egiaztatu izanak bultzatuta, David Cameron Erresuma Batuko lehen ministroak barkamen publikoa eskatu zuen 2010ean, han gertatutakoengatik.

Era berean, hainbat ekimen sortu dira geroztik, eta guztiek azpimarratu dute beharrezkoa dela gertatutakoaren egia argitzeko batzorde bat sortzea. Zehazki, hiru ekimen hauek izan dira azpimarratzekoak:

Healing Through Remembering. 1999. urtean Alex Borainek, Hego Afrikako Egiaren eta Adiskidetzaren Batzordeko arkitektoetako batek, Ipar Irlandara eginiko bisitaren harira gorpuztu zen ekimen hau. Ekimenaren amaierako txostenak, *All Truth is Bitter* deritzonak, Hego Afrikako batzordearen lanak Ipar Irlandako testuingururako zer irakaspen erabilgarri izan ditzakeen aztertzen du.

Consultative Group of the Past. 2006an sortu zen talde hau, iraganeko ondarea hobeto tratatze aldera zer bideri jarraitu aztertzeko. Ipar Irlandako, Erresuma Batuko eta Irlandako Errepublikako hainbat sektoretako kideak eta eragileak gonbidatu zituzten taldera, beren esperientziak elkarbanatzeko eta etorkizun baketsua eraikitzeko baliagarri izan zitezkeen ekimenak identifikatzeko.

Haass -O'Sullivan negoziazioak. Itzal handiko bi diplomatiko estatubatuar bildu ziren Ipar Irlandako baketze bidea sendotzeko negoziazioetara, Richard Haass eta Megahn O'Sullivan, negoziazioen esparrua herrialdeko eremu politiko guztietara zabaltzeko asmoarekin. Negoziazio horiek bi diplomatikoek gidatutako

⁴⁷ Hamaika pertsona hil zituen armada britainiarrak 1971ko abuztuan.

Together: Building a United Community panelean hezurmamitu ziren. Gizarteak buru egin beharreko hainbat premisa jaso zituen egitasmo horrek; besteak beste, zer mekanismo mota erabili, edo egia zer eratan argitara eman.

Bestalde, berrikiago, Ipar Irlandako eta Euskal Herriko komunitateen arteko lotura gero eta nabariagoa da, eta horren adierazle dira Jonan Fernandezek, Eusko Jaurlaritzako Bake eta Bizikidetzarako gaur egungo idazkariak, 2014ko urtarrilean Belfastera eginiko bisita, bake eta bizikidetzarako ekimenak elkarbanatzeko;⁴⁸ eta Europar Batasunak Ipar Irlandara begira bultzatutako laugarren PEACE Planean EAEk izan duen elkarlana⁴⁹ (2014ko urria), han jasotako proposamenak Euskal Herrian ere aplikagarri izan daitezkeen ikuspegiarekin.⁵⁰

Ekimen mota hauek ez dira formalki egia argitzeko sortuak, baina egiaren batzordeak bezain funtsezkoak dira, agerian geratzen baita zeinen garrantzitsua den, modu batera edo bestera, giza eskubideen urraketen garaian gertatutakoari buruzko egia jakitea, eta eginkizun hori Estatu politika izatea, ekimena soilik gizarte zibilaren esku utzi gabe.

2.4 Hego Afrika

Seguru asko Hego Afrikakoa da egiaren batzordeen adibide esanguratsuen eta mundu mailan ezagunena. Egiaren truke justizia formulatu oinarrituta, *Egiaren eta Adiskidetzaren Batzordearen* sustatzaileek uste sendoarekin egin zuten lan, batetik, biktimen erreparazio eraginkorrerako eta, bestetik, gizartearen adiskidetzarako bide bakarra zegoela sinetsita: gertatutakoaren ertz guztiak jakitea, botere judizialaren parte-hartzea alde batera utzita.⁵¹

Horrenbestez, planteamendu horri egin dakioken lehen eragozpena da ez diola jarraitzen egia jakiteko, justiziarako eta erreparaziorako eskubideen arteko elkarreraginaren printzipioari eta, alde horretatik, huts egiten duela lehen kapituluan aipatutako baldintza ezinbesteko horretan. Izan ere, gure kasuan, prozesu judizialik ez izateak gertatutakoaren zati baten berri ez jakitea ekarriko

⁴⁸ EUROPA PRESS: «El Gobierno vasco visita Belfast para intercambiar experiencias en materia de paz y convivencia», *El Diario*, 2014ko urtarrilaren 16a.

⁴⁹ EUROPAKO LEGEBILTZARRA: *Ipar Irlandarako PEACE Programa*.

⁵⁰ M. VÁZQUEZ: «Euskadi e Irlanda del Norte colaborarán sobre las víctimas, los presos y el relato», *Deia*, 2015eko urriaren 24a.

⁵¹ Hego Afrikako Egiaren eta Adiskidetzaren Batzordea sortu zutenek zigor-epaiketak zergatik baztertu zituzten gehiago jakiteko, lan hau kontsulta daiteke D. TUTU: *No future without forgiveness*, New York: Doubleday, 1999,20-24. or.

luke, egia judizial eta indibiduala alde batera utziko baikenuke; hau da, egoitza judizialean jakiten den egia.

Hego Afrikako Egiaren eta Adiskidetzearen Batzordean, egia justiziaren truke formulari jarraituz, Batzordeari laguntzea erabakitzen zuten errepresioegileek edo biktima-eragileek, beren krimenak publikoki aitortu, eta amnistia eskuratzen zuten. Amnistia, beraz, *apartheid*-aren garaian krimenak egin zituzten gehienentzat aitortza lortzeko pizgarria bihurtu zen, eta, bide batez, biktimei gertatutakoaren berri emateko bidea.

Proposamen horri esker, beraz, egiaren batzordeak ahalmena zuen egia globala argitzera ez mugatzeko –hau da, gizarte guztiak jakin beharko lukeen egia–; aitzitik, entzunaldi publikoen bidez (biktimek, banaka-banaka, beren kontakizuna egiten zuten eta biktima-eragileekin elkar eragiten zuten entzunaldi horietan) aukera izan zuen egia indibidualaren berri ere jakiteko.⁵²

Nahiz eta Hego Afrikako esperientziak gabezia nabarmenak dituen justiziarako eskubideari dagokionean, egia jakiteko eskubidearen alde eginiko ahalegina, aipatutako bi alderdietan, esperientzia-iturri aberatsa da antzeko testuinguruetarako.

2.5 El Salvador

El Salvadorko esperientzia egiaren batzordeen adibide paradigmaticoenetakoa da; alde batetik, bake-akordio baten bidez sortutako lehen batzordea izan zelako, eta, bestetik, soilik nazioarteko kidez osaturiko lehena izan zelako.⁵³ Sektore askoren iritziz, batzordearen independentziari eta lanaren objektibotasunari eusteko modua izan zen azken baldintza hori. Batzordea nbek babestu zuen, eta ez gobernu nazionalak, eta hortik nazioarteko izaera hori.

⁵² Metodo hori kontrajarria izan daiteke beste testuinguru batzuetan egia bilatzeko baliatu izan diren beste ekimen batzuekin. Horietan, Estatuak, batzorde estrajudizial bat sortzen du eta horretara mugatzen du egia argitzeko eginkizuna, ikerketa judiziala alde batera utzita (normalean, amnistia legeren bat onartu delako). Hala ere, batzordeak ez badu entzuketa publikoen gisako mekanismorik, edo ez badu biktimen egia indibiduala argitzeko behar bezain mandatu zabalik, gabezia nabarmena edukiko du biktimen eskubideak errespetatuak izateko.

⁵³ [Human Rights Watch](#) eta beste zenbait erakundek nabarmendu egin dute batzorde horren lana, Nurenbergeko epaiketez geroztik nazioarteko lehen aldiz ikertu baititu Estatu burujabe batek giza eskubideen aurka eginiko urraketak. Ikusi [HUMAN RIGHTS WATCH: «El Salvador. Accountability and Human Rights: the report of the United Nations Commission on the Truth for El Salvador»](#), *News From Americas Watch*, IV. lib., 1993, 7. zka., 5. or.

Gatazka bateko alderdiek elkar ondo ulertzeko ikerketa batek izan ditzakeen onuren adierazle argia da El Salvadorko batzordearen sorburua. Bake-negoiazioen bilakaeran, gatazkan gertatutako en errua elkarri leporatzen hasi ziren bi aldeak, baina, aurrera egin ahala, jabetzen joan ziren nekez iritsiko zirela behin betiko akordio batera baldin eta akusazioekin eta kontra-akusazioekin jarraitzen bazuten;⁵⁴ horren ondorioz, indar hartzen joan zen bi aldeen artean «konfiantza lortzeko» mekanismo bat sortzeko ideia,⁵⁵ horren bidez trantsizio baketsua izateko.

Bi aldeek ez zuten nahi izan botere judiziala edo Estatuko organoren bat ikerketaz arduratzea, ez batak eta ez besteak ez baitzuen konfiantzarik haien jardunaren objektibotasunean, eta horregatik aukeratu zuten egiaren batzordea ikerketa gidatzeko mekanismo egokitzat. Eta arrazoi berberetatik osatu zuten batzordea soilik atzerriko kideek.⁵⁶

Batzorde horrek izan zuen beste bereizgarri bat: eskumena zuen giza eskubideen urraketak eragin zituzten pertsonen izenak argitara emateko. Txaden sortutakoak ere izan zuen ahalmen hori. Alabaina, El Salvadorren, polemika handia harrotu zuen gai horrek; izan ere, mekanismo ez-judizial batek eman behar zuen argitara pertsona horien identitatea, eta identifikatuek ez zuten aukerarik izango batzordearen aurrean beren burua defendatzeko, auzitegi batean ez bezala. Hala ere, batzordeak ahalmen hori izan zezan emandako arrazoiak, funtsean, batean laburtzen ziren: eskumen hori gabe ezingo zela egia osoa jakin. Ildo berean, nekez abia zitekeen barkamenaren eta adiskidetasunaren bidea, nori barkatu behar zitzaion jakin gabe.

Azken txostena argitaratuta, biktimak eragin zituzten pertsonen identitatea jakinda eta El Salvadorren bakea sendotzeko gomendio egokiak emanda, botere betearazleak eta gizartean artean eragin handia zuten sektoreek (besteak beste, indar armatuek) ukatu egin zituzten egiaren batzordeak ateratako ondorioak, eta, handik egun batzuetara, amnistia legea onartu zuen Gobernuak. Hala, amaierako txostenean erruduntzat identifikatutako inor epaitua izatea galarazi zuen lege horrek. Hortik atera dezakegun irakaspena da erakundeen garbiketa ezinbestekoa dela trantsizio politikoak zuzen kudeatzeko; areago, horrelakorik berriro ez gertatzeko berme nagusietako bat dela.

⁵⁴ T. BUERGENTHAL: «La Comisión de la Verdad para El Salvador», in T. BUERGENTHAL eta A. CANÇADO TRINDADE (arg.): *Estudios Especializados de Derechos Humanos*, 1. lib., San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1996, 16. or.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

2.6 Brasil

2011. urtera arte Brasilek ez zuen izan diktadura militarren garaian gertatu ziren giza eskubideen urraketak ikertzeko batzorde ofizialik, ez behintzat biktimek eta gizarteak egia jakiteko duten eskubidea errespetatua izateko besteko eskumenekin. Egiaren Batzorde Nazionala 2011ko azaroaren 18ko [12.528 Legearen](#) eskutik sortu zen, baina horren aurretik izan zen beste batzorde bat: [Hildakoen eta Desagertu Politikoen gaineko Batzorde Berezia](#).⁵⁷ Diktadura garaian izan ziren biktimak identifikatzea (Estatuaren esku zeudela arrazoi naturalen ondorioz hil ez zirenak, horien artean)⁵⁸ eta desagertuen aztarnak aurkitzea izan zen aurreko batzorde horren eginkizuna. Alabaina, batzorde horrek, bere jardunean,⁵⁹ ez zuen argitu ez desagertuak non zeuden ez eta desagertzeak zer baldintzatan gertatu ziren ere; horixe ondoriozta dezakegu [Giza Eskubideen Amerika Arteko Gorteak](#) *Gomes Lund eta beste kasu batzuk. Brasil* kasuan emandako sententzia irakurrita.⁶⁰

Egiaren Batzorde Nazionalak, beraz, 12.528 Legearen 1. artikulua arabera, hauxe zuen helburu:

... examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas no período fixado no [art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias](#) [18-9-1946 a 5-10-1988], a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional.

Brasilgo Estatuak, horrenbestez, ikertu beharreko gertaerak hasi eta 65 urteren buruan sortu zuen egiaren batzorde hori, herritarren aldarri gero eta ozenagoari erantzunez sortu ere, biktimen egia jakiteko eskubidea eta memoria errespetatzeko helburuarekin. 2014. urtean argitaratu zuen batzordeak amaierako txostena, Brasilgo konstituzioa onartu eta 26 urte geroago.

⁵⁷ [9.140/95 Legea](#), 1995eko abenduaren 4koa.

⁵⁸ Zehaztapan hori 2004ko ekainaren 1eko [10.875 Legearen](#) bidez jaso zen (9.140 Legea aldatu zuen horrek).

⁵⁹ Batzordeak amaierako txostena (*Direito à Memória e à Verdade*) argitaratuta amaitu zuen bere egitekoa, 2007an.

⁶⁰ GIZA ESKUBIDEEN AMERIKA ARTEKO GORTEA: *Gomes Lund kasua eta beste batzuk (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil*, 2010eko azaroaren 24ko sententzia, *in Serie C*, 219. zka., 259. paragrafoa.

2.7 Txile

Txileko egiaren batzordeen esperientziak agerian uzten du zeinen garrantzitsua den mandatu material egokia izatea eta alde zuzenetik kontsulta publikoak egitea organoak izango duen mandatu ahalik eta estuen lotu dadin trantsizio garaian biktimek egia jakiteko duten eskubide eta beharrietara. Lehen batzordea ([Rettig Batzordea](#)) 1990ean eratu zen, Pinochet diktadorea boteretik kanporatua izan eta gero, erreferendum batean herritarrek haren kontrako iritzia adierazi ondoren. Lehen batzorde hark, ordea, oso mandatu mugatua izan zuen, ikerketatik kanpo utzi baitzituen biktimen heriotza eragin ez zuten giza eskubideen urraketak. Beraz, batzordeak ez zituen ikertu torturatuak izan arren hil ez ziren biktimen kasuak.

Torturak ikertzeko batzorde espezializatu bat sortzeko aldarria 2003an gorpuztu zen azkenean, [Valech Batzordearen](#) eskutik. Hauxe izan zen batzorde horren mandata:

... 1973ko irailaren 11tik 1990eko martxoaren 10era bitartean, Estatuko agenteek edo haien zerbitzura zeuden pertsonak arrazoi politikoengatik atxilotutako eta torturatutako pertsonak identifikatzea eta nor izan ziren zehaztea, aurkeztutako aurrekariak kontuan hartuta.⁶¹

Modu horretara, Pinocheten diktadurako biktima guztien eskubideak babestuta geratu ziren bi batzordeen eskutik.

Azkenik, nabarmentzekoa da [Valech Batzordearen](#) lanak izan zuen berehalako ondorioetako bat: hain zuzen, batzordearen amaierako txostenean frogatuzat jo ziren gertakari guztien ikerketa penalak abiatu zirela, bai Txilen bai atzerrian.⁶²

Laburbilduz, aurreko guztia aintzat hartuta, egiaren batzordeen arloan nazioartean izan den esperientzia aberatsari esker, aukera dugu organo horien ahuluneak eta indarrak identifikatzeko, haien alderdi formalari zein materialari dagokienean. Funtsezkoa da esperientzia horiek kontuan izatea, Gipuzkoan gertatutako giza eskubideen urraketak ikertzeaz arduratuko den etorkizuneko egiaren batzordeak ahalik eta legitimotasun eta eraginkortasun handiena izan dezan. Nolanahi dela ere, frogatuta geratu da batzordeak, legitimotasun hori izango badu, gizarte zibilaren eta erakunde publikoen gehiengoaren babesa eduki behar duela ezinbestean.

⁶¹ 1040 Dekretu Gorenaren 1. art.

⁶² E. LIRA: «Verdad, reparación y justicia: el pasado que sigue vivo en el presente», in C. BERISTAIN (zuz.): *Contribución de las políticas de verdad, justicia y reparación a las democracias en América Latina*, San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2011, 101. or.

3 EGIAREN BATZORDEA, GIPUZKOAN BAKEA SENDOTZEKO ETA BIKTIMEN ERREPARAZIOA LORTZEKO TRESNA

Orain arte, euskal gatazkari buruz ezagutzen den errelatoaren zati handi bat ebazpen judizialen bidez erabakitako gertakarietara mugatzen da. Zigor-zuzenbidea eta espetxe-zuzenbidea izan dira, horrenbestez, egia ofizialaren iturri nagusiak. Bestalde, frankismo garaian izan ziren giza eskubideen urraketei buruz dakiguna ikerketa pribatuei esker jakin dugu, gai horretan espezializatutako historialarien eskutik, eta, beraz, falta da funtsezko adostasuna islatuko duen egia ofiziala, biktimek eta gizarteak egia jakiteko duten eskubidea errespetatua izan dadin. Horrela adierazi zuen Pablo de Greiffek, [Egia, justizia, erreparazioa eta berriro ez gertatzeko bermeak sustatzeko Kontalari Bereziak](#), 2014an *in loco* Espainiara eginiko bisitan:

Kontalari Berezia ohartzen da Espainian eta batez ere Gerra Zibilaren garaian gertatutako indarkeriari buruzko informazio asko dagoela. Salbuespenak salbuespen, normalean akademikoek, historialariek eta kazetariak gidatu dituzte ikerketa horiek. Eskura dagoen informazioa, ordea, oso sakabanatuta dago, metodologia desberdinak erabiltzen ditu eta egiaztatu egin behar da.⁶³

Gipuzkoan eta, oro har, Euskal Herri osoan memoria historikoa berreskuratzeko eta Gerra Zibilean, frankismoan eta demokraziarako trantsizio-urteetan (1936-1982) gertatutakoa argitzeko lanak, beraz, bi adabegi ditu. Alde batetik, ez dagoela Gerra Zibilean, frankismoko errepresio-urteetan eta frankismoaren osteko lehen

⁶³ GIZA ESKUBIDEEN KONTSEILUA: [Egia, justizia, erreparazioa eta berriro ez gertatzeko bermeak sustatzeko Kontalari Bereziaren Txostena](#), Pablo de Greiff, *Espainiara Misioa*, [A/HRC/27/56/add.1 dok.](#), 2014ko uztailaren 22koa, 43. paragrafoa.

urteetan gertatutakoa ikertu duen iturri instituzional, fidagarri eta objektiborik; eta, bestetik, egoitza judizialean erabakitako egia besterik ez dugula, ETAK 1968. urteaz geroztik egindako krimenei buruz gertatutakoa jakiteko.⁶⁴

Denbora tarte horretan, bi biktima talde daude: frankismoaren biktimak eta terrorismoarenak. Biktimen eragilea nor izan den (frankismoaren sokako indarrak edo ETA), horren arabera bereizten dira batzuk eta besteak. Bi horiez gain, ordea, badira beste biktima batzuk: Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoek 1975. eta 1982. urteen artean eragindako errepresioaren euskal biktimak eta ezker eta eskuin muturreko terrorismoak eragindakoak; izan ere, urte horien artean areagotu egin zen ETAREN jardura terrorista eta horrek gordindu eta muturtu egin zuen ordena publikoko indarrek Euskal Herriko biztanleen gain eragindako errepresioa.⁶⁵

3.1 Bi estandar berezitu: frankismoaren biktimak eta terrorismoaren biktimak. Egiaren batzordea, bi errealitateak bateratzeko tresna

Espainiak ahalegin nabarmena egin du frankismo garaian berezkoak ziren hasierako bazterketak gainditzeko, baina, hala ere, gaur egun erakunde eta biktima askok adierazi dute ‘bigarren mailako biktima’ sentitzen direla oraindik ere. Terrorismoaren delitu larrien biktimen beste kategoria bati eskainitako erreparazio- eta aitortza-neurrien aldeak areagotu du, hein batean, sentimendu hori.⁶⁶

Pablo de Greiffek 2014an Espainiara eginiko bisitaren ondoren idatzitako txostenean jasotako paragrafoa da goikoa. Izan ere, biktimen bi taldeei ematen zaien tratamendu instituzional desberdinak zerikusi zuzena du iraganari buruzko egia ez argitzearekin.

Biktimen bi taldeen erregimen juridikoa arautzen duten bi legeak alderatzea aski da batzuei eta besteei ematen zaien tratatu desberdinaz ohartzeko.

[Terrorismoaren Biktimen Aitorpenerako eta Babes Integralerako irailaren 22ko 29/2011 Legea](#) (aurrerantzean, TB Legea), hainbatetan aipatzen dira

⁶⁴ ETAK 1968ko ekainaren 7an egin zuen lehen hilketa Gipuzkoan.

⁶⁵ J. A. PÉREZ PÉREZ eta C. CARNICERO HERREROS: «La radicalización de la violencia política durante la transición en el País Vasco. Los años de plomo», *Historia del presente*, 12. lib., 2008, 119. or.

⁶⁶ GIZA ESKUBIDEEN KONTSEILUA: *Egia, justizia, erreparazioa eta berriro ez gertatzeko bermeak sustatzeko Kontalari Bereziaren Txostena*, 86. paragrafoa.

«memoria, duintasuna, justizia eta egia»⁶⁷ kontzeptuak eta, zehazki, «memoria kolektiboa»;⁶⁸ aldiz, Memoria Historikoaren 52/2007 Legean⁶⁹ (aurrerantzean, MH Legea), memoria «pertsonal eta familiarra»⁷⁰ aldarrikatzen da besterik gabe, baina horrek ez du inolako adierazpen publikorik legearen baitan. Biktima guztiak egia indibiduala nahiz kolektiboa jakiteko duten eskubidean bereizketa egiten du, beraz, botere legegileak, biktima batzuen sufrimenduaren aitortza publikoa lehenesten baitu, beste biktima batzuen kaltetan.⁷¹

Administrazio publikoek biktima batzuen eta besteen eskubideak betetzeko eta zaintzeko izan beharko luketen eginkizunean ere agerikoak dira aldeak. TB Legearen atarikoan, premisa hau zehazten da: «Botere publikoek bermatu egingo dute biktimak haien eskubideekiko errespetuz tratatuak izango direla eta haien duintasuna zaindu eta ziurtatuko dela». Aldiz, Memoria Historikoaren Legean, zioen azalpenean, askoz era lauso eta nahasiagoan, honako hau zehazten da: «Legeak zenbait oinarri ezartzen ditu, botere publikoek gure historia ezagutzera emateko eta memoria demokratikoa sustatzeko politika publikoak aurrera eraman ditzaten».

⁶⁷ Ikusi sarreran: «memoria, duintasuna, justizia eta egia, horiek dira Lege honetako arauen oinarrian dauden indarguneak», «botere publikoek egia jakiteko laguntza emango dute, biktima izateko egiazko kausei erantzunez, eta bereizketa moral edo politikoak, anbiguotasunak edo baloraziozko neutraltasunak alde batera utzita, gertakizunen errelato zuzena osatzeko laguntza emanez». 2. art.: «Lege hau memoriaren, duintasunaren, justiziaren eta egiaren balioetan oinarritzen da. Memoria, biktimen onarpen soziala eta politikoa gordetzeko eta bizirik mantentzeko [...]. Egia, ekintza terroristak giza eskubideen urraketa direla agerian geratzen delako».

⁶⁸ Ikusi sarreran: «Memoriaren balioa da azken bermea Espainiako gizarteak eta hura ordezkatzeko duten erakundeek ez dituztela inoiz ahaztuko bizia galdu zutenak». 2. art.: «Memoria, biktimen onarpen soziala eta politikoa gordetzeko eta bizirik mantentzeko» [Nabarmendutako hitzik gabe, jatorrizko testuan]. 57. art.: «Gobernuak Terrorismoaren Biktimen Memoriarako Zentro Nazional bat sortuko du. Hauek izango dira zentro horren helburuak: terrorismoaren biktimek ordezkatzeko dituzten balio demokratikoak eta etikoak gordetzea, biktimen memoria kolektiboa eraikitzea eta herritarrek askatasunaren alde egiteko kontzientziaztea...».

⁶⁹ [52/2007 Legea, abenduaren 26koa, gerra zibilean eta diktaduran jazarpenera edo indarkeria pairatu zutenen eskubideak onartzen eta zabaltzen dituen, eta haien aldeko neurriak ezartzen dituena.](#)

⁷⁰ Zioen azalpenean: «Lege honen abiapuntua honako hau da: memoria pertsonalarekin eta familiarrekin zerikusia duten alderdi guztiak»; «Horren ildotik, herritar bakoitzaren memoria pertsonalerako eta familiarerako eskubide indibiduala onartzen da»; «Legegilearen lana eta lege honen eginkizuna da biktimei kaltea ordaintzea eta memoria pertsonalerako eta familiarerako eskubidea ezartzea eta babestea, ahalik eta arau-zorroztasun handienarekin». 1. art.: «Lege honek honako xede hauek dauzka: Gerra Zibilean eta Diktaduran arrazoi politiko edo ideologikoengatik edo sinesmen erlijiosoengatik jazarpenera edo indarkeria pairatu zutenen aldeko eskubideak onartzea eta zabaltzea, biktima horien erreparazio moralak sustatzea eta memoria pertsonala eta familiarra berreskuratzea». 2.1. art.: «Herritar guztien birgaitze moralerako eta memoria pertsonala eta familiarra berreskuratzeko eskubidearen adierazpena den aldetik...».

⁷¹ Lan honetan ikus daiteke bi legeen alderaketa zorrotz eta sakona: R. ESCUDERO ALDAY: «*Víctimas y memoria selectiva*», *Dominio público*, 2012ko urtarrilaren 21a.

Administrazio publikoek izan beharko luketen jarduna zenbateraino dagoen zehaztu gabe argi geratzen da, orobat, Gerra Zibilean desagertutakoak bilatzeko eta identifikatzeko eginbeharrean (MH Legearen 11. art.); izan ere, legearen arabera, erakunde publikoek biktimen zuzeneko ondorengoei «laguntzeko» eginbeharra besterik ez dute, «baldin eta horiek halakorik eskatzen badute». Hau da, Administrazioak ez du inoiz ofizioz jardun beharrik desagertutako pertsonak aurkitzeko lanean.

Ezagun da, halaber, Gobernuaren koloreak nola baldintzatzen duen lege bakoitzaren aplikazioa. Berez, bi-biak alderdi sozialistaren agintepean onartu ziren: 2007an MH Legea eta 2011n TB Legea. Gerora, terrorismoaren biktimen legea finantzatzeko eta edukiz zehazteko behar beste finantziario izan da urteen joanean, baita gobernu aldaketarekin ere, Raxoi presidentearen gobernuak, 2011ko abenduan agintea eskuratu berri, eutsi egin baitzion lege horren finantziarioari. Aldiz, MH Legea finantzatzeari utzi zion PPren gobernuak.⁷²

Beraz, Pablo de Greiffek esandakoa, biktima batzuk eta besteak tratatzeko Estatuak bi neurri desberdin erabiltzen dituela alegia, bat dator egiaz gertatzen ari denarekin. Bereizketa horren ondorioz, frankismoaren biktimak baztertuta sentitzen dira biktima izatearekin zerikusirik ez duten arrazoiengatik. Historiaren politizazio gaitzesgarriak eragin du bazterketa hori, eta gai horren inguruan gizartea mutur batera edo bestera lerratzea ekarri du, zoritxarrez.

Zer ekarpen egin dezake, beraz, egiaren batzorde batek biktimei emandako tratu instituzionalean bazterketa horiek bertan behera uzteko eta egoera zuzentzeko?

Egiaren batzorde batek 1936tik 1982ra Gipuzkoan gertatutako giza eskubideen ikerketa estrajudiziala egiten badu, nazioarteko esperientzien kapituluan aztertutako batzordeek egindakoen antzera, 1. kapituluan zehaztutako hainbat onura ekarriko ditu; besteak beste, maila berean jarriko ditu giza eskubideen urraketak jasan dituzten pertsona guztiak, urraketa horien eragilea edozein izanik ere: indar frankistak, trantsizioko lehen urteetan jardun ziren indarrak, paramilitarrak edo ETA. Gaur egun biktima talde bakar bat identifikatzen da eta soilik talde horri errespetatzen zaizkio egia jakiteko, justiziarako eta erreparaziorako eskubideak; ETaren biktimei, alegia. Bereizketa hori, ordea, eragozpen handia da, batez ere euskal testuinguruan, egia jakiteko eskubidea egiaz errespetatua izateko, urraketa eragin zuen gertakariaren erantzulea bat izan edo bestea izan, inor baztertu gabe.

⁷² GIZA ESKUBIDEEN KONTSEILUA: *Egia, justizia, erreparazioa eta berriro ez gertatzeko bermeak sustatzeko Kontalari Bereziaren Txostena*, 63. paragrafoa.

Gaur egungo egoeraren ondorioz, 1936tik 1982ra arte gertatutako giza eskubideen urraketen biktimetako batzuek (ETAren indarkeria jasan dutenek, hain zuzen), egia jakiteko eskubidea dute, legeren aitortza izan dute eta babes judiziala jaso dute. Aldiz, beste batzuek (frankismoaren eta errepresio instituzional nahiz paramilitarraren biktimek), ez dute aitortuta egia jakiteko eskubide hori eta, horren ondorioz, haien eskubideen urraketa eragin zuten gertakari asko eta askoren gaineko berririk ez dago oraindik.

Denbora tarte hori osotasunean hartu eta ikertuko duen mekanismo bat sortuz gero, giza eskubideen urraketen biktimei dagozkien eskubideak eta bermeak errespetatuko zaizkie indarkeria jasan duten guztiei, edozein dela ere urraketa horien eragilea.

3.2 Egiaren batzordea Gipuzkoan: hirugarren bidea?

Lan honetan proposatzen den egiaren batzordeak, aurreko idazpuruan aurreratu dugunez, Gerra Zibilaren hasieratik (1936) Felipe González Espainiako Gobernuko presidente izatera iritsi arteko tarte (1982) hartu behar du aztergai; hau da, demokraziarako trantsizioko lehen urteak ere barne hartu behar ditu.

Denbora-tartea hain zabala izateak ekartzen duena da Gipuzkoan zenbait testuinguru berezitu sortzea. Azaldu dugu arestian ere. Lehenik eta behin, gerra garaian, barneko gatazka armatua nagusitu zen. Bigarrenik, berrogei urteko diktadura faxista etorri zen, eta horrek mugimendu antifrankista eta abertzale bizia sorrarazi zuen; hain zuzen, mugimendu horretatik sortu zen, 60ko hamarkadan, gerora ETA talde terrorista izango zenaren ernamuina. Eta hirugarren etapa batean, aldaketa politikoa eta gizarte-mugimendu bizia etorri ziren. Mugimendu horrek hainbat bereizgarri izan zituen; besteak beste, preso politikoan amnistiaren aldeko aldarria, eskuin muturreko⁷³ eta ezker muturreko⁷⁴ mugimendu biolentoen agerpena eta ETAren indarkeria gogortzea.⁷⁵ Eta horrek, ondotik, Euskal Herrian ordena-indarren errepresioa areagotzea ekarri zuen.

⁷³ Batallón Vasco Español, Triple A eta Espainiako Talde Armatuak (GAE).

⁷⁴ Urriaren Leheneko Erresistentzia Talde Antifaxistak (GRAPO) eta Fronte Iraultzaile Antifaxista eta Abertzalea (FRAP).

⁷⁵ 1980. urtean eragin zituen ETAk biktima gehien. Ikusi J. AVILÉS FARRÉ: «[El terrorismo en la transición democrática española](#)», Madril: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, 2004, 3. or.

Aurrez adierazi dugu euskal gatazkaren baitan egia berreskuratzeko bide nagusiak prozesu penala eta espetxe-zuzenbidea izan direla, eta bide estrajudizialen ekarria hutsaren hurrengoa izan dela.

Priscilla Haynerrek, egiaren batzordeetan itzal handiko adituetako batek, hala adierazi zuen Euskal Herriko egoerari buruz:

Trantsizio garaiko justiziaren azpian dagoen ideia da garbi uztea jardun penala, berez, garrantzitsua dela eskala handiko gehiegikeriei erantzuteko, baina ia inoiz ez dela nahikoa beharrian zabalagoei aurre egiteko. Helburua da krimenen arreta-gunea aldatzea; egileak baino gehiago biktimen sufrimendua eta gizartearen eta komunitateen beharrian zabalagoak hartzea ardatz. Gehiegikeria gehiago ez gertatzeko erakundeak berritzea zeinen beharrezkoa den ohartzeko balio dezake horrek.⁷⁶

Justizia konpontzailearen berezko metodo alternatiboak aplikatu izan dira lehendik ere ETAREN indarkeriari aurre egiteko (trantsizioko justiziaren kontzeptu inklusiboa dute ezaugarri metodo horiek), hala nola *Nanclares Bidea* deritzon. Prozesu horien bidez, horrela eskatzen zuten presoek, espetxe-onurarik batere eskuratu gabe eta egindako mina erreparatzeko borondatearekin, aukera zuten terrorismoaren biktimekin elkartzeko eta beren damua adierazteko. Justizia konpontzailearen ohiko neurriak nola ezar daitezkeen erakusteko aurrekari argiak dira horrelako mekanismoak, eta trantsizioko justizia baten esparruan txerta daitezke, euskal gatazkan jada aztertutakoen antzera.

Bestalde, frankismo garaiko krimenak ikertzeko gizartearen eskaria indar hartzen joan da 2000ko hamarkadaren hasieran memoriaren aldeko mugimendua sortu zenetik.⁷⁷ Eskari hori bera bere egin eta aldarrikatu dute, orobat, Espainia bisitatu duten giza eskubideen babeserako mekanismo guztiek bai eta Estatuak giza eskubideen arloko eginbeharrak zenbateraino bete dituen aztertu duten mandatari eta kontalariek ere.⁷⁸ Oraindik orain, [Giza Eskubideen Batzordeak](#) ([Eskubide Zibilen eta Politikoen Nazioarteko Ituna](#) aplikatzen dela zaintzeaz arduratzen da organo hori), horrela adierazi zuen 2015eko uztailaren 20an:

⁷⁶ P. HAYNER: «¿Justicia transicional en el País Vasco? Principios básicos de análisis», in J.-M. LANDA GOROSTIZA (arg.), *Justicia transicional: propuestas para el caso vasco*, Clermont-Ferrand: Institut Universitaire Varenne, 2014, 302. or.

⁷⁷ E. SILVA: «El despertar de la memoria histórica en España: el papel de la sociedad civil» in F. GÓMEZ ISA (zuz.): *El derecho a la memoria*, op. cit., 571-580. or.

⁷⁸ Ikusi 1. oharra.

«Estatuak modu aktiboan bultzatu behar ditu iraganeko giza eskubideen urraketa guztien ikerketak».⁷⁹

Frankismoak eginiko krimenak ikertzea, horrenbestez, nazioarteko eginbeharra da; hau da, ezinbestekoa izango da ikerketa hori abiatzea Estatuak bere gain hartutako nazioarteko konpromisoak betetzekotan.

Hala ere, lehen kapituluan adierazi dugunez, ikerketa batzorde bat eratze hutsa ez litzateke aski biktimek eta euskal gizarteak egia jakiteko duten eskubidea errespetatua izateko; izan ere, batzorde horrek eta ikerketak berak zenbait ezaugarri bete beharko lituzke, hori horrela izateko.⁸⁰

3.2.1 Gipuzkoako egiaren batzordearen ezaugarriak

Eusko Jaurlaritzako Giza Eskubideen Zuzendaritzak 2009an eginiko proposamen batean zehaztu zituen jada frankismoa ikertzeko euskal batzorde baten ezaugarriak eta eskumenak.⁸¹ Proposamenaren txostenean, besteak beste, gertakariak izan zirenetik igarotako denbora luzea aipatu zuen Giza Eskubideen Zuzendaritzak, batzordearen mandatuaren bereizgarrien artean.⁸²

Era berean, giza eskubideen aldeko hainbat elkartek, hala nola Amnesty Internationalek edo Aranzadik, edo EAeko [Lau Haizetara Gogoan](#) elkarteak berak, etorkizuneko egiaren batzorde batek ikertu beharko lukeen garaiari buruz eginiko proposamenak ere jaso zituen Zuzendaritzak txosten horretan. Proposamen horietako batzuen arabera, batzordeak 1977. edo 1978. urteetara arteko gertakariak ikertu beharko lituzke; hau da, [Amnistiaren Legea](#) eta [Espainiako Konstituzioa](#) onartu ziren arte, hurrenez hurren. Beste proposamen batzuen arabera, denbora-tarte

⁷⁹ GIZA ESKUBIDEEN BATZORDEA: *Giza Eskubideen Batzordearen Azken Oharrak: Espainia, CCPR/C/ESP/CO/6 dok.* 2015eko abuztuaren 14koa, 21. paragrafoa. Gerra Zibileko eta frankismoko biktimek egia jakiteko duten eskubideari Espainian ematen zaion tratamenduaren gainean giza eskubideen babeserako organoek eginiko adierazpenak sakonago aztertzeke, lan hau kontsulta daiteke: J. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: *El derecho a la verdad en la justicia de transición española*, *op. cit.*, 43-49 eta 214-228. or.

⁸⁰ Honen harira, 1. kapituluan aztertutako [Rettig Batzordearen](#) adibidea ekar dezakegu, Txilen 1990. urtean sortua. Batzorde horren mandatua biktimen heriotza eragin zuten giza eskubideen urraketak ikertzera mugatu zen, eta, horren ondorioz, hil ez ziren biktimen torturak ikerketatik kanpo geratu ziren.

⁸¹ Txosten honetan, berez, Euskal Herri osorako egiaren batzorde bat sortzea aztertu zen, baina ateratako ondorioak erraz asko balia daitezke probintzia mailako egiaren batzorde batean ere.

⁸² J.-M. LANDA GOROSTIZA: *Bases para la puesta en marcha de una Comisión de la Verdad en Euskadi*, *op. cit.*, 35-37. or.

zabalagoa ikertu beharko litzateke, «erregimen frankista osoa» adibidez. Areago, izan zen epe jakinik ez zehaztea proposatu zuenik ere, baina lehen kapituluan aztertutakoa gogora ekarriz, aukera hori ez da batere gomendagarria.⁸³

Estandar hauei buruz aurrez aztertutakoa gogoan, Gipuzkoako egiaren batzordeak 1936tik 1982ra bitarteko epea ikertu beharko luke; hau da, gure proposamenaren arabera, horiexek izan beharko lituzke, behin eta berriro zehaztu dugunez, hasierako eta amaierako mugarriak.

Denbora aldetik batzordearen mandaturia [Amnistia Legea](#) onartu eta beste bost urtez edo [Konstituzioa](#) onartu eta beste lau urtez zabaltzeko arrazoia da trantsizio politikoan sortutako errepresio gogorrak ere eragin nabarmena izan zuela Euskal Herri osoan, hein batean ETaren terrorismoak data horietan izan zuen garrantziagatik. Sarri, ordea, ahaztu egiten da denbora-tarte hori.

Aldi horretako errepresioa eta gertaerak ahaztu eta imaginario kolektiboan errotutako *trantsizio baketsua* kontzeptua ontzat emanez gero, eta ikertu beharreko epea 1977. edo 1978. urtean itxiz gero, kanpoan geratuko lirateke Franco diktadorea hil ondoren Espainian eskuin edo ezker muturreko talde terroristen ekintzen ondorioz hildakoak, bai eta Estatuko Segurtasun Indarren esku-hartzearen ondorioz gertatutako bortizkeriazko heriotzak ere.⁸⁴ Horrenbestez, indarkeria horrek Euskal Herrian izan zuen eragin nabarmena dela eta,⁸⁵ aldi hori ere ikertu egin beharko luke batzordeak.

Eskumen materialari edo batzordeak ikertu beharko lituzkeen gertakariei dagokienez, Eusko Jaurlaritzako Giza Eskubideen Zuzendaritzak aurrez aipatutako txostenean dio Giza Eskubideen Nazioarteko Zuzenbidea aplikatu beharko litzatekeela, horren bidez «barne legedian sarri harrotzen diren eztabaida nazionalak, zenbait delitu preskribatzeko irizpideak eta garai historiko jakin batzuetan urraketa mota batzuk eta besteak bereizteko izan diren esparru juridikoak» gainditu ahal izateko.⁸⁶

⁸³ *Ibid.*, 36. or.

⁸⁴ Garai hartako indarkeria sakonago aztertzeko, lan hau kontsulta daiteke: I. SÁNCHEZ CUENCA: «La violencia terrorista en la transición española a la democracia», *Historia del presente*, 14. lib., 2009, 9-24. or.

⁸⁵ A. PÉREZ PÉREZ eta C. CARNICERO HERREROS: «La radicalización de la violencia política durante la transición en el País Vasco. Los años de plomo», *op. cit.*, 111-128. or.

⁸⁶ J.-M. LANDA GOROSTIZA: *Bases para la puesta en marcha de una Comisión de la Verdad en Euskadi*, *op. cit.*, 38. or.

Hain zuzen, egiaren batzordeak Giza Eskubideen Nazioarteko Zuzenbidea aplikatzen badu, nazioarteko legediaren arabera gertatu ziren garaian ere krimintzat jotzen ziren gertakariak izango ditu aztergai; irizpide horien arabera, Gipuzkoan gertatutako krimen guztiak, alegia. Aztertu beharreko epean gertatu ziren desagertze behartuen harira, Giza Eskubideen Zuzendaritzaren txostenak zuzen egiten du zehaztapena: «[desagertuak] ezin dira soilik heriotza-erregistrorik gabeko pertsonatzat hartu; aitzitik, desagertutako pertsonak dira, nazioarteko zuzenbidean zehazten diren baldintzetan eta moduan».⁸⁷

Zer esan nahi duen horrek? Esan nahi duena da nahiz eta barne zuzenbidearen arabera, zenbait giza eskubideren urraketen gainean neurri jakin batzuk ezartzen diren (amnistiak edo preskripzioak, esaterako), egiaren batzordeak Giza Eskubideen Nazioarteko Zuzenbidearen estandarrik hartu behar dituela aintzat eta horiek jarri behar dituela praktikan, edukiaren aldetik bere mandatua hezuramamitzeko. Alde horretatik, lehen kapituluan ere esan dugu batzordeak mandatu zabala izan behar duela, eta, horrenbestez, gertatu ziren garaian bertan ere, nazioarteko legediaren arabera krimintzat hartzen ziren ekintza guztiak izango dituela ikergai, krimenak nork egin zituen begiratu gabe.

Bestalde, ikerketa-batzordeak hainbat arlotako adituak bildu beharko ditu: epaileak, historialariak, soziologoak, politologoak, etab., bertakoak (Espainiako, Euskal Herriko eta Gipuzkoako gizarte zibileko hainbat esferatako kideak) eta atzerrikoak, beti ere gizonen eta emakumeen parekidetasuna zainduz. Eusko Jaurlaritzako Giza Eskubideen Zuzendaritzaren txostenaren arabera, batzordekideak «giza eskubideen arloan izen eta izan handiko pertsonak izango dira [...] osotasun moral eta ibilbide etiko aski frogatua dutenak»,⁸⁸ eta «Eusko Legebiltzarraren gehiengo nabarmenaren» bidez hautatuko dira, aurrez «euskal gizartean eginiko kontsulta-prozesua oinarritzat hartuta».⁸⁹

Kontsulta-prozesu horretan, batzordekideen hautaketaz gain, batzordearen mandatuaren alderdi guztien gainean galdetu beharko litzaieke herritarrei; besteak beste, *ratione temporis* eta *ratione materiae* eskumenen eta batzordeak izango dituen bestelako eskumenen gainean. Batzordeak, biktimek egia jakiteko duten eskubidea babesteko egiazko tresna izan nahi badu, biktimak ardatz hartuta jardun behar du ezinbestean eta haien eskakizunei erantzuteko behar besteko ahalmena izan behar du.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*, 42. or.

⁸⁹ *Ibid.*

Aipatutako gutxieneko eskumeni dagokienez, eta aurreko gogoeta kontuan hartuta, batzordekideek ahalmena izan behar dute Gipuzkoan ez ezik Euskal Herri osoan aipatutako epean gertatu ziren giza eskubideen urraketari buruzko informazio esanguratsuak eskuratzeko eta artxiboetan sarbidea izateko. Egiaren batzordeen jardunean berezko eta ezinbesteko eskumena izan da betidanik artxiboetan sartu ahal izatea, baina, horrez gain, Estatuak giza eskubideen urraketa masiboen biktimekiko duten eginbeharra ere bada artxibo horietarako sarbidea erraztea, egia jakiteko eskubide indibiduala eta kolektiboa bete ahal izateko.⁹⁰

Gipuzkoako egiaren batzordeak, beraz, ahalmena izan beharko du indar armatuen, Guardia Zibilaren, Polizia Nazionalaren eta Eliza katolikoaren artxiboei arreta berezia jartzeko, bai eta probintziako bertako, Estatuako eta beste autonomia-erkidego batzuetako administrazioen kontrolpean dauden artxiboei ere.

Azkenik, batzordeak aukera izan beharko du amaierako txosten bat egiteko, eta hor jaso beharko ditu eginiko aurkikuntzak, ateratako ondorioak eta Gipuzkoako, Euskal Herriko eta Espainiako agintariei zuzendutako gomendioak, horien bidez, biktimen eta euskal gizartearen eskubideei loturiko nazioarteko betebeharrak egiaz errespetatuko direla bermatzeko.

Amaierako txosten hori izango da egiaren batzordeak utziko duen ondarea, eta dokumentu garrantzitsua izango da gutxienez bi esparrutan: arlo judizialean eta hezkuntzan.

Arlo judizialari dagokionez, mekanismo estrajudizialen eta botere judizialaren arteko osagarritasuna berrestera etorriko da txostena (kontuan hartu behar da, trantsizio politikoko garaian egiaren batzordeek duten balioaren inguruko hausnarketa asko eta asko bi alde horien osagarritasunaren teoriaren gainekoak izan direla). Egia judiziala eta ez-judiziala, biak jakin beharrekoak dira, eta, hain zuzen, premisa horretan oinarritzen da osagarritasun hori. Eta horretarako, amaierako txostena giza eskubideen urraketan gaineko informazio-iturri garrantzitsua izan daiteke, ondoren, balizko prozesu judizialak abiatu ahal izateko.

Bestalde, batzordearen txostena abiapuntu eta oinarri izan daiteke lehen eta bigarren hezkuntzako ikastetxeetan erabil daitezkeen eskuliburuak lantzeko, beti ere bermatuta material horren bidez modu objektiboan eta inpartzialean aztertuko dela Gerra Zibilean, frankismoan eta trantsizio politikoan Gipuzkoan

⁹⁰ NAZIO BATUEN BATZAR NAGUSIA: *68/165 Ebazpena. Egia jakiteko eskubidea, A/RES/68/165 dok.*, 2014ko urtarrilaren 21ekoa.

gertatutakoaren historia. Orobat, txostena erreferentziazko eta oinarritzko tresna izan daiteke bakerako eta giza eskubideen aldeko hezkuntzan, Euskal Herriko eta Espainia osoko gizarteari bideratutako tresna.

Aurreko guztia aintzat hartuta, begien bistakoa da funtsezkoa dela egia-aren batzorde bat eratzea, eta organo horrek behar besteko eskumenak izatea proposatutako denbora-tartea eraginkortasunez ikertzeko; funtsezkoa, biktimen egia jakiteko duten eskubidea guztiz errespetatua izateko, eta, era berean, ezinbestekoa, Gerra Zibilean, frankismoan eta trantsizio demokratikoaren lehen urteetan indarkeria jasan zuten guztien eskubideak eta bermeak parekatzeko.

ONDORIOAK

Azterlan honetan garbi geratu da biktimek, eta, oro har, gizarte osoak beharra dutela, giza eskubideen urraketa larrien garai historiko hartan egiaz zer gertatu zen jakiteko. Are gehiago, kontuan hartuta, etapa horren ondoren bake eta demokraziarako trantsizio politikoko garaia zabaldu zela; izan ere, horixe gertatu zen Espainian 1975ean Francisco Franco diktadorea hil ondoren, edo, berrikiago, 2011n, ETAK indarkeria armatua behin betiko utzi ondoren.

Hogeita hamasei urteko tartea dago bi testuinguruen artean, eta, lehen begiratuan, alde nabarmenak dauden bien artean, baina batean zein bestean, premiazkoa da trantsizioko justizian eta justizia konpontzailean oinarritutako hainbat neurri abiaraztea, bi etapa horietako biktimen eskubideak guztiz errespetatuak izateko.

Alde horretatik, 70eko hamarkadako trantsizio-urteetan, immobilismoa nagusitu zen eta apenas aplikatu ziren trantsizioko justizian eta justizia konpontzailean berezkoak diren neurriak; eta, gaur egun ere, immobilismoaren aldeko erabaki horrek eragin kaltegarriak ditu Espainiako nahiz Euskal Herriko gizarteko zenbait sektoretan. Hori guztia gainditu beharko litzateke Gipuzkoan bakea eta bizikidetzaz sendotzeko; izan ere, orain arte, zigor-zuzenbidea eta espetxe-zuzenbidea estu-estu aplikatzera mugatu izan da bide horretan eginiko ahalegina.

Egia jakitearen balioa agerian geratu da 70eko hamarkadaz geroztik indarkeria osteko hainbat testuingurutan; horietan, egia jakitea izan da biktimen eta gizartearen eskakizun nagusia, giza eskubideen urraketan garaia amaitu ondoren. Hain zuzen, Kolonbia izan da aldarri horrekin bat egiten azkena. Aurreko mendeko 70eko hamarkadatik barneko gatazka armatuaren ondorioak jasan ditu Kolonbiak, eta horri konponbidea emate aldera, «bakerako jurisdikzio berezi bat» sortzea erabaki zuen 2015eko irailaren 23an. Ordurako, Egia argitzeko, Bizikidetzarako eta Ez errepikatzen Batzorde bat eratzen lanak nahiko aurreratuta zeuden;⁹¹ izan ere, hilabete batzuk lehenago, Gobernuak eta FARC-EP indarrek mekanismo horren

⁹¹ Esteka honetan kontsulta daiteke akordio hori: *Gobernu Nazionalaren eta Kolonbiako Indar Armatu Iraultzailea-Herriaren Armadaren arteko elkarrizketa mahaiaren txosten bateratua, 60. komunikatu bateratua*, 2015eko irailaren 23koa. 2015eko abenduaren 15ean berretsi zuten azkenean batzorde hori. Esteka honetan kontsulta daiteke: *Gobernu Nazionalaren eta Kolonbiako Indar Armatu Iraultzailea-Herriaren Armadaren arteko elkarrizketa mahaiaren txosten bateratua, 64. komunikatu bateratua*, 2015eko abenduaren 15koa.

abantailak jorratu zituzten Habanako Elkarrizketa Mahaian: «Gatazka amaitzea aukera paregabea da Kolonbiako gizartearen eta bereziki biktimen eskakizun nagusietako bat betetzeko: argitu eta jakin dadila gatazkan gertatutakoaren egia».⁹²

Baieztapen horrek agerian uzten du egiaren balioa, aurrez ere aipatu izan duguna, elkarren artean lotuta dauden eskubideak (justizia, erreparazioa eta berriro ez gertatzeko bermeak) errespetatuak izan daitezen. Bestalde, aipatzen den berehalakotasuna ere garrantzitsua da, premiazkoa baita biktimen erreparazioa ahalik eta azkarren egitea, sortutako sufrimendua —adibidez, hurbileko pertsona desagertuen berri ez jakiteak eragiten duena— denboran ez alferrik luzatzeko.

Bigarren kapituluan aztertutako zazpi esperientzia nazionalek erakutsi digute zer bideri jarraitu beharko geniokeen egia jakiteko eskubidea gauzatzeko, zer ezaugarri izan beharko lituzkeen ikerketarako mekanismo objektibo batek lana eraginkortasunez egiteko eta zer neurri utzi beharko liratekeen alde batera batzordea ez galbideratzeko eta arma politiko soil ez bihurtzeko.

Estatuen jardun horrek erakusten du ikerketa estrajudiziala erabilgarria dela, giza eskubideen urraketak gertatu diren testuinguruetan adiskidetzeari lortzeko eta zubi lanak egiteko bitartekoa izan daitekeelako, baina horretarako baldintza ezinbestekoa da ikerketa hori egiteko hautatutako baliabidea testuinguru bakoitzaren ezaugarrietara egokitzea. Hori dela eta, aipatutako esperientziak ezin dira eredu bakar eta itxiztat hartu eta gurean aztergai dugun testuingurura estrapolatu. Gipuzkoak, baita Euskal Herriak ere, bere idiosinkrasia eta berezitasunak ditu, eta horiei ezin zaie aurre egin beste latitude batzuetan erabilitako baliabideekin. Beraz, funtsezkoa izango da idiosinkrasia eta berezitasun horiek tentuz eta arretaz aztertzea, ikerketa estrajudizialerako mekanismo bat *ad hoc* sortzeko.⁹³

ETaren eta diktaduraren indarkeriak utzitako ondare mingarria aztertzeko eta ikertzeko, premiazkoa da erakunde ez judizialak izatea eta, alde horretatik, aintzat hartu behar dira hemen proposatutako egiaren batzordea eta antzeko ekimenak.

⁹² *Gobernu Nazionalaren eta Kolonbiako Indar Armatu Iraultzailea-Herriaren Armadaren arteko elkarrizketa mahaiaren txosten bateratua*, 53. komunikatu bateratua, 2015eko ekainaren 24koa.

⁹³ Iritzi horretakoa da Eduardo González Cueva ere. Hona hemen berak esandakoa: «batzordeak jada ez dira hartzen dilema juridiko ebatziazin bati emandako erantzun politikotzat, legezko konponbide eraginkor baterako bidea bermatu eta egia jakiteko eskubidea berresten duten tresnatzat baizik. Bestalde, batzordeak ez dira tresna exotikoak eta *ad hoc* sortuak, eskualde bateko ezaugarrietara moldagarriak; aitzitik, tresna malguak dira, irismen globala izateko asmoa dutenak». E. GONZÁLEZ CUEVA: «¿Hacia dónde van las comisiones de la verdad?», in F. REÁTEGUI (arg.): *Justicia transicional. Manual para América Latina*, Brasilia eta New York: Trantsizioko Justiziarako Nazioarteko Zentroa, 2011, 354. or.

Lan honetan proposatutako mekanismoak hauxe izango du eginkizun behinena: 1936. eta 1982. urteen artean Gipuzkoan gertatutako giza eskubideen urraketa larri eta masiboak buruzko ikerketa abiatzea. Lan hori egiteko, batzordeak ahalmena izango du, besteak beste, Espainiako, EAEko eta Gipuzkoako erakundeen artxiboak kontsultatzeko (Eliza katolikoarena, indar armatuena, Guardia Zibilarrena eta Polizia Nazionalarena, horien artean), eta amaierako txosten bat egiteko. Hor jasoko ditu ateratako ondorioak, bai eta Gipuzkoako, EAEko eta Espainiako erakundeei bideratutako gomendioak ere, horien bidez, batzordearen helburu behinena egia bihurtzeko: garai historiko horretako biktimek egia jakiteko, justiziarako, erreparaziorako eta berriro ez gertatzeko bermeak izateko dituzten eskubideak gauzatzea.

Antzeko garrantzia duten beste ekimen batzuk jarri dira jada martxan Euskal Herrian, hala nola Foronda Txostena, Euskal Herriko Unibertsitateko Valentín de Foronda Gizarte Historiarako Institutuak egina, Eusko Jaurlearitzako Kultura Sustatzeko Zuzendaritzak hala eskatuta.⁹⁴ Horrelako proposamenek frogatzen dute beharrezkoa dela asmo handiagoko ikerketa bat abiatzea. Nolanahi dela ere, azkenean martxan jarriko den mekanismoak Kolonbiako azken kasua hartu beharko du adibidetzat, eta oso aintzat hartu beharko du indarkeriaren biktimek era batera edo bestera jasandako sufrimendua.

Gipuzkoan frankismo garaian gertatutako giza eskubideen urraketak aztertzeko zailtasun nagusia da biktimak edo urraketak eragin zituzten indarrak bi klasetakoak izan zirela, eta trantsizioko lehen urteetan, baita hiru klasetakoak ere, eta, horrez gain, biktimen kolektibo batzuen eta besteen eskubideak eta bermeak parekatzeko modua egin beharra dagoela. Biktimen eragilea bat edo bestea izateak ezin du baldintzatu giza eskubideen urraketan biktima guztiek egia jakiteko, justiziarako eta erreparaziorako dituzten estandarren aplikazioa, eta horixe gertatzen ari da gaur egun Gerra Zibileko, frankismoko eta trantsizioko biktimekin.

Giza eskubideen babeserako nazioarteko organismoek behin eta berriro adierazi dute behar-beharrezkoa dela garai historiko luze hori ikertzea, eta, beraz, Espainiako estatuak ezin du entzungor egiten jarraitu; izan ere, biktima askok egia ez jakitearen kalteak jasaten jarraitzen dute gaur egun ere; beren senide eta hurbilekoak non lurperatuta dauden ez jakiteak sortzen duen sufrimendua, adibidez. Alde horretatik, ez euskal gizarteak ez eta Gipuzkoakoak ere, ez dute oraindik garai hartan gertatutakoaren errelato bateratu bat.

Gerra Zibilean, frankismoan eta trantsizioko lehen urteetan Gipuzkoan izan zen indarkeriari buruzko ikerketa abiatzea mugarri garrantzitsua eta sendoa izan daiteke etorkizunean euskal gatazkaren bilakaerari eta denbora hartan guztian

⁹⁴ R. LÓPEZ ROMO: *Informe Foronda...*, *op. cit.*

gatazkak utzitako ondorioei buruzko ikerketa abiatzeko, gatazkaren sortze beretik amaierara arte, beharrezkoa baita ikerketa hori ere. Egia historikoa berreskuratzea lagungarri izan daiteke gatazka hobeto ulertzeko, baita euskal gizarteak gatazkari behin betiko konponbidea emateko zer urrats eman behar dituen argitzeko ere.

BIBLIOGRAFIA

1 Doktrina

A. Monografiak

BEATTIE, A.: *Playing Politics with History: The Bundestag Inquiries into East Germany*, New York eta Oxford: Berghahn Books, 2008.

CHINCHÓN ÁLVAREZ, J.: *Derecho Internacional y transiciones a la democracia y la paz: hacia un modelo para el castigo de los crímenes del pasado a través de la experiencia iberoamericana*, Madril: Parthenon, 2007.

IBÁÑEZ NAJAR, J. E.: *Justicia Transicional y las Comisiones de la Verdad*, Bogota, Otzenhausen eta Madril: Instituto Berg, 2014.

LANDA GOROSTIZA, J.-M.: *Bases para la puesta en marcha de una Comisión de la Verdad en Euskadi*, Gasteiz: Giza Eskubideen Zuzendaritza, Justizia Sailburuordetza, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzza Saila, Eusko Jaurlaritza, 2009ko martxoaren 31.

LÓPEZ ROMO, R.: *Informe Foronda: los contextos históricos del terrorismo en el País Vasco y la consideración social de las víctimas. 1968-2010*, Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, Valentín de Foronda Gizarte Historiarako Institutua, Euskal Herriko Unibertsitatea, 2014.

MCADAMS, A. J.: *Judging the Past in Unified Germany*, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

OLLÉ SESÉ, M.: *Justicia Universal para Crímenes Internacionales*, Madril: La Ley, 2008.

RIPOL CARULLA, S. eta C. VILLÁN DURÁN (zuz.): *Justicia de transición: El caso de España*, Barcelona: ICIP, 2012.

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, J.: *El derecho a la verdad en la justicia de transición española*, Luarca: AEDIDH, 2014.

TUTU, D.: *No future without forgiveness*, New York: Doubleday, 1999.

VILLÁN DURÁN, C.: *Curso de derecho internacional de los derechos humanos*, Madril: Trotta, 2002.

B. Lan kolektiboetara eginiko ekarpenak

GÓMEZ ISA, F.: «Retos de la justicia transicional en contextos no transicionales. El caso español», in S. RIPOL CARULLA eta C. VILLÁN DURÁN (zuz.): *Justicia de transición: El caso de España*, Barcelona: ICIP, 2012.

GONZÁLEZ BRINGAS, A.: «Abuelas-Madres de Plaza de Mayo: la construcción social de la memoria», in F. GÓMEZ ISA (zuz.): *El derecho a la memoria*, Bilbo: Pedro Arrupe Giza Eskubideen Institutua, 2006.

GONZÁLEZ CUEVA, E.: «¿Hacia dónde van las comisiones de la verdad?», in F. REÁTEGUI (arg.): *Justicia transicional. Manual para América Latina*, Brasilia eta New York: Trantsizioko Justiziarako Nazioarteko Zentroa, 2011.

HAYNER, P.: «¿Justicia transicional en el País Vasco? Principios básicos de análisis», in J.-M. LANDA GOROSTIZA (arg.): *Justicia transicional: propuestas para el caso vasco*, Clermont-Ferrand: Institut Universitaire Varenne, 2014.

LIRA, E.: «Verdad, reparación y justicia: el pasado que sigue vivo en el presente», en C. BERISTAIN (zuz.): *Contribución de las políticas de verdad, justicia y reparación a las democracias en América Latina*, San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2011.

MÜLLER, J. W.: «Alemania del Este: incorporación, verdad corrompida y doble división», in A. BARAHONA DE BRITO, P. AGUILAR eta C. GONZÁLEZ ENRÍQUEZ (arg.): *Las políticas hacia el pasado: juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias*, Madril: Istmo, 2002.

SILVA, E.: «El despertar de la memoria histórica en España: el papel de la sociedad civil», in F. GÓMEZ ISA (zuz.): *El derecho a la memoria*, Bilbo: Pedro Arrupe Giza Eskubideen Institutua, 2006.

C. Aldizkarietako artikulua eta beste ekarpen batzuk

AVILÉS FARRÉ, J.: «[El terrorismo en la transición democrática española](#)», Madril: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, 2004, 3. or.

BUERGENTHAL, T.: «La Comisión de la Verdad para El Salvador», in T. BUERGENTHAL eta A. CANÇADO TRINDADE (arg.): *Estudios Especializados de Derechos Humanos*, vol. 1, San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1996, 11-62. or.

CAMACHO PADILLA, F.: «[La construcción histórica de la represión en Argentina y Chile: las Comisiones de la Verdad como instrumento de narración oficial](#)», *Revista de Historia Iberoamericana*, 7. lib., 1. zka., 2014, 35-74. or.

HUMAN RIGHTS WATCH: «[El Salvador. Accountability and Human Rights: the report of the United Nations Commission on the Truth for El Salvador](#)», *News From Americas Watch*, IV. lib., 7. zka., 1993, 1-39. or.

KRIESBERG, L.: «[Paths to Varieties of Inter Communal Reconciliation](#)», Bakeari buruzko Ikerketarako Nazioarteko Erakundearen VII. Biltzar Nagusian aurkeztutako txostena, Durban: 1998ko ekainak 22-26.

PÉREZ PÉREZ, J. A. eta C. CARNICERO HERREROS: «La radicalización de la violencia política durante la transición en el País Vasco. Los años de plomo», *Historia del presente*, 12. lib., 2008, 111-128. or.

SÁNCHEZ CUENCA, I.: «La violencia terrorista en la transición española a la democracia», *Historia del presente*, 14. lib., 2009, 9-24. or.

WILHELMI, G.: «[Las otras víctimas de una transición nada pacífica](#)», 2012an, [Frankismoaren biktimen I. Biltzarrean aurkeztutako komunikazioa](#).

2 Prentsako artikulua

ESCUDERO ALDAY, R.: «[Víctimas y memoria selectiva](#)», *Dominio público*, 2012ko urtarrilaren 21a.

EUROPA PRESS: «[El Gobierno vasco visita Belfast para intercambiar experiencias en materia de paz y convivencia](#)», *El Diario*, 2014ko urtarrilaren 16a.

VÁZQUEZ, M.: «Euskadi e Irlanda del Norte colaborarán sobre las víctimas, los presos y el relato», *Deia*, 2015eko urriaren 24a.

3 Nazioarteko erakundeen dokumentuak

NAZIO BATUEN BATZAR NAGUSIA: *68/165 Ebazpena. Egia jakiteko eskubidea, A/RES/68/165 dok.*, 2014ko urtarrilaren 21ekoa.

Egiaren, justiziaren, erreparazioaren eta berriro ez gertatzeko bermeen sustapena. Egia, justizia, erreparazioa eta berriro ez gertatzeko bermeak sustatzeko Kontalari Bereziaren Txostena, A/68/345 dok., 2013ko abuztuaren 23koa.

Giza eskubideen nazioarteko arauen urraketa agerikoak eta nazioarteko zuzenbide humanitarioaren urraketa larriak jasan dituzten biktimek helegiteak jartzeko eta erreparazioak eskuratzeko duten eskubideari buruzko oinarritzko printzipioak eta jarraibideak, A/RES/60/147 dok., 2006ko martxoaren 21ekoa.

TORTURAREN AURKAKO BATZORDEA: *Torturaren aurkako Batzordearen Azken Oharrak: Espainia, CAT/C/ESP/CO/6 dok.*, 2015eko maiatzaren 15ekoa.

GIZA ESKUBIDEEN BATZORDEA: *Giza Eskubideen Batzordearen Azken Oharrak: Espainia, CCPR/C/ESP/CO/6 dok.*, 2015eko abuztuaren 14koa.

GIZA ESKUBIDEEN KONTSEILUA: *Egia, justizia, erreparazioa eta berriro ez gertatzeko bermeak sustatzeko Kontalari Bereziaren Txostena, A/HRC/27/56/add.1 dok.*, 2014ko uztailaren 22koa.

Behartutako eta Nahigabeko Desagertzeak ikertzeko Lantaldearen Txostena. A/HRC/27/49/add.1 dok., 2014ko uztailaren 2koa.

GIZA ESKUBIDEETARAKO NAZIO BATUEN GOI MANDATARIEN BULEGOA: *Zuzenbide Estatuaren Tresnak gatazka batetik atera diren gizarteetarako. Egiaren Batzordeak*, New York eta Geneva, 2006.

EUROPAKO LEGEBILTZARRA: *Ipar Irlandarako PEACE Programa.*

4 Erakunde nazionalen dokumentuak

PERTSONEN DESAGERTZEEI BURUZKO BATZORDE NAZIONALA: *Nunca Más*, 8. ed., Buenos Aires: Eudeba, 2009

Gobernu Nazionalaren eta Kolonbiako Indar Armatu Iraultzailea-Herriaren Armadaren arteko elkarrizketa mahaiaren txosten bateratua, 64. komunikatu bateratua, 2015eko abenduaren 15koa.

Gobernu Nazionalaren eta Kolonbiako Indar Armatu Iraultzailea-Herriaren Armadaren arteko elkarrizketa mahaiaren txosten bateratua, 60. komunikatu bateratua, 2015eko irailaren 23koa.

Gobernu Nazionalaren eta Kolonbiako Indar Armatu Iraultzailea-Herriaren Armadaren arteko elkarrizketa mahaiaren txosten bateratua, 53. komunikatu bateratua, 2015eko ekainaren 24koa.

5 Jurisprudentzia

GIZA ESKUBIDEEN AMERIKA ARTEKO GORTEA: *Gomes Lund kasua eta beste batzuk (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil*, 2010eko azaroaren 24ko sententzia, in *Serie C*, 219. zka.

6 Gizarte Zibileko erakunde txostenak

AMNESTY INTERNATIONAL: *Verdad, justicia y reparación. Creación de una comisión de la verdad efectiva*, POL 30/009/2007 dok., 2007ko ekainaren 11koa.

INTERNATIONAL CENTER FOR TRANSITIONAL JUSTICE: *Verdad y Memoria*.

Se terminó de editar este libro el 24 de marzo de 2016, Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas

Liburu honen edizioa 2016ko
martxoaren 24an amaitu zen, giza eskubideen urraketa larriekin eta biktimen
duintasunarekin loturiko Egia jakiteko Eskubidearen Nazioarteko Egunean

El derecho de las víctimas a la verdad debe ser respetado por el Estado. Las comisiones de la verdad desarrolladas en el derecho comparado deben inspirar a Guipúzcoa y a España para recuperar la paz social después de graves violaciones de los derechos humanos perpetradas por la dictadura del general Franco y el terrorismo de ETA, que generó a su vez una grave violencia institucional.

La Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) concentra sus actividades en la promoción del derecho humano a la paz, la erradicación de la tortura y malos tratos, la defensa de los derechos humanos de los migrantes, la recuperación de la memoria histórica sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado y el estudio de la práctica nacional en la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos, en España y otros países de lengua española.

Estatuak errespetatu egin behar du biktimek egia jakiteko duten eskubidea. Zuzenbide konparatuan izan diren egiaren batzordeak hartu behar dituzte oinarri Gipuzkoak eta Espainiak bake soziala berreskuratzeko, ezinbestekoa baita bake sozial hori Franco jeneralaren diktadurak, ETAREN terrorismoak eta azken horrek sortutako indarkeria instituzional larriak eragindako giza eskubideen urraketa larrien ondotik.

Giza Eskubideen Nazioarteko Zuzenbidearen aldeko Espainiako Elkarteak (AEDIDH) hauek ditu eginkizun behinenak: Espainian eta gaztelaniaz hitz egiten duten beste herrialde batzuetan bakerako giza eskubidea sustatzea, tortura eta tratu txarrak desagerraraztea, migratzaileen giza eskubideak babestea, iraganean gertatutako giza eskubideen urraketari buruzko memoria historikoa berreskuratzea eta Espainian giza eskubideen nazioarteko zuzenbidea zer-nola aplikatzen den aztertzea.

